

Vicerrectoría de Extensión Municipal
y Desarrollo Comunitario

UNITEC



MARCO LEGISLATIVO MUNICIPAL II



Convenio UNITEC USAID



Capacitación Desarrollo Municipal

Tegucigalpa, Enero, 2002

Tiraje Restringido, sujeto a validación

Revisión Técnico-Educativa: Lic. Amaldo Rodríguez

Esta publicación fue realizada mediante el apoyo proporcionado por la Oficina de Desarrollo Municipal e Iniciativas Democráticas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, bajo los términos de la donación del Convenio de Cooperación UNITEC - USAID 522-03040-A-5108-00. Las opiniones expresadas en ella son del autor o autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de dicha agencia internacional.

La Universidad Tecnológica Centroamérica agradece a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional su valioso apoyo, para elaborar materiales educativos orientados a la formación profesional de los recursos humanos de los municipios de Honduras. Gracias a este Convenio ha sido posible compilar este manual y hacerlo accesible a los Alcaldes, Regidores, Personal Técnico y Administrativo de las Alcaldías Municipales y Líderes Comunales. La información seleccionada será utilizada exclusivamente para fines educativos.

**Prohibida su reproducción sin permiso de UNITEC.
Tegucigalpa, M.D.C. Febrero 2002.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA
UNITEC**

Vicerrectoría de Extensión Municipal y Desarrollo Comunitario

PRESENTACION

CURSO

**MARCO LEGISLATIVO MUNICIPAL
II**

ANTECEDENTES

Hemos mencionado previamente que la Constitución de la República determina la organización social de *nuestra nación*, los principios éticos y cívicos en que se fundamenta, sus aspiraciones y visiones del futuro, para lo cual establece la estructura de leyes que determina la organización del gobierno y un marco de normas “éticas” de convivencia social armónica que permitan perpetuar los legados que han dado origen y sustentan la existencia futura de la sociedad que hemos definido como nuestra nación, siempre asociados a los principios fundamentales de: *Progreso, Orden, Justicia*.

En este sentido el conocimiento y la comprensión de los marcos legales es importante para todos los ciudadanos, pero es de mayor trascendencia su dominio por parte de quienes conformando los esquemas de los gobiernos municipales hacen el juramento constitucional de: *“Cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus Leyes*.

También señalamos como objetivos de estudio entre otros:

- a) Estudiar situaciones legales específicas de aplicación constante o recurrente cuyo claro conocimiento conduzca a mejorar la calidad de la gestión municipal en los aspectos políticos, sociales y operativos de las municipalidades. Estudiar el marco de repercusiones positivas por el cumplimiento y de sanciones, responsabilidades y consecuencias por el no cumplimiento de las leyes aplicables en el sector municipal.
- b) Identificar actores trascendentales, sus roles, responsabilidades y derechos en el marco de las leyes de aplicación en el campo municipal, tanto de los funcionarios, como de las personas y organizaciones comunitarias, y en general,
- c) Promover la correcta y mas pronta aplicación de las normas legislativas aplicables al sector municipal.

La Parte II del curso sobre “El Marco Legislativo Municipal” trata sobre:

- a) Leyes administrativas de mayor aplicación en el sector municipal.
- b) Leyes procedimentales aplicables al sector municipal
- c) Leyes operativas aplicables a sector municipal

Las *leyes administrativas* por excelencia regulan los actos administrativos definiendo procedimientos y estableciendo criterios que deben seguir los funcionarios municipales para hacer una correcta gestión administrativa.

Muchos escándalos y casos comprobados de corrupción han surgido por el incumplimiento de estas normas, atribuibles en muchos casos a la ignorancia inexcusable de la ley, a la falta de capacitación en su aplicación, pero en muchos casos a la negligencia administrativa culposa y la voluntad torcida de cometer delitos asociados a la corrupción. Las consecuencias son severas no solo en perjuicio de la hacienda nacional, los intereses ciudadanos, pero también en la *dimensión personal* de los funcionarios cuando los organismos controlares del Estado les determinan responsabilidad en la comisión de las irregularidades apuntadas ya sea por acción u omisión.

Por considerarlo de suma importancia incluimos en este manual el texto completo de:

- a) La nueva Ley de Contratación del Estado, Decreto No. 74-2001, y
- b) La también nueva Ley de Concesiones. Decreto No. 283-98.

En los demás casos únicamente señalamos los contenidos de cada una de las leyes.

Las *leyes procedimentales* señalan además rutas de acción o vías de solución de los conflictos de naturaleza administrativa como en la Ley de Procedimiento administrativo y la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En cuanto a las *leyes operacionales*, se trata de normas de aplicación general y particularmente de cumplimiento ciudadano. Definen derechos y obligaciones aplicables a la población. (Código de Salud y su Reglamento, Ley Forestal, Ley de Convivencia Social, etc)

UNITEC espera que el presente manual sea de utilidad para promover y actualizar la práctica de la legislación municipal y el marco complementario de leyes administrativas en beneficio no solo de los intereses ciudadanos y de la Municipalidad, pero también en la tranquilidad y la satisfacción del servicios cumplido por parte de los funcionarios y empleados municipales.

Finalmente señalamos que el planteamiento formativo de UNITEC no solo se concreta en la transmisión de conocimientos, también considera que es trascendente la formación de actitudes, la promoción de valores y el cumplimiento del compromiso social; bajo este contexto se entiende que las personas capacitadas actuarán de agentes de cambio y transformación del entorno de sus comunidades y de sus familias.

Tegucigalpa, Febrero, 2002.

d

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA

UNITEC

Programa : Desarrollo Municipal.

Curso sobre

Marco legislativo municipal II

CONTENIDO DEL MANUAL

	Página
FILOSOFIA DE LA CAPACITACION DE UNITEC	1
LIBRO DE ORO DEL LIDER EMPRENDEDOR	2
DECÁLOGO DEL ALCALDE	9
LEYES ADMINISTRATIVAS	
Ley de Contratación del Estado (Enunciado y texto íntegro)	11
Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y De la infraestructura Nacional (Enunciado y texto íntegro)	35
Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos. (Enunciado y texto íntegro)	43
LEYES PROCEDIMENTALES	
Ley de Procedimiento Administrativo (Enunciado del contenido)	55
Ley de la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo (Enunciado del contenido)	58
Marco Teórico del Proyecto de Código Penal de Honduras	60
Índice del Contenido del Proyecto de Código Penal de Honduras	71

. e'

LEYES OPERACIONALES
(Enunciados de sus contenidos)

Código de Salud	77
Reglamento de Salud Ambiental	79
Ley general del Ambiente	80
Reglamento General de la Ley del Ambiente	82
Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de impacto Ambiental.	84
Ley Forestal vigente	85
Contenido del proyecto de nueva Ley Forestal	87
Ley Temporal Zonas Inhabitables (Contenido íntegro)	89



FILOSOFIA DE LA CAPACITACION DE UNITEC

¿Cual es el objetivo y consecuentemente el logro mas importante y significativo que UNITEC busca alcanzar en sus programas de capacitación?

Las necesidades de transformación de los Municipios en todo el país son inmensas, tanto en sus comunidades como en sus autoridades, pretender hacer estos cambios en forma directa nos involucraría en un esfuerzo en tiempo y recursos que no podríamos afrontar.

A cambio de esto, buscamos mediante el desarrollo personal y *la motivación por el logro ético* formar líderes emprendedores con el interés y la iniciativa de transformar sus instituciones y su entorno comunitario, líderes pro-activos, con iniciativa propia, conscientes de su responsabilidad social y comprometidos con pasión por el éxito y la excelencia.

Buscamos formar personas que tengan cada una el orgullo de poseer un certificado de UNITEC que no solo acredite la adquisición de conocimientos prácticos, pero sobre todo que lo identifique como un *auténtico emprendedor* capaz de generar cambios en su Municipio.

Este es el espíritu de la capacitación UNITEC.

Vicerrectoría de Extensión Municipal y
Desarrollo Comunitario

LIBRO DE ORO DEL LIDER EMPRENDEDOR

REGLAS PARA EL LIDERAZGO EMPRENDEDOR

Que es un líder

Líder es cualquier persona en la que recae la responsabilidad o el compromiso con respecto a un grupo al cual está plenamente identificado, para conducirlo al logro futuro de objetivos particulares o ubicarlo en horizontes más prometedores.

El grupo puede ser su propia familia, un círculo de sus amigos o compañeros de trabajo, su comunidad, su empresa o cualquier otra organización; lo importante es que el líder tenga sentido de pertenencia e interdependencia con el grupo y consecuentemente tenga conciencia de solidaridad, fidelidad y compromiso con sus integrantes por compartir con ellos diversas identidades, intereses o propósitos y además afronten un destino común.

Por consiguiente, líder no es únicamente la persona que dirige a los demás, líder es la persona que trabaja con compromiso por los demás.

Un ejemplo sencillo y bueno de lo que es liderazgo, es el papel de tal que asume cualquier *buen padre* de familia. Bajo este contexto debe entenderse y promoverse el liderazgo y muy particularmente cuando se trate de la vida en comunidad.

Que es un líder emprendedor.

Es el líder en cual recaen ciertos atributos que hacen mas eficiente y efectiva su labor de llegar a resultados.

Estos atributos se refieren a características de la persona en cuanto a sentido de innovación y de cambio, actitud visionaria, motivación por logros, capacidad para tomar iniciativas, afrontar retos y actuar pro-activamente, compromiso ante el grupo, capacidad de trabajo y de planificación, habilidades para desempeñarse en situaciones adversas, trato apropiado a las personas, pasión por la calidad y la excelencia y la búsqueda constante y tenaz del éxito.

Todo esto es un estado de ánimo, una condición inherente a la sicología de cada persona, actitudes que deben tenerse aprenderse, ejercitarse y potenciarse.

Que es un logro ético.

Es un resultado de trabajo ajustado a normas de convivencia armónica de la sociedad, es decir que respeta la dignidad, los derechos, las buenas costumbres, la cultura, las leyes y las libertades de las personas y en general los propósitos del bienestar común.

Porque es importante el liderazgo emprendedor.

La transfiguración de la sociedad a causa de la velocidad de los cambios tecnológicos, la apertura de las comunicaciones, la globalización de conceptos económicos y la necesidad de competir interna y externamente, ubica al liderazgo como el factor clave y el más importante por encima de cualquier factor para el desarrollo y el éxito de la sociedad y la empresa moderna.

Son los líderes quienes toman las iniciativas para encausar y transformar las circunstancias de su entorno en la búsqueda del bienestar y desarrollo de sus familias, sus empresas, sus organizaciones, su comunidad, etc.

Sin líderes emprendedores no es posible generar los cambios con los cuales puedan sobrevivir nuestras familias, nuestras empresas, nuestras comunidades, nuestras naciones en un mundo tan competitivo y lleno de retos como el que actualmente vivimos.

El Profesor Peter Drucker, impulsor de la administración moderna ha dicho: “Los líderes son el recurso básico de cada institución.”

Hacia un liderazgo compartido

En particular nuestras comunidades están experimentando presiones por cambios en los valores sociales y por la disponibilidad cada vez más restringido de recursos, situaciones que combinadas, que dificultan mantener el estado de convivencia y desarrollo deseados. La solución de esta problemática que demanda el concurso de habilidades especiales, nos lleva a pensar que el *liderazgo tradicional* por poder y rangos que descansa en las estructuras de subordinación donde el poder está en la cumbre, debe cambiar a una nueva forma de liderazgo que reconoce que el poder está en la base, que el pensamiento no es de un individuo sino de la colectividad, un liderazgo que no haga diferencia entre quien da un orden y quienes las obedecen y que se enfoca al beneficio común, a los resultados de mutua conveniencia a pensar en la colaboración y el compromiso. Esta nueva forma de liderazgo se denomina “Liderazgo compartido”.

Cuando el liderazgo compartido entra en función las personas abordan un problema en forma colectiva, se involucran mutuamente para definir el trabajo que se va a hacer, facilitando la interacción, el entusiasmo y el ritmo de acción de forma que se puedan alcanzar los resultados previstos en un ambiente donde se fortalece el espíritu y la visión de grupo o de comunidad; es decir, que se incrementa la voluntad de las personas por actuar en conjunto para afrontar sus problemas, oportunidades y retos comunes.

REGLAS PARA EL LIDERAZGO EMPRENDEDOR.

REGLA 1 CAPACITACION

1.1 Tres condiciones perfeccionan al ser humano: su salud, su auto-valía y su *educación*, pero el elemento más vinculante e incidente es la educación porque esta promueve a la salud y la auto valía

-
- 1.2 La Educación es la base y la condición fundamental para el desarrollo personal y de las naciones. Nadie ha tenido desarrollo y prosperidad si previamente no ha tenido educación.
 - 1.3 El recurso humano capaz es el recurso más valioso de una sociedad, de una nación porque solo con su intervención se puede generar riqueza.
 - 1.4 La educación sigue siendo la inversión más rentable.
 - 1.5 Vivimos en la era de los conocimientos. *Vale mas quien sabe más.*
 - 1.6 Vivimos en la era del cambio y de la velocidad. Los conocimientos se renuevan y se amplían con mas rapidez; ya no hay conocimientos permanentes, solo hay formación permanente.
 - 1.7 Antes la educación se concentraba en una etapa temprana de la vida, ahora es un proceso permanente disperso a lo largo de toda la vida.
 - 1.8 Antes la educación se ubicaba en los recintos académicos, ahora es un proceso abierto, amistoso y más accesible, revolucionado por el avance de las comunicaciones.
 - 1.9 Aunque tenemos mas oportunidades y facilidades de formación en escuelas, academias, universidades, la internet, etc.; pero la *universidad de la vida* (lo que la vida nos enseña), sigue siendo la institución que en definitiva modela nuestro talento.
 - 1.10 *El nuevo paradigma de la educación es el conocimiento aplicable.*

REGLA 2 MOTIVACION POR LOS LOGROS

- 2.1 Alcanzar logros es una condición inherente al ser humano. Cada acción humana se orienta a lograr objetivos de alimentación , refugio, estima, etc.
- 2.2 No hay motivación para actuar sin objetivos. Se deben valorar los objetivos para afianzar la motivación. La fuerza de la motivación determinará la intensidad del esfuerzo para alcanzar el objetivo.
- 2.3 El éxito es la condición de alcanzar logros. Debe generarse motivación por el éxito. Nadie tiene éxito si no lo desea.
- 2.4 Los logros son el premio a la motivación. Son el alimento del ego. Solo los logros fortalecen la auto-valía de las personas.
- 2.5 Valen tanto los logros materiales como los logros emocionales.
- 2.6 La ambición, la obsesión y la pasión son deseos fuertes de logro; se deben orientar estos impulsos a logros constructivos.
- 2.7 Los logros deben valorarse en función de las circunstancias de cada persona y no en base a las circunstancias de los demás.
- 2.8 No deben acomodarse o limitarse los logros a las circunstancias, si es necesario, deben modificarse las circunstancias para ampliar los logros.

REGLA 3 ESPIRITU INNOVADOR, DE CAMBIO Y ACTITUD VISIONARIA

- 3.1 El cambio es una ley universal. Es aplicable a todo y a todos en la tierra.
- 3.2 Es irracional la resistencia al cambio, pero es más irracional hacer cambios sin saber por que se hacen.
- 3.3 Todo cambio debe ser constructivo, es decir, debe promover el éxito o mejorar condiciones de vida.
- 3.4 La realidad y la certidumbre deben ser condiciones de cualquier cambio. El azar y la aventura pueden revertir el propósito de un cambio y volverlo destructivo.
- 3.5 El progreso requiere cambio y el cambio requiere acción. Solo la creatividad genera cambios.

- 3.6 Para promover el cambio se deben aceptar retos y tomar iniciativas cada día.
- 3.7 Pensemos en el futuro. Preparémonos para el futuro. Trabajemos para el futuro.
- 3.8 La visión es la *imagen/objetivo* de lo pensamos ser o alcanzar en el futuro. Siempre debe establecerse una visión positiva del futuro, pero no debe restringirse esta visión a pesar de las circunstancias negativas que circundan a las positivas. Jamás debemos ser *profetas del desastre*.
- 3.9 Es importante desarrollar el talento de ver y aprovechar las oportunidades. Algunos problemas son oportunidades disfrazadas. Las oportunidades se buscan, muy difícilmente llegan por si solas.
- 3.10 Cada oportunidad es una puerta abierta a la riqueza y al servicio a los demás.

REGLA 4 CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN Y DE CONCERTACIÓN POR RESULTADOS

- 4.1 La negociación es el arte de conducirnos en la vida. Por medio del trato, del arreglo, del acuerdo, de la concertación nos ubicamos en nuestros espacios de poder, ejercemos nuestros derechos, obtenemos nuestras satisfacciones, etc. Negociamos en todo momento, toda la vida, negociamos dentro de nuestra familia, en la calle, en el trabajo, en el comercio.
- 4.2 Se necesita talento para negociar. La negociación es un acto de crear armonía, de confianza mutua y de valores positivos. (talento comunicativo, honestidad, buena fe, veracidad, transparencia, armonía y satisfacción mutua)
- 4.3 La filosofía ganar-ganar (ganas tu, gano yo) es inherente a cada negociación, trato o acuerdo exitoso.
- 4.4 Flexibilidad. Habrá veces en que se necesite hacer concesiones para que el trato sea ventajoso para ambas partes.
- 4.5 Dada la naturaleza humana el desacuerdo es inevitable, pero no debe ser una condición permanente.
- 4.6 Generado un conflicto por desacuerdos, debe a partir de ese momento, generarse la voluntad de concertar. El conflicto permanente es negación de la armonía en casi todas sus acepciones.
- 4.7 El conflicto o la confrontación generan ineficiencia y costos para ambas partes. El mundo ha pasado de la era de los conflictos confrontativos a la era de la concertación porque necesitamos invertir nuestros escasos recursos en el bienestar y no en las confrontaciones.
- 4.8 Se requiere mas talento para resolver un conflicto que para generarlo.
- 4.9 Muchos conflictos se generan por afán de notoriedad y de poder y no por afán de resultados.
- 4.10 En nuestra cultura de convivencia hay muchos *apóstoles del conflicto* (ennavajadores, intrigantes) pero pocos *apóstoles de la paz* (mediadores, conciliadores).
- 4.11 Para ganar se necesitan aliados. Vivimos en la época de las alianzas y los bloques.
- 4.12 Analice minuciosa y objetivamente a sus aliados y amistades. Construya alianzas (estratégicas) que faciliten y aceleren el logro de sus resultados.

REGLA 5. PLANIFICACIÓN

- 5.1 Un plan dice lo que debe hacerse y debe considerar la mejor manera de hacerlo.
- 5.2 Las cuatro etapas para trazar un plan son: Investigación planificativa, La organización, Decisión y toma de acción y Revisión de lo que vayamos ejecutando.
- 5.3 Todo plan implica valoración de riesgos. Los niveles de incertidumbre deben manejarse en sus mínimas expresiones.
- 5.4 No improvise ni haga suposiciones. *Las improvisaciones y las suposiciones son madres de muchos desastres.*
- 5.5 Agudice su habilidad para tomar decisiones acertadas, sin pérdida de tiempo.

- 5.6 Modifique y revise sus planes cuando sea necesario. La revisión no necesariamente surge del error. Una modificación frecuentemente representa la forma más efectiva de reafirmar los objetivos.
- 5.7 Para el que no sabe dónde va, cualquier camino es bueno. Los planes deben estar enfocados a un objetivo.
- 5.8 No altere su meta final debido a cambios en los planes.
- 5.9 La fe basada en la realidad genera confianza en los resultados y puede ser un elemento de los planes, pero no su consistencia total.
- 5.10 Nadie formula planes para fracasar, pero muchos fracasan por no planificar.

REGLA 6 . ACCIÓN Y TRABAJO.

- 6.1 Cualquier cosa no empleada deja de ser útil.
- 6.2 El éxito y la inactividad son irreconciliables. Nada se logra sin trabajo, solo el trabajo genera riqueza.
- 6.3 La acción es el resultado de una motivación. Se puede aumentar la energía ampliando la valoración de las metas.
- 6.4 El pensamiento debe preceder a la acción; ¡Pensemos y actuemos! El éxito solo llega a los pensadores que actúan. Pensemos en grande y actuemos en grande.
- 6.5 Entusiasmo, constancia y autodisciplina son elementos necesarios para una acción efectiva.
- 6.6 El entusiasmo genuino debe basarse en expectativas y premisas reales..
- 6.7 La diversión es un enemigo de la fatiga. El trabajo es trabajo, el esparcimiento es esparcimiento; cada cual a su tiempo. Trabaje y tenga esparcimiento. ¡Pero no exagere en ambos extremos!. El trabajo podrá ser agradable, pero nunca es diversión.
- 6.8 La mayoría de las personas sufren el temor de fracasar. Analicemos y conozcamos el problema antes de actuar.
- 6.9 El análisis situacional es fundamental para reafirmar las acciones y la búsqueda del éxito.
- 6.10 La única justificación del trabajo son los resultados.
- 6.11 Nunca se debe retrasar la acción. Actuemos siempre de inmediato.

REGLA 7. PERSEVERANCIA

- 7.1 Los proyectos que valgan la pena deben de llevarse a cabo.
- 7.2 Mantener el rumbo constante es fundamental, no obstante los contratiempos, dudas o dificultades.
- 7.3 La perseverancia se desvanece ante la frustración y el negativismo.
- 7.4 La perseverancia se fortalece por: La motivación. La insistencia. La tolerancia. El esfuerzo. La consistencia La corrección oportuna. Los conocimientos. La convicción. La autodisciplina.
- 7.5 Siempre somos juzgados por lo que terminamos y no por lo que empezamos.
- 7.6 No hay peor pérdida que recorrer un camino que no conduce a ningún lado.
- 7.7 Metas. Planes y acción no son suficientes... se debe usted perseverar hasta alcanzar el objetivo.

REGLA 8. PERSONALIDAD Y EL ESTILO

- 8.1 El éxito casi siempre esta asociado a la personalidad

- 8.2 La personalidad es la expresión exterior de los impulsos interiores, por lo tanto la verdadera personalidad no se puede ocultar.
- 8.3 Una personalidad bien ajustada en su personalidad es aquella que interactúa armoniosamente con su entorno, con su ambiente y con las personas que lo rodean.
- 8.4 La forma en que nos tratan es la respuesta a nuestra personalidad, por eso tratemos a los demás como deseamos que los demás nos traten a nosotros.
- 8.5 La humildad es el camino para despojarse de rasgos negativos de la personalidad.
- 8.6 Cuando el ego es fuerte y sano trae consigo al éxito; si es fuerte y enfermo, lo rechaza.
- 8.7 Un ego sano promueve las reacciones positivas necesarias para ejercer el liderazgo.
- 8.8 Seamos naturales en el trato, no tratemos de sobre impresionar a las personas. Seamos siempre nosotros mismos.
- 8.9 Perder el control es ofensivo a los demás y perjudicial para sí mismo. Reaccionemos favorablemente en todo momento.
- 8.10 Desarrollemos habilidades comunicativas y sobre todo sepamos escuchar.
- 8.11 Desarrollemos sentido de comunidad y de identificación con quienes nos rodean. De nada sirve la personalidad si no es por los demás, *Tomemos y desarrollemos interés sincero por los demás.*
- 8.12 Apliquemos poder de convencimiento y no poder de imposición.

REGLA 9. LA MENTE DEL TRIUNFADOR

- 9.1 El potencial de una persona y el éxito están en la mente.
- 9.2 El camino exitoso se inicia con un buen estado de ánimo, con confianza en si mismo y en la existencia de un Ser Superior para reafirmar el sentido de la vida.
- 9.3 Lo que se siembre en la mente se cosechará en su ambiente
- 9.4 La inteligencia es la habilidad de razonar, el talento es la capacidad de aplicar el razonamiento.
- 9.5 La emotividad es la fuerza con que se responde a los eventos de la vida. El optimismo es siempre consecuente al éxito.
- 9.6 Aprenda del pasado, viva en el presente y proyecte para el futuro; pero no se complique la vida con los errores de ayer o las tribulaciones de mañana.
- 9.7 Nadie ocupa un lugar predestinado en la vida. La vida es lo que uno hace de ella. El fatalismo conduce al conformismo y al estancamiento. El futuro siempre es una nueva oportunidad.
- 9.8 Limpiemos la mente de telarañas y fantasmas.
- 9.9 Entreguémonos con pasión a la calidad y a la excelencia en todo lo que hagamos.
- 9.10 El triunfador siempre tiene una actitud abierta y competitiva.

REGLA 10. CULTURA DE VALORES

- 10.1 Los valores son las bases de la armonía consigo mismo y la convivencia armónica con los demás. Reflejan el espíritu del Bien y de Dios.
- 10.2 La verdad, la honestidad y la sinceridad construyen la confianza y la armonía.
- 10.3 No robo, No miento, No engaño son los fundamentos del comercio leal, de la buena fe y de la negociación.
- 10.4 Solo los valores positivos le dan sentido a la vida.
- 10.5 Los antivalores son lastre que intranquilizan y agobian la mente.
- 10.6 Aplica la justicia en todos tus actos.
- 10.7 Los valores esenciales del líder son siempre: inspirar confianza y actuar con justicia.

GANADOR *VERSUS* PERDEDOR

El ganador es siempre parte de la respuesta

El perdedor es siempre parte del problema

El ganador siempre tiene un plan

El perdedor siempre tiene una excusa

El ganador dice: "Déjeme hacerlo por Usted"

El perdedor dice: "Esta no es mi responsabilidad"

El ganador ve una respuesta en cada problema

El perdedor ve un problema en cada respuesta

El ganador dice: "Puede ser difícil, pero es posible"

El perdedor dice: "Puede ser posible, pero es muy difícil"

El ganador ve siempre las oportunidades

El perdedor ve siempre las dificultades

El ganador resuelve los conflictos

El perdedor genera los conflictos

La confianza

En nuestra organización trabajamos con el espíritu de la *CONFIANZA*.

Trabajar con *confianza* es un estilo de vida en el cual las relaciones de las personas se colocan por encima de todas las cosas.

La *confianza* es el valor que permite llevar una buena y cercana relación entre los que trabajamos en diferentes posiciones y rangos. Esta armonía se traduce en motivación y eficiencia.

En esta organización no trabajamos por celo y control de la autoridad, trabajamos por motivación, trabajamos con *confianza*.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA
Vicerrectoría de Extensión Municipal y Desarrollo Comunitario

Elaborado por *ROMEO UCLES*

Lecturas: Arthur C. Clark, O. Mandino, Internet (Shared Leadership), artículos Peter Drucker

DECALOGO DEL ALCALDE

(Aplicable también a funcionarios de la Corporación Municipal)

Ser Alcalde es un compromiso permanente con el desarrollo, la integridad y la legalidad, los valores morales y cívicos; para cumplir, DEBO SER:

I DEMOCRATICO

Soy Alcalde por la voluntad popular, no tomaré decisiones a espaldas de la comunidad y estaré siempre dispuesto a someter mis actos de gobierno al juicio público en cabildos abiertos.

II HONESTO

Seré insobornable, no aceptaré favores o prebendas por mis servicios, seré transparente, practicaré la honestidad y combatiré el robo, la mentira, el engaño y el enriquecimiento ilícito.

III JUSTO

La justicia será la guía de mis actos públicos y la legalidad la práctica cotidiana. Seré objetivo e imparcial al aplicar la autoridad que se me ha depositado. Jamás concederé favores inmerecidos, ni abusaré de mi autoridad.

IV DILIGENTE

Actuaré con entusiasmo, prontitud, dinamismo. Buscaré la eficiencia y la calidad para sellar con ellas todos mis resultados. Seré incansable en una faena sin horario. Cada oportunidad será un reto.

V SERVICIAL

Serviré a mi comunidad con devoción permanente, serviré con excelencia sin esperar la recompensa en dinero y aplauso, serviré por el mérito y la devoción de servir.

VI PRUDENTE

Manejaré y cuidaré el patrimonio municipal como el de mi propia familia, seré juicioso para gastar. Buscaré el mejor beneficio al menor costo posible. No improvisaré, nijugaré con las finanzas.

VII PROGRESISTA

Buscaré el progreso de mi Municipio en todos los rincones. El anhelo de una mejor vida para los ciudadanos será siempre la razón de mi trabajo. No dejaré espacio para la indiferencia y la apatía.

VIII LIDER

Seré siempre abanderado en los buenos actos de gobierno, formaré equipos responsables, motivaré sus acciones, me acercaré a la comunidad y fortaleceré su acción gremial. Jamás olvidaré que las personas son lo mas valioso y respetaré su dignidad. Seré siempre un líder responsable. Fortaleceré a mi Corporación Municipal.

IX HUMILDE

Serviré con humildad y con decencia porque estoy sometido al cumplimiento de las leyes, la función del servicio público, la voluntad popular y el bien común. Respetaré los valores y la cultura

X EJEMPLAR

Inspiraré con el ejemplo de ética en mi vida privada y en mi vida pública. Estaré comprometido con el honor, la dignidad, la superación y la nobleza para merecer siempre el respeto de mis ciudadanos. Seré siempre buen ciudadano.

LEYES ADMINISTRATIVAS

- **Ley de Contratación del Estado
(Enunciado y texto íntegro)**
- **Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y
de la infraestructura Nacional
(Enunciado y texto íntegro)**
- **Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores
Públicos.
(Enunciado y texto íntegro)**

LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

Antecedentes

Esta Ley contenida en el Decreto Legislativo 74-2001 del 1 de Junio 2001, fue publicada en la Gaceta (Num. 29,583) el día 17 de Septiembre 2001, y ha entrado en vigencia veinte (20) días después de esta última fecha. *Tiene como propósito regular los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.*

Sustituye a la antigua Ley de Contratación del Estado contenida en el Decreto No. 148-85 del 29 de Septiembre 1985, la cual ya no se acomodaba a los requerimientos de la gestión moderna y las necesidades de promover la transparencia y la competencia para dar confiabilidad y eficiencia al proceso de adquisición de bienes y servicios para el Estado. Se aplica a la Administración Pública centralizada y descentralizada.

Se trata de una nueva Ley que se acondiciona mejor al entorno moderno de nuestras sociedades que exigen la transparencia, la libre e igual competencia, así como la incorporación de medios tecnológicos modernos para garantizar la confianza de que en la adquisición de los bienes y servicios por parte del Estado se actúa en forma eficiente y honesta, es decir, que no se incurre en delitos de corrupción, negligencia u otros actos administrativos que conduzcan a la pérdida o el despilfarro de los recursos públicos.

Ley de Contratación del Estado

Contenido

Capítulo I Disposiciones Generales, Ámbito y Régimen Jurídico.

- Art. 1. Ámbito de aplicación
- Art. 2. Otros contratos
- Art. 3. Régimen Jurídico
- Art. 4. Libertad de pactos
- Art. 5. Principio de eficiencia
- Art. 6. Principio de publicidad y transparencia
- Art. 7 Principio de igualdad y libre competencia.
- Art. 8. Materias excluidas.
- Art. 9. Situaciones de emergencia.
- Art. 10. Control de la ejecución

Capítulo II. Disposiciones Comunes.

Sección primera: De la competencia de los órganos administrativos.

- Art. 11. Organos competentes.
- Art. 12. Organos competentes para adjudicar
- Art. 13. Contratos de exoneración o con defectos en el siguiente periodo de gobierno.
- Art. 14. Poder Legislativo, Judicial y otros entes públicos.

Sección segunda: Capacidad de los contratistas

- Art. 15. Aptitud para contratar e inhabilidades.
- Art. 16 Funcionarios cubiertos por la inhabilidad.
- Art. 17. Ofertas en consorcio
- Art. 18. Declaración jurada.
- Art. 19. Nulidad de los contratos.
- Art. 20. Acreditación de empresas nacionales
- Art. 21. Acreditación de empresas extranjeras.
- Art. 22. Aplicación de legislación nacional.

Sección tercera. Requisitos previos al inicio del procedimiento.

- Art. 23. Requisitos previos
- Art. 24 Estimación de la contratación.
- Art. 25. Prohibición de subdividir contratos.
- Art. 26. Inicio del procedimiento de contratación.

Sección cuarta. Financiamiento de los contratos.

- Art. 27. Nulidad por falta de presupuesto.
- Art. 28. Pagos al contratista
- Art. 29. Financiamiento por los contratistas.

Capítulo III Estructura Administrativa

Sección primera: Oficina normativa de contratación y adquisiciones.

- Art. 30. Oficina normativa.
- Art. 31. Funciones de la oficina normativa.

Sección segunda.: Órganos responsables de los procedimientos.

- Art. 32. Organos responsables.
- Art. 33. Comisión de evaluación.

Sección tercera: Registro de proveedores y contratistas.

- Art. 34. Registro de proveedores y contratistas.
- Art. 35. Registro de contratos.
- Art. 36. Requisitos de inscripción y efectos.
- Art. 37. Trámite de inscripción

Capítulo IV. Procedimientos de contratación

Sección primera: Definición de los procedimientos

- Art. 38. Procedimiento de contratación.

Sección segunda: Disposiciones comunes.

- Art. 39. Pliego de condiciones.
- Art. 40. No discriminación en el pliego de condiciones.

Sección tercera: Licitación pública

- Art. 41. Pliego de condiciones
- Art. 42. Licitación pública internacional.
- Art. 43. Precalificación
- Art. 44. Alcance de la precalificación
- Art. 45. Tramitación de la precalificación
- Art. 46. Invitación a licitar
- Art. 47. Oferta
- Art. 48. Limitación de ofertas
- Art. 49. Rechazo de ofertas colusorias
- Art. 50. Tramitación de la licitación
- Art. 51. Adjudicación.
- Art. 52. Adjudicación por criterios objetivos de evaluación
- Art. 53. Margen de preferencia nacional
- Art. 54. Pago en moneda extranjera
- Art. 55. Motivación de la adjudicación.
- Art. 56. Retiro de oferta por falta de notificación
- Art. 57. Licitación desierta o fracasada
- Art. 58. Falta de formalización.

Sección cuarta: Licitación privada

- Art. 59. Supuestos generales
- Art. 60. Supuestos específicos

Sección quinta: Concurso

- Art. 61. Objeto del concurso
- Art. 62. Evaluación de las propuestas

Sección sexta: Contratación directa

- Art. 63. Supuestos

Capítulo V Contrato de Obra Pública

Sección primera: Disposiciones generales

- Art. 64. Concepto de obra pública
- Art. 65. Objeto de la obra pública
- Art. 66. Contrato de conservación de la red vial
- Art. 67. Aportes de la administración
- Art. 68. Requisitos previos al inicio de la obra
- Art. 69. Obligaciones de la administración
- Art. 70. Secciones o etapas.

Sección segunda: Ejecución

- Art. 71. Ejecución de la obra

Art. 72. Plazo e la ejecución
Art. 73. Pago de las obras
Art. 74. Revisión de precios
Art. 75. Plazo
Art. 76. Utilización de índices u otros procedimientos
Art. 77. Tramitación de las exoneraciones
Art. 78. Fiscalización de bienes exonerados.
Art. 79. Investigación de irregularidades.
Art. 80. Recepción de la obra.
Art. 81. Entregas parciales

Sección tercera: Supervisión

Art. 82. Supervisión

Capítulo VI: Contrato de suministro

Sección primera: Disposiciones especiales

Art. 83. Concepto
Art. 84 Prohibición de compra de bienes usados.
Art. 85. Obras accesorias.

Sección segunda: Ejecución

Art. 86. Ejecución del suministro
Art. 87. Riesgo del contratista
Art. 88. Entrega
Art. 89 Inspección
Art. 90. Certificación de la calidad de los productos
Art. 91. Pagos.
Art. 92. repuestos.
Art. 93. Plazo de la garantía

Capítulo VII Contrato de consultoría

Art. 94. Concepto
Art. 95. Precalificación
Art. 96. Fijación del precio
Art. 97. Detalle de los contratos
Art. 98. Aplicación de regulaciones del contrato de obra pública.

Capítulo VIII Garantías

Art. 99. Garantía de mantenimiento de la oferta
Art. 100. Garantía de cumplimiento
Art. 101. Vigencia de la garantía de cumplimiento

Art. 102. Ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento
Art. 103. Aumento de la estimación del contrato
Art. 104. Garantía de calidad
Art. 105. Garantía por anticipo de fondos
Art. 106. Garantía en los contratos de consultoría.
Art. 107. Definición de las garantías.
Art. 108. Verificación de las garantías.
Art. 109. Ejecución de las garantías.

Capítulo IX. Formalización y derecho de las partes

Sección primera: Formalización de los contratos

Art. 110. Formalización
Art. 111. Plazo de la formalización.
Art. 112. Documentos públicos.
Art. 113. Registro de contratos.

Sección segunda: Cesión y subcontratación

Art. 114. Cesión de contratos
Art. 115. Requisitos para la cesión
Art. 116. Subcontratación
Art. 117. Requisitos para la cesión y subcontratación
Art. 118. Formalización de la cesión.

Sección tercera: Prerrogativas de la administración

Art. 119. Prerrogativas
Art. 120. Interpretación de los contratos
Art. 121. Modificación de los contratos
Art. 122. Forma de la modificación
Art. 123. Fundamento y efecto

Sección cuarta: Derechos de los contratistas

Art. 124. Derechos de los contratistas
Art. 125. Solicitud de modificación de plazo.

Sección quinta: Terminación y liquidación

Art. 126. Terminación
Art. 127. Causas de resolución

Art. 128. Resolución imputable al contratista
Art. 129. Resolución imputable a la administración
Art. 130. Supuestos de liquidación
Art. 131. Control de la liquidación

Capítulo X De las sanciones

Sección primera: Generalidades

Art. 132. Procedimiento de sanción
Art. 133. Responsabilidad penal y patrimonial

Sección segunda: Sanciones a funcionarios o empleados públicos

Art. 134. Suspensión sin goce de sueldo.
Art. 135. Despido sin responsabilidad patronal
Art. 136. Remisión al régimen disciplinario.

Sección tercera: Sanciones a particulares

Art. 137. Sanciones
Art. 138. Procedimiento
Art. 139. Sanciones de suspensión hasta por un (1) año
Art. 140. Sanciones de suspensión entre un (1) año y cinco (5) años.
Art. 141. Límite de las sanciones

Capítulo XI Mecanismos de impugnación

Sección única: Aclaraciones ya recursos

Art. 142. Actos recurribles

Capítulo XII Disposiciones transitorias y finales

Sección primera: Disposiciones transitorias

Art. 143. Disposiciones en suspenso
Art. 144. Efecto de las sanciones
Art. 145. Contratos anteriores

Sección segunda: Disposiciones finales

Art. 146. Normas supletorias
Art. 147. Declaratoria de interés público.
Art. 148. Criterios para fijar el precio de la asistencia.
Art. 149. Participación de empresas nacionales
Art. 150. Transferencia de tecnología
Art. 151. Participación de consultores nacionales
Art. 152. Restricción para construcción
Art. 153. Costo de pliego de condiciones
Art. 154. Contratos de asistencia técnica, agropecuaria, forestal, biodiversidad, recursos naturales y ambiente.
Art. 155. Adquisición de maquinaria y equipo usado
Art. 156. Derogatoria
Art. 157. Reglamentación
Art. 158. Vigencia



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
E.N.A.G.

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXXV TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2001 NUM. 29,583

Poder Legislativo

DECRETO No. 74-2001

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que el Artículo 360 de la Constitución de la República, dispone que los Contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, de compra-venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la Ley.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contratación del Estado contenida en el Decreto No. 148-85 de fecha 29 de septiembre de 1985, se vuelve obsolescente en la medida que la adquisición de bienes y servicios, por parte de la administración pública, demanda de una mayor transparencia y agilidad, así como, de una adecuación a las condiciones actuales de comercio de bienes y servicios.

CONSIDERANDO: Que los mecanismos de gestión pública, propios de un Estado moderno, deben ajustarse a las exigencias del nuevo entorno, fundamentado en la publicidad, la transparencia, la libre competencia y la igualdad, así como, la incorporación de los medios de tecnología electrónica, con el propósito de actualizar y dar confiabilidad a los procesos de contratación que realiza el Estado.

CONSIDERANDO: Que es de interés público disponer de un instrumento jurídico que regule la contratación para la ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios por parte de la Administración Pública, asegurando la equidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos estatales.

POR TANTO,

DECRETA:

La siguiente,

LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES, AMBITO Y REGIMEN JURIDICO

ARTICULO 1.-Ambito de aplicación. Los contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren

CONTENIDO

PODER LEGISLATIVO

Decreto No. 74-2001

Junio, 2001

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

Acuerdos Nos. 763-95, 764-95, 782-95, 787-95, 788-95 y 790-95

Junio, 1995

AVISOS

los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, se registrarán por la presente Ley y sus normas reglamentarias.

La presente Ley es igualmente aplicable a contratos similares que celebren los Poderes Legislativos y Judicial o cualquier otro organismo estatal que se financie con fondos públicos, con las modalidades propias de su estructura y ejecución presupuestaria.

En todo caso, en la medida que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con organismos de financiamiento externo establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán éstas últimas; en todos los demás aspectos en que no exista contradicción, la contratación se registrará por la presente Ley.

Los contratos de gestión de servicios públicos, de concesión de uso del dominio público o de concesión de servicios u obras públicas, se registrarán por las disposiciones legales especiales sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios generales de la presente Ley.

ARTICULO 2.-Otros contratos. Los contratos de compra-venta, permuta, donación, arrendamiento, préstamo u otros de contenido patrimonial que tenga que celebrar la Administración Pública, se regularán en cuanto a su preparación, adjudicación o formalización por las disposiciones legales especiales y en su defecto, por las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias, sin perjuicio de las solemnidades o requisitos de forma que para la validez de dichos contratos exigiere el Derecho Privado.

En cuanto a sus efectos y extinción, serán aplicables las normas del Derecho Privado, salvo lo que establecieren normas legales especiales.

ARTICULO 3.-Régimen Jurídico. El régimen jurídico de las contrataciones a que se refiere el Artículo 1 de la presente Ley será de Derecho Administrativo, siendo competente para conocer de las controversias que resulten de los mismos la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En cuanto a los contratos a que se refiere el Artículo anterior, serán competentes para conocer de las controversias que resulten de su ejecución los Tribunales de lo Civil; no obstante, agotada que fuere la vía administrativa, los actos administrativos que se dicten en relación con la preparación y adjudicación de estos contratos, podrán ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 4.-Libertad de pactos. La Administración podrá concertar los contratos, pactos o condiciones que tenga por conveniente, siempre que estén en consonancia con el ordenamiento jurídico y con los principios de la sana y buena administración, debiendo respetar los procedimientos de ley.

Entiéndese por Administración, el Poder Ejecutivo y sus dependencias, incluyendo órganos desconcentrados que le estén adscritos, las instituciones autónomas o descentralizadas, las municipalidades y los demás organismos públicos a que se refiere el Artículo 1 párrafo 2) de la presente Ley, en cuanto realicen actividades de contratación.

En la celebración, interpretación y ejecución de los contratos mencionados en el presente Capítulo, se tendrá siempre en cuenta el interés público.

ARTICULO 5.-Principio de Eficiencia. La Administración está obligada a planificar, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad. Cada órgano o ente sujeto a esta Ley, preparará sus programas anuales de contratación o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, considerando las necesidades a satisfacer.

Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y se facilitará la subsanación de los defectos insustanciales.

La Administración incorporará el uso de tecnologías informáticas en la gestión de los sistemas de contratación de modo que se puedan automatizar y dar la publicidad a los procedimientos. Los Registros de Proveedores y Contratistas se mantendrán en registros electrónicos.

ARTICULO 6.-Principio de publicidad y transparencia. Se garantiza el acceso de los oferentes a la información relacionada con la actividad de contratación administrativa; así como, la transparencia en todos los trámites y la posibilidad para los interesados de recibir noticia oportuna del inicio de un procedimiento o de la necesidad de inscribirse en el Registro que corresponda

No obstante lo anterior, se prohíbe proporcionar información que por su naturaleza se considere reservada, o que pueda colocar a un oferente en posición de ventaja respecto de otro, o de los documentos que en el Pliego de Condiciones se definan como de acceso confidencial por referirse a desglose de estados financieros, cartera de clientes, o cualquier aspecto relacionado con procesos de producción, programas de cómputo o similares. Tampoco se suministrará, después del acto de apertura pública de las ofertas y antes de que se notifique la adjudicación del contrato, información alguna, verbal o escrita, relacionada con el examen o evaluación de las ofertas y sobre la recomendación de adjudicación.

ARTICULO 7.-Principio de igualdad y libre competencia. Todo potencial oferente que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios,

estará en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa en condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada de especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto licitado.

En la aplicación de este principio respecto de oferentes extranjeros, se observará el principio de reciprocidad.

La aplicación de este principio no impedirá incluir en el Pliego de Condiciones, márgenes de preferencia a favor de oferentes nacionales, según dispone el Artículo 53 de esta Ley.

La escogencia de la oferta más conveniente al interés general se hará con aplicación del método objetivo de evaluación y comparación que necesariamente se incluirá en el Pliego de Condiciones.

ARTICULO 8.-Materias excluidas. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos y negocios jurídicos de la Administración, siguientes:

- 1) La prestación por personas naturales de servicios profesionales o técnicos distintos a los regulados en el Capítulo VII de esta Ley;
- 2) Las relaciones de servicio de los funcionarios y empleados públicos y los contratos regulados por la legislación laboral;
- 3) Las relaciones entre la Administración y los particulares derivadas de la prestación de servicios públicos que impliquen el pago por estos últimos de una tarifa o de una tasa de aplicación general;
- 4) Las operaciones que realice la Administración con los particulares para el expendio al público de papel sellado, timbres, alcohol u otras especies fiscales;

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA
DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA

PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

DIRECTOR: LICENCIADO FEDERICO DUARTE A.

ALEJANDRO ELPIDIO ACOSTA
Sub-Gerente General

INFORMACION Y COORDINACION
Marco Antonio Castillo
Luis Alberto Aguilar

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
E.N.A.G.

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia 230-4956
Administración: 230-6767
Planta: 230-3026

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

- 5) Los contratos o convenios de colaboración que celebren el Gobierno Central con las instituciones descentralizadas, municipalidades u otros organismos públicos, o los que celebren estos organismos entre sí; y,
- 6) Los empréstitos u otras operaciones de crédito público reguladas por la legislación especial sobre la materia, así como, los servicios financieros prestados por el Banco Central de Honduras, o por otras entidades financieras públicas.

ARTICULO 9.-Situaciones de emergencia. La declaración del estado de emergencia se hará mediante Decreto del Presidente de la República en Consejo de Ministros o por el voto de las dos terceras partes de la respectiva Corporación Municipal.

Los contratos que se suscriben en situaciones de emergencia, requerirán de aprobación posterior, por acuerdo del Presidente de la República, emitido por medio de la Secretaría de Estado que corresponda, o de la Junta o Consejo Directivo de la respectiva Institución Descentralizada o de la Corporación Municipal, si es el caso.

En cualquiera de los casos deberá comunicarse lo resuelto a los órganos contralores, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, siempre que se provea la celebración de contratos.

Quando ocurran situaciones de emergencia ocasionados por desastres naturales, epidemias, calamidad pública, necesidades de la defensa o relacionadas con estados de excepción, u otras circunstancias excepcionales que afectaren sustancialmente la continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos, podrá contratarse la construcción de obras públicas, el suministro de bienes o de servicios o la prestación de servicios de consultoría que fueren estrictamente necesarios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de las funciones de fiscalización.

ARTICULO 10.-Control de la ejecución. Todo contrato deberá contener las cláusulas y disposiciones que sean necesarias para su correcta ejecución y debido control. Su objeto deberá ser determinado y la necesidad que se pretende satisfacer deberá quedar plenamente justificada en el expediente correspondiente.

CAPITULO II

DISPOSICIONES COMUNES

SECCION PRIMERA

DE LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 11.-Organos competentes. Son competentes para celebrar los contratos de la Administración:

- 1) En la Administración Central:
 - a) Los Secretarios de Estado en su respectivo Ramo;
 - b) Los titulares de órganos desconcentrados de acuerdo con las normas de su creación o, en su defecto, hasta el límite que le fuere delegado por acto administrativo dictado por el órgano al cual están adscritos. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las disposiciones contenidas en leyes especiales; y,

- c) Los Gerentes Administrativos de las Secretarías de Estado en los casos y hasta los límites que se sean delegados por el Secretario de Estado correspondiente.

2. En la Administración Descentralizada:

- a) Los Presidentes, Directores, Secretarios Ejecutivos o Gerentes de las instituciones descentralizadas y los titulares de órganos con competencia regional previstos en sus estructuras administrativas, hasta el límite que, en ese último caso, determinen los correspondientes órganos de dirección superior; y,
- b) El Alcalde Municipal respectivo.

Quando las leyes exijan autorización para celebrar un contrato, deberá llenarse este requisito por el órgano de dirección superior de la institución descentralizada o de la municipalidad de que se trate.

Requerirán aprobación por Acuerdo de la Junta o Consejo Directivo de la respectiva institución descentralizada o de la Corporación Municipal, los contratos que suscriban los funcionarios a que se refiere el numeral 2) de este Artículo, en los casos que disponga el Reglamento; el acuerdo de aprobación será requisito necesario para la validez de estos contratos.

ARTICULO 12.-Organos competentes para adjudicar. Son competentes para adjudicar los contratos, los funcionarios a que se refiere el Artículo anterior, con las excepciones siguientes:

- 1) Aquellos contratos que por su cuantía, deban ser adjudicados por sus Juntas o Consejos Directivos, de conformidad con las normas presupuestarias de las Instituciones Descentralizadas, las que fijarán anualmente las cantidades correspondientes; y,
- 2) Los que deban ser adjudicados por la Corporación Municipal de conformidad con el plan de arbitrios anual de cada Municipalidad.

ARTICULO 13.-Contratos de exoneración o con efectos en el siguiente período de Gobierno. Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones fiscales, requerirán aprobación del Congreso Nacional. Este requisito deberá cumplirse especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno.

ARTICULO 14.-Poder Legislativo, Judicial y otros entes públicos. Los contratos que celebren los Poderes Legislativo y Judicial, serán suscritos por sus respectivos Presidentes, con la aprobación de sus cláusulas por la Junta Directiva del Congreso Nacional o por la Corte Suprema de Justicia, según corresponda.

Los celebrados por el Tribunal Nacional de Elecciones, Ministerio Público, Comisionado de los Derechos Humanos, Organos Contralores del Estado, Procuraduría General de la República, y demás organismos especializados creados por ley, que se financien con fondos públicos, serán suscritos por los funcionarios a quienes las leyes atribuyan su dirección.

SECCION SEGUNDA

CAPACIDAD DE LOS CONTRATISTAS

ARTICULO 15.-Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas,

hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

- 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena.

Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
- 2) Haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco (5) años. En este caso, la prohibición de contratar subsistirá mientras no se cumpla con la sanción impuesta de conformidad con el Código Tributario;
- 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
- 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
- 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
- 6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
- 7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,
- 8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTICULO 16.-Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General de Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.

ARTICULO 17.-Ofertas en consorcio. Diferentes interesados podrán participar en consorcio en los procedimientos de contratación, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo será necesario acreditar ante el órgano responsable de la contratación la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con el órgano licitante, incluyendo la designación de un representante o gerente único con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato.

Las partes integrantes responderán solidariamente ante la Administración por todas las consecuencias derivadas de la participación del consorcio en los procedimientos de contratación o en la ejecución del contrato que le fuere adjudicado.

ARTICULO 18.-Declaración jurada. Todo interesado en contratar con la Administración deberá presentar con la oferta, declaración jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los Artículos 15 y 16 de esta Ley. Si fuere un consorcio, tal declaración deberá comprender a cada uno de sus integrantes.

ARTICULO 19.-Nulidad de contratos. Serán nulos los contratos suscritos con personas que carezcan de la capacidad legal o que estén comprendidos en cualesquiera de las prohibiciones o inhabilidades indicadas en los Artículos 15 y 16 de la presente Ley.

En estos casos, la Administración procederá a la liquidación del contrato y tomará las providencias que fueren necesarias para resarcirse de los daños y perjuicios que le fueren ocasionados, de los cuales responderán solidariamente el Contratista y los funcionarios que, a sabiendas, hubieren adjudicado el contrato. Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de daños al interés público, podrá autorizarse mediante resolución motivada emanada de la autoridad superior competente, la continuación de los efectos del contrato por el tiempo que fuere estrictamente necesario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.

ARTICULO 20.-Acreditación de empresas nacionales. Las empresas nacionales acreditarán su personalidad con el testimonio de su escritura de declaración de comerciante individual o de su constitución social, según corresponda, inscrita en el Registro Público de Comercio; sus representantes acreditarán, cuando corresponda, poderes suficientes para la suscripción de los contratos de conformidad con las leyes.

ARTICULO 21.-Acreditación de empresas extranjeras. Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir con los

requisitos establecidos en la legislación civil y mercantil para actuar en el territorio nacional.

Los proveedores extranjeros de bienes o servicios podrán ofertar directamente en casos excepcionalmente calificados, por autoridad competente superior, o bien ser representados por agentes, representantes o distribuidores constituidos de conformidad con las leyes nacionales, quienes deberán acreditar, en su caso, que tienen la capacidad y las facilidades necesarias para cumplir con las obligaciones de mantenimiento o reparación, existencia de repuestos u otras similares que fueren requeridas.

ARTICULO 22.-Aplicación de legislación nacional. Los contratos que celebre la Administración con personas naturales o jurídicas extranjeras, se someterán a la legislación nacional, así como, a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la República. Tales contratistas no podrán recurrir a la vía diplomática en sus reclamaciones derivadas de las obligaciones y derechos del contrato, salvo en el caso de denegación de justicia. No se entenderá como denegación de justicia la circunstancia de que un fallo no fuere favorable al contratista.

SECCION TERCERA

REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 23.-Requisitos previos. Con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la Administración deberá contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; preparará, asimismo, los Pliegos de Condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato.

Estos documentos formarán parte del expediente administrativo que se formará al efecto, con indicación precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Podrá darse inicio a un procedimiento de contratación antes de que conste la aprobación presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrá suscribirse sin que conste el cumplimiento de este requisito, todo lo cual será hecho de conocimiento previo de los interesados.

ARTICULO 24.-Estimación de la contratación. Para los fines de determinar el procedimiento correspondiente, el órgano responsable de la contratación tomará en cuenta el monto, en el momento de la convocatoria, de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal y el valor de los fletes, seguros, intereses, derechos o cualquier otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación

ARTICULO 25.-Prohibición de subdividir contratos. El objeto de la contratación o la ejecución de un proyecto no podrá ser fragmentado, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley.

Se entenderá que no existe la antedicha subdivisión cuando, al planificar la ejecución del proyecto, se hubieren previsto dos o más etapas o secciones específicas y diferenciadas, siempre que la ejecución de cada una de ellas tenga funcionalidad y se encuentre coordinada con las restantes, de modo que se garantice la unidad del proyecto.

ARTICULO 26.-Inicio del procedimiento de contratación. Una vez verificados los requisitos previos, se dará inicio al procedimiento de contratación mediante decisión de la autoridad competente.

SECCION CUARTA

FINANCIAMIENTO DE LOS CONTRATOS

ARTICULO 27.-Nulidad por falta de presupuesto. Serán nulos los contratos que al suscribirse carezcan de asignación presupuestaria. La resolución del contrato por esta causa hará incurrir a los funcionarios responsables en las sanciones administrativas, civiles o penales que determinen las leyes. La asignación presupuestaria deberá constar en el expediente de contratación.

ARTICULO 28.-Pagos al contratista. El precio será cierto y determinado y se pagará al contratista de acuerdo con la ejecución real de las prestaciones a su cargo, sin perjuicio de la consideración de pagos anticipados según lo previsto en disposiciones especiales de esta Ley.

La Administración reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la presentación correcta de los documentos de cobro correspondiente. El pago de intereses, se hará a más tardar en la fecha del siguiente pago parcial. En el contrato se establecerá el procedimiento de pago de estos intereses.

No podrán alegar incumplimiento de la Administración y solicitar el pago de los intereses mencionados en el párrafo anterior, los contratistas que presenten en forma incompleta o incorrecta los documentos de cobro; tampoco podrán hacerlo quienes incurran en atrasos que les fueren atribuibles durante la ejecución de un contrato, ocasionando con ello retrasos en los desembolsos presupuestados para determinado período fiscal y la subsiguiente demora en los siguientes ejercicios, y quienes incurran en cualquier otra conducta determinante del retraso.

ARTICULO 29.-Financiamiento por los Contratistas. Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberá indicarse así en el pliego de condiciones de la licitación. Si así ocurriere, oportunamente los órganos competentes deberán hacer las previsiones presupuestarias para la atención del crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratación bajo esta modalidad, deberán cumplirse los requisitos previstos en la legislación de crédito público.

CAPITULO III

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

SECCION PRIMERA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES

ARTICULO 30.-Oficina Normativa. Créase la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, como un órgano técnico y consultivo del Estado que tendrá la responsabilidad de dictar normas e instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación administrativa en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos, así como, la prestación de asesoría y la coordinación de actividades que orienten y sistematicen los procesos de contratación del sector público.

La Oficina Normativa estará adscrita a la Secretaría de Estado o dependencia que designe el Presidente de la República y será asesorada en el desempeño de sus funciones por un Comité Consultivo integrado por representantes de los sectores públicos y privados en la forma siguiente:

- 1) Un representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia o de la Secretaría de Estado que designe el Presidente de la República;
- 2) Un representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, quien la presidirá;
- 3) Un representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;
- 4) Un representante de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI);
- 5) Un representante de la Dirección Ejecutiva del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS);
- 6) Un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);
- 7) Un representante de la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción;
- 8) Un representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras; y,
- 9) Un representante de la Cámara Hondureña de Empresas de Consultores.

La Oficina Normativa queda facultada para integrar al Comité Consultivo otros organismos públicos o privados que consideren necesarios en casos específicos.

El Comité Consultivo evaluará las normas, procedimientos y modelos de documentos de contratación que prepare la Oficina Normativa, previo a su aprobación y puesta en ejecución. El funcionamiento de este Comité, se definirá por el Reglamento que se emita.

ARTICULO 31.-Funciones de la Oficina Normativa. Corresponde a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones:

- 1) Establecer y mantener actualizado el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado;
- 2) Diseñar, poner en ejecución y evaluar periódicamente normas y procedimientos operativos relativos al sistema de contratación y adquisiciones, para corregir en forma oportuna la operatividad del sistema;
- 3) Diseñar modelos, tipo de pliegos de condiciones y de contratos, así como, de manuales para precalificación de contratistas;
- 4) Diseñar y poner en ejecución sistemas de registro informático para procurar la información requerida en los procesos de contratación y adquisiciones;
- 5) Prestar asistencia técnica a las distintas Secretarías de Estado y demás organismos del sector público para la capacitación del

personal y para la puesta en ejecución de manuales de organización y funciones, control interno y procedimientos relativos a la actividad de contratación;

- 6) Preparar anualmente estudios y análisis del comportamiento de precios de bienes y servicios, para su utilización por las distintas dependencias en la preparación de sus proyectos de presupuesto, teniendo como referencia los análisis estadísticos del Banco Central de Honduras, del Instituto Nacional de Estadísticas, de la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción y de otras fuentes de información confiables;
- 7) Realizar estudios para actualizar anualmente los montos de inversión que determinan los procedimientos de contratación previstos en el Artículo 38 de la presente Ley;
- 8) Informar al Presidente de la República, a los órganos responsables de la contratación y a la Contraloría General de la República según corresponda, sobre la aplicación de las normas y los procedimientos diseñados;
- 9) Estudiar y preparar fórmulas para el reconocimiento de escalamiento de precios y de mayores costos en la contratación administrativa, según dispone la presente Ley, y someterlos al Poder Ejecutivo para su aprobación; y,
- 10) Cumplir otras funciones afines que disponga el reglamento.

SECCION SEGUNDA

ORGANOS RESPONSABLES DE LOS PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 32.-Organos responsables. La preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos se desarrollará bajo la dirección del órgano responsable de la contratación, sin perjuicio de la participación que por ley tengan otros organismos del Estado.

Son responsables de la contratación, los órganos competentes para adjudicar o suscribir los contratos. El desarrollo y la coordinación de los procesos técnicos de contratación, podrá ser delegado en unidades técnicas especializadas.

ARTICULO 33.-Comisión de Evaluación. Para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de contratistas, el órgano responsable de la contratación designará una Comisión de Evaluación integrada por tres (3) o cinco (5) funcionarios de amplia experiencia y capacidad, la cual formulará la recomendación correspondiente.

No podrá participar en esta Comisión, quien tenga un conflicto de intereses que haga presumir que su evaluación no será objetiva e imparcial; quien se encontrare en esta situación podrá ser recusado por cualquier interesado.

SECCION TERCERA

REGISTROS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ARTICULO 34.-Registro de Proveedores y Contratistas. La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones llevará un registro centralizado en el que se inscribirán los interesados en la adjudicación de contratos con los organismos estatales. En cuanto fuere requerido por las

necesidades del servicio, los organismos de la Administración Descentralizada podrán tener sus propios registros.

La inscripción se hará por especialidades o áreas de actividad de acuerdo con la información proporcionada por los interesados y no causará tasa alguna; para ello se utilizarán formularios únicos que proporcionará la Oficina Normativa, debiendo acreditarse por cada interesado su existencia y representación legal, nacionalidad, su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional, incluyendo su inscripción en el Colegio Profesional correspondiente, cuando así proceda.

ARTICULO 35.-Registro de Contratos. En el Registro se anotarán los contratos ejecutados o en ejecución y la información sobre su cumplimiento, incluyendo, en su caso, multas o sanciones impuestas a los contratistas; para estos efectos, los órganos responsables de la contratación remitirán a la Oficina Normativa, con copia al contratista, los informes correspondientes; los funcionarios que incumplan esta obligación incurrirán en responsabilidad. Dichos órganos podrán requerir de la Oficina Normativa los informes que estimaren necesarios.

Los contratos de construcción públicos y privados deberán ser inscritos en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción para complementar la base de datos usada por el Gobierno y la Empresa Privada para referencia de costos.

ARTICULO 36.-Requisitos de inscripción y efectos. Los requisitos de inscripción serán similares para todos los interesados. La inscripción durará tres (3) años y podrá ser renovada a solicitud del interesado; podrá también ser cancelada en los casos que disponga el Reglamento. La inscripción en el Registro no implicará costo alguno.

Quienes hubieren sido inscritos no estarán obligados a presentar en las licitaciones o concursos documentos relativos a su personalidad o representación, salvo los supuestos de modificación o de sustitución, tampoco estarán obligados a acreditar documentalmente cualquier otra información que ya conste en el Registro; salvo cuando fuere requerida su comprobación según disponga el Reglamento. Las constancias de inscripción acreditarán los aspectos anteriores.

La falta de inscripción no será obstáculo para presentar ofertas; en estos casos, el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la Administración y previamente solicitará su inscripción a la Oficina Normativa. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes de que se le adjudique un contrato.

ARTICULO 37.-Trámite de Inscripción. El Reglamento dispondrá el plazo para resolver las solicitudes de inscripción, esta última se denegará cuando el interesado se encuentre en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente Ley.

No será necesaria la inscripción en el Registro cuando se trate de contratos que por su cuantía, no requieren de licitación o concurso.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

SECCION PRIMERA

DEFINICION DE LOS PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 38.-Procedimiento de Contratación. Las contrataciones que realicen los organismos a que se refiere al Artículo 1

de la presente Ley, podrán llevarse a cabo por cualquiera de la modalidades siguientes:

- 1) Licitación Pública;
- 2) Licitación Privada;
- 3) Concurso Público;
- 4) Concurso Privado; y,
- 5) Contratación Directa.

En las disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, se determinarán los montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación anteriormente mencionadas, de acuerdo con los estudios efectuados por la Oficina Normativa, según el Artículo 31 numeral 7) de la presente Ley, debiendo considerarse siempre el índice oficial de inflación y la tasa anual de devaluación que determine el Banco Central de Honduras.

SECCION SEGUNDA

DISPOSICIONES COMUNES

ARTICULO 39.-Pliego de Condiciones. El Pliego de Condiciones incluirá la información necesaria para que los interesados puedan formular válidamente sus ofertas; su contenido incluirá las reglas especiales de procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluirá el objeto, las especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratación, según se dispongan reglamentariamente.

ARTICULO 40.-No discriminación en el Pliego de Condiciones. El Pliego de Condiciones se preparará de forma que se favorezca la competencia y la igualdad de participación de los potenciales oferentes; a tal efecto, no podrán imponerse restricciones ni exigirse el cumplimiento de requisitos que no fueren técnicamente indispensables, si con ello se limita las posibilidades de concurrencia de eventuales participantes.

SECCION TERCERA

LICITACION PUBLICA

ARTICULO 41.-Pliego de Condiciones. Considerando los modelos tipo preparados por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, el órgano responsable de la contratación preparará, en cada caso, el pliego de condiciones y los demás documentos que normarán el procedimiento de licitación, así como, las estipulaciones generales y especiales del contrato a celebrarse.

ARTICULO 42.-Licitación Pública Internacional. Cuando se requieran técnicas especiales o concurren otras razones que justifiquen la participación de contratistas extranjeros, deberá realizarse la contratación de las obras o de los suministros mediante licitación pública internacional.

ARTICULO 43.-Prelificación. Cuando se trate de construcción de obras públicas y con el objeto de asegurar que éstas sean ejecutadas por contratistas competentes, previo a la licitación correspondiente, se precalificarán las compañías interesadas. La precalificación será efectuada por los órganos responsables de los proyectos, quienes tomarán en cuenta la información existente en el Registro de Contratistas.

La precalificación también podrá hacerse para grupos de contratos con características comunes que deban adjudicarse durante el año fiscal. La precalificación podrán solicitarla quienes no lo hubieren hecho anteriormente, o quienes habiendo sido excluidos acrediten posteriormente el cumplimiento de los requisitos correspondientes, quedando obligada la administración a realizar actualizaciones periódicas con este fin.

En las licitaciones de obras públicas deberá mediar entre la precalificación y la invitación a presentar ofertas en un plazo no menor de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación de la precalificación a los interesados.

Si una persona jurídica o natural precalificada en una misma dependencia del Estado, para la ejecución, suministro o la prestación de un servicio, no ha cambiado su estatus técnico-financiero, no necesitará nueva precalificación para obras similares, bastará con que lo manifieste así ante el órgano licitante.

ARTICULO 44.-Alcance de la precalificación. El procedimiento de precalificación tendrá por base establecer la capacidad de cada uno de los interesados para ejecutar satisfactoriamente el contrato, y a ese efecto se evaluará:

- 1) La experiencia de la empresa;
- 2) La disponibilidad de personal, equipo e instalaciones;
- 3) La capacidad administrativa y técnica disponible;
- 4) La capacidad financiera;
- 5) El cumplimiento de contratos anteriores; y,
- 6) La capacidad legal para contratar.

Cuando esta documentación ya existiera en el órgano contratante, los interesados únicamente deberán actualizar la misma, para lo cual deberá mantenerse un expediente por cada empresa.

ARTICULO 45.-Tramitación de la precalificación. La precalificación de contratistas de obras públicas se hará en forma seria y rigurosa por una Comisión que se integrará en cada caso por funcionarios de amplia experiencia y capacidad al servicio del órgano responsable de la contratación, debiendo evaluarse detenidamente la información aportada por los interesados.

Quienes fueren excluidos tendrán derecho a conocer los motivos, salvo las inhabilidades previstas en los Artículos 15 y 16 de esta Ley, en ningún otro caso se denegará la precalificación por incumplimiento de requisitos diferentes a los establecidos en el Artículo precedente.

La empresa que proporcione información incorrecta o maliciosa, será excluida de la licitación, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan.

El Reglamento desarrollará el procedimiento de precalificación considerando la naturaleza de los contratos que ejecuten las distintas dependencias.

La adquisición de los documentos de precalificación y las constancias que se requieran serán gratuitas.

ARTICULO 46.-Invitación a licitar. La invitación a presentar ofertas se hará mediante avisos que se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta,

y por lo menos en un diario de circulación nacional, con la frecuencia y anticipación que se determine de acuerdo con la naturaleza e importancia de las prestaciones objeto de la licitación; en las licitaciones de obras públicas, en todo caso, el plazo que medie entre la invitación y la fecha de presentación de ofertas no será inferior a quince (15) días calendario. Si la licitación fuere internacional, el aviso de precalificación y el aviso de invitación a presentar ofertas se publicará también en el extranjero.

ARTICULO 47.-Oferta. Los interesados prepararán sus ofertas ajustándose a los Pliegos de Condiciones, incluyendo planos u otros documentos que formen parte de la misma.

La Administración indicará previamente en el pliego de condiciones, el plazo en el que serán requeridas las obras o los suministros.

La presentación de la oferta presume la aceptación incondicional por el oferente de las cláusulas del Pliego de Condiciones y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

La oferta deberá acompañarse de los documentos indicados en el Pliego de Condiciones. No serán exigibles los documentos que consten en el Registro de Proveedores y Contratistas o que hubieren sido presentados en el proceso de precalificación, salvo los supuestos de comprobación a que se refiere el Artículo 36 párrafo 2) de la presente Ley.

Las Unidades Ejecutoras no podrán vender o dar en arrendamiento servicios, maquinarias o materiales a ninguna persona natural o jurídica que tenga contrato alguno con dicha Dependencia, salvo que los mismos se hayan ofrecido previamente en las bases de licitación, estableciendo sus costos en los documentos que norman el proceso.

ARTICULO 48.-Limitación de ofertas. Cada interesado presentará una sola oferta, si presentare más de una no se considerarán y será descalificado. La inclusión de una o varias alternativas en la oferta estará sujeta estrictamente a lo que establezca el Pliego de Condiciones.

ARTICULO 49.-Rechazo de ofertas colusorias. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

ARTICULO 50.-Tramitación de la licitación. El Reglamento determinará las formalidades a que se sujetará la apertura pública de las ofertas, su revisión y análisis, así como; los requisitos esenciales que deben satisfacer, los defectos no sustanciales que puedan subsanarse sin afectar su validez y lo relativo a aclaraciones pertinentes.

Las ofertas serán leídas públicamente y en voz alta, incluyendo los precios unitarios cuando así lo solicitare un oferente, debiendo permitírseles examinar los documentos inmediatamente después del acto de apertura.

ARTICULO 51.-Adjudicación. La adjudicación de los contratos de obra pública o de suministro, se hará al licitador que cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada, de acuerdo con criterios objetivos que en este último caso serán definidos en el Pliego de Condiciones. Lo anterior se entiende sin perjuicio del margen de preferencia nacional a que se refiere el Artículo 53 de la presente Ley.

En todo caso, antes de la adjudicación, si se presentare una oferta normalmente más baja en relación con las demás ofertas o con el presupuesto estimado, se pedirá información adicional al oferente para asegurarse de que pueda cumplir satisfactoriamente el contrato y se practicarán las demás investigaciones que correspondan, sin perjuicio de que se exija una garantía de cumplimiento por el doble del monto previsto en el Artículo 98 de esta Ley. Si la oferta no tuviere fundamento o fuere especulativa será desestimada.

ARTICULO 52.-Adjudicación por criterios objetivos de evaluación. Para los fines del Artículo anterior, el Pliego de Condiciones podrá considerar, además del precio, otros criterios objetivos de evaluación, a tal efecto, considerando la naturaleza de la prestación, podrán incluirse, entre otros, las condiciones de financiamiento, beneficios ambientales, o tratándose de suministros, la compatibilidad de equipos, disponibilidad de repuestos y servicios, asistencia técnica, menor costo de operación, plazo de entrega y los demás que estuvieren previstos con ese carácter. Si así ocurriere, el Pliego de Condiciones establecerá un sistema de puntos u otro criterio objetivo para evaluar los diferentes factores previstos.

A falta de pronunciamiento expreso en el Pliego de Condiciones, se entenderá que la adjudicación se hará al oferente de precio más bajo, siempre que cumpla las condiciones de participación.

ARTICULO 53.-Margen de preferencia nacional. Cuando hubieren oferentes nacionales y extranjeros, para fines exclusivos de comparación y evaluación, y consecuentemente con la escogencia de la mejor oferta, tratándose de suministros, se sumará a la mejor oferta extranjera un valor equivalente al de los impuestos de importación correspondientes, si el bien o suministro estuviera gravado con dicho impuesto, de no ser así, una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor de dicha oferta, si se trata de obra pública y servicios básicos, siempre para efectos de evaluación y escogencia de la mejor oferta, se sumará a la oferta de compañías extranjeras hasta un siete y medio por ciento (7 1/2 %) del monto de la oferta. Si de esta operación resulta que la mejor oferta extranjera es superior en monto a la nacional se escogerá esta última como la mejor oferta de la licitación procediendo entonces a la adjudicación del contrato.

Este último mecanismo no se aplicará a los participantes extranjeros a los cuales deba darse trato nacional en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio de los cuales el Estado sea parte y cuando se trate de la ejecución de empréstitos otorgados por organismos financieros internacionales, en cuyo caso se aplicarán los márgenes de preferencia en los términos que lo permitan los instructivos o políticas de adquisiciones de dichos organismos.

ARTICULO 54.-Pago en moneda extranjera. Atendiendo a la naturaleza de la prestación, el Pliego de Condiciones podrá establecer el porcentaje del monto del Contrato que se pagará en moneda extranjera, en base al estimado elaborado por la Administración. El monto, requisitos y demás condiciones establecidas para el pago en moneda extranjera en cada Contrato, será igual para todos los licitantes, nacionales o extranjeros, y se sujetará a las regulaciones que establezca el Banco Central de Honduras.

ARTICULO 55.-Motivación de la adjudicación. Cuando la licitación no se adjudique al oferente del precio más bajo conforme a lo previsto en los Artículos 51 y 52 de esta Ley, la decisión de la autoridad administrativa deberá ser suficientemente motivada y aprobada en su caso por la autoridad superior competente. La falta de motivación, la cual deberá

basarse en los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, determinará la nulidad de la adjudicación, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que incurran los funcionarios que hubieren decidido.

ARTICULO 56.-Retiro de oferta por falta de notificación. Si la adjudicación no se notifica dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones, los proponentes podrán retirar sus ofertas sin responsabilidad de su parte.

ARTICULO 57.-Licitación desierta o fracasada. El órgano responsable de la contratación declarará desierta la licitación cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en el Pliego de Condiciones. La declarará fracasada en los casos siguientes:

- 1) Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en esta Ley o en sus disposiciones reglamentarias;
- 2) Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento o en el Pliego de Condiciones; y,
- 3) Cuando se comprobare que ha existido colusión.

Declarada desierta o fracasada la licitación se procederá a una nueva licitación.

ARTICULO 58.-Falta de formalización. Si el oferente a quien se le adjudicó el Contrato no lo acepta o no lo formaliza por causas que le fueren imputables, dentro del plazo señalado con ese propósito, quedará sin valor ni efecto la adjudicación y la Administración hará efectiva la garantía de mantenimiento de oferta. Si así ocurriere, el órgano responsable de la contratación podrá adjudicar el Contrato al oferente que resultó en segundo lugar y si esto no fuera posible por cualquier motivo, al oferente que resultó en tercer lugar y así sucesivamente, sin perjuicio de que el procedimiento se declare fracasado cuando las otras ofertas no fueren satisfactorias para la Administración.

Formalizado que fuere el contrato, el contratista presentará la garantía de cumplimiento observando lo previsto en el Artículo 98 de la presente Ley.

SECCION CUARTA

LICITACION PRIVADA

ARTICULO 59.-Supuestos generales. Cuando la licitación fuere privada, según lo establecido en el Artículo 38 de la presente Ley, el órgano responsable de la contratación cursará invitación a participar a, por lo menos, tres (3) oferentes potenciales inscritos en el registro correspondiente.

ARTICULO 60.-Supuestos específicos. Procederá también la licitación privada en los casos siguientes:

- 1) Cuando, en atención al objeto del contrato, existiere un número limitado de proveedores o de contratistas calificados, no mayor de tres (3), lo cual deberá constar plenamente acreditado en el expediente;
- 2) Cuando por circunstancias imprevistas o por otras razones de apremiante urgencia, debidamente calificadas, surgiera una

necesidad cuya atención no ha podido planificarse con antelación, requiriéndose acción pronta y efectiva para no entorpecer la prestación del servicio y por esta razón no fuere posible una licitación pública;

- 3) Cuando para mantener la seguridad de las instalaciones destinadas a la prestación del servicio, no convenga hacer pública la licitación;
- 4) En caso de suministro, cuando por cambios imprevisibles en las condiciones del mercado, debidamente comprobados, se hubiere producido una carestía de productos de uso esencial, cuya adquisición fuere necesaria en el menor plazo posible; y,
- 5) Cuando una licitación pública resulte desierta o fracasada por causas no imputables a los funcionarios responsables del procedimiento, siempre que por razones de urgencias debidamente calificadas no fuere posible repetir dicho procedimiento.

Para llevar a cabo la licitación privada en los casos que anteceden, se requerirá autorización del Presidente de la República, cuando se trate de contratos de la Administración Centralizada, o del órgano de dirección superior cuando se trate de contratos de la Administración Descentralizada o de los demás organismos públicos a que se refiere el Artículo 1 de la presente Ley, debiendo emitirse Acuerdo expresando detalladamente sus motivos.

El procedimiento a que se sujeta la licitación privada se determinará en el Reglamento.

SECCION QUINTA

CONCURSO

ARTICULO 61.-Objeto del concurso. Los contratos de consultoría se adjudicarán mediante concurso, ajustándose a las modalidades de invitación pública o privada según los montos que se establezcan en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, según lo determina el Artículo 38 de la presente Ley; el procedimiento se sujetará a las reglas siguientes:

- 1) La Administración preparará los términos de referencia, incluyendo la descripción precisa del trabajo a realizar, las condiciones generales y especiales del contrato, los factores para calificar las ofertas, el plazo de su presentación y las demás condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan;
- 2) Los términos de referencia podrán determinar también la precalificación de los interesados, en cuyo caso se preparará una lista de tres (3) a seis (6) a quienes se invitará a presentar ofertas;
- 3) El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se disponga; y,
- 4) El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un resultado

satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.

El procedimiento para la evaluación y negociación, será desarrollado vía Reglamento, incluyendo lo atinente a las propuestas con consideración de costos.

ARTICULO 62.-Evaluación de las propuestas. La evaluación de las propuestas técnicas se hará considerando, entre otros, los factores siguientes:

- 1) La experiencia en la especialidad del trabajo de que se trate;
- 2) Los antecedentes en el cumplimiento de contratos anteriores;
- 3) La conveniencia del plan de trabajo y el enfoque propuesto en relación con los términos de referencia;
- 4) La capacidad, idoneidad y disponibilidad apropiada del personal propuesto; y,
- 5) La capacidad financiera del oferente, si se tratare de supervisión de obras o de otros contratos en que fuere requerido.

SECCION SEXTA

CONTRATACION DIRECTA

ARTICULO 63.-Supuestos. La contratación directa podrá realizarse en los casos siguientes:

- 1) Cuando tenga por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por una situación de emergencia al amparo de lo establecido en el Artículo 9 de la presente Ley;
- 2) Cuando se trate de la adquisición de repuestos u otros bienes y servicios especializados cuya fabricación o venta sea exclusiva de quienes tengan patente o marca de fábrica registrada, siempre que no hubieren sustitutos convenientes;
- 3) Cuando se trate de obras, suministros o servicios de consultoría, cuyo valor no exceda de los montos establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, de conformidad con el Artículo 38 de la presente Ley, en cuyo caso podrán solicitarse cotizaciones a posibles oferentes sin las formalidades de la licitación privada;
- 4) Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se mantengan secretas;
- 5) Cuando se trate de la acuñación de moneda y la impresión de papel moneda;
- 6) Cuando se trate de trabajos científicos, técnicos o artísticos especializados; y,
- 7) Cuando se hubiere programado un estudio o diseño por etapas, en cuyo caso se podrán contratar las que faltaren con el mismo consultor que hubiere realizado las anteriores en forma satisfactoria.

Para llevar a cabo la Contratación Directa en los casos que anteceden, se requerirá autorización del Presidente de la República cuando se trate de contratos de la Administración Pública Centralizada, o del órgano de dirección superior, cuando se trate de contratos de la Administración Descentralizada o de los demás organismos públicos a que se refiere el Artículo 1 de la presente Ley, debiendo emitirse Acuerdo expresando detalladamente sus motivos.

CAPITULO V

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

SECCION PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 64.-Concepto de obra pública. Contrato de obra pública es el celebrado por la Administración con una o más personas naturales o jurídicas, para la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de bienes que tengan naturaleza inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o del subsuelo, a cambio de un precio.

Se consideran también los contratos de obra pública los denominados "llave en mano" de acuerdo con los cuales el contratista se obliga a proporcionar, mediante un único contrato, todos o algunos de los siguientes elementos: Los diseños técnicos, servicios de ingeniería, financiamiento, construcción, así como, en su caso, el terreno necesario o el suministro e instalación de plantas, equipos u otros similares, incorporadas a la obra.

ARTICULO 65.-Objeto de la obra pública. Se consideran expresamente comprendidos en este Capítulo, los contratos que tengan por objeto:

- 1) La construcción y mantenimiento de carreteras, instalaciones ferroviarias, puertos, presas, puentes, edificios, aeropuertos, acueductos, obras de control de inundaciones, instalaciones varias y otras obras análogas de ingeniería;
- 2) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, como dragados, inyecciones, perforaciones y otros semejantes; y,
- 3) La reforma, reparación, conservación o demolición de las obras indicadas en los incisos anteriores.

ARTICULO 66.-Contratos de conservación de la red vial. Los contratos de conservación de la red vial se consideran contratos de servicio público, sin embargo, se regirán por las formalidades establecidas en el presente Capítulo. Estos contratos serán susceptibles a la aplicación de modalidades de pago por niveles de servicio, los cuales se desarrollarán en el Reglamento respectivo.

ARTICULO 67.-Aportes de la Administración. En los contratos de obra, la Administración podrá aportar total o parcialmente los materiales, instalaciones u otros medios destinados para su ejecución. En este caso, el Contratista, asumirá la responsabilidad por la custodia o manejo de los mismos y deberá constituir las garantías que se señalen.

ARTICULO 68.-Requisitos previos al inicio de obras. Antes de que se autorice el inicio de las obras, el Contratista deberá presentar los documentos siguientes:

- 1) Garantía de cumplimiento del contrato y, si lo hubiere, garantía por anticipo de fondos;
- 2) Programa detallado de ejecución de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitación. El programa deberá ser aprobado por el órgano responsable de la contratación.
- 3) Nómina del personal técnico asignado para la dirección y ejecución de la obra, incluyendo un plan de organización;
- 4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se empleará en la obra; y,
- 5) Los demás que se indiquen en el Reglamento o en el Pliego de Condiciones de la Licitación.

ARTICULO 69.-Obligaciones de la Administración. La Administración será responsable de adquirir los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras, incluyendo derechos de vía, así como, las servidumbres, bancos de materiales, permisos y cualquier otra facilidad que se especifique en el contrato, así como, también cuanto sea requerido para la evaluación del impacto ambiental del proyecto y la obtención de las licencias ambientales necesarias. Sin lo anterior no podrá darse la orden de inicio. El Contratista no será responsable por demoras imputables a estas causas, si fuere perjudicado por incumplimiento de la Administración tendrá derecho a la indemnización correspondiente. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64 párrafo 2) de la presente Ley.

ARTICULO 70.-Secciones o etapas. En los casos en que una obra admita dos o más etapas o secciones, si así conviene a los intereses de la Administración, podrán licitarse y celebrarse contratos separados para la ejecución de cada una de ellas, siempre que fueren susceptibles de ser utilizadas o puestas al servicio en forma independiente, y que puedan ser substancialmente definidas sin menoscabo de las normas de calidad.

SECCION SEGUNDA

EJECUCIÓN

ARTICULO 71.-Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con apego estricto al Contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales modificaciones, y a las instrucciones por escrito que fueren impartidas al Contratista, por el Supervisor designado por la Administración.

Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el período de garantía de la misma, el Contratista será responsable de las fallas o desperfectos que ocurran por causas que le fueren imputables, salvo el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente calificada. No será responsable el contratista por eventuales deficiencias o imprevisiones en el diseño o en la supervisión de la obra, a menos que siendo conocidas no las denunciare, o cuando se tratare de contratos "llave en mano".

El Contratista será también responsable de los daños y perjuicios que pueda causar a terceros.

ARTICULO 72.-Plazo de ejecución. El Contratista deberá ejecutar la obra en el plazo convenido. También deberá cumplir los plazos parciales para las diferentes etapas del Proyecto, si así se hubiere previsto en los documentos de licitación. Si el Contratista por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales de manera que se temiere justificadamente que no podrá entregar la obra en el plazo total pactado, la Administración tomará las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolución del Contrato con ejecución de la garantía de cumplimiento.

Si la obra no se ejecutare en el plazo total, la Administración aplicará al Contratista por cada día de atraso, una multa cuya cuantía se establecerá en el Pliego de Condiciones y en el contrato. El Contratista se constituirá en mora sin necesidad de previa notificación de la Administración.

De igual manera, la Administración podrá imponer multas por incumplimiento de plazos parciales cuando la naturaleza del proyecto lo requiera y esté previsto así en los citados documentos.

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, incluyendo, pero no limitándose a la falta de pago en la forma y plazos especificados en el Contrato, la Administración autorizará la prórroga del plazo por un tiempo igual al atraso y la falta de entrega de la información a tiempo.

El Contratista estará obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la orden de inicio, la cual será emitida por la Administración dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo a cuenta del precio total, si así se hubiere pactado, siempre que se cumpla con los demás requisitos previstos en el Artículo 67 de la presente Ley.

ARTICULO 73.-Pago de las obras. El precio se pagará de acuerdo con las cantidades de obra ejecutada, sin perjuicio de la entrega de un anticipo de conformidad con la Ley, cuando así se hubiere convenido; podrá pagarse también el valor de los materiales almacenados para ser usados en la obra, si así se estipulare en los documentos de licitación previas las comprobaciones correspondientes.

El pago podrá pactarse en base a cantidades de obra y precios unitarios fijos, precio global o precio alzado, costo más honorarios fijos u otras formas de pago. Cuando se requiera financiamiento del Contratista, el contrato dispondrá las modalidades especiales de pago.

ARTICULO 74.-Revisión de precios. La Administración ajustará mensualmente el total de los incrementos o decrementos de los precios del contrato causados por variaciones de las condiciones económicas, incluyendo inflación, devaluación monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de la obra.

Para los efectos de los incrementos previstos en el párrafo anterior, deberán acreditarse los aumentos que se suceden sobre la base de los precios iniciales, durante la ejecución del contrato. Se exceptúan del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido por el contratista a los que le hubieren sido pagados con anticipación.

Todo contrato deberá establecer los medios de control indispensables para la correcta aplicación de esta disposición.

ARTICULO 75.-Plazo. El reconocimiento de mayores costos se aplicará durante el plazo original del contrato y los plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas.

Cuando el Contratista concluya la obra fuera del plazo establecido en el contrato, el precio de los materiales o servicios en dicho período

será el que hubiere estado vigente al momento de vencer el último plazo cubierto con la cláusula de reconocimiento de mayores costos.

ARTICULO 76.-Utilización de índices u otros procedimientos. La Administración analizará y aprobará fórmulas para el reconocimiento de los incrementos de costos estrictamente relacionados con la obra, con base en los índices oficiales de precios y costos elaborados por el Banco Central de Honduras, la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción u otros Organismos, debiendo indicarse lo procedente en el Pliego de Condiciones y en el contrato, incluyendo el procedimiento de aplicación que corresponda.

En contratos de corto plazo hasta de seis (6) meses, también podrán verse sistemas alternativos de ajuste de incremento de costos.

ARTICULO 77.-Tramitación de exoneraciones. El Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y a iniciativa del órgano responsable de la contratación, expedirá los documentos que amparen la dispensa de todos los impuestos de importación, de consumo, venta y demás que graven la maquinaria, equipo, vehículos de trabajo, accesorios, repuestos, materiales, combustibles, grasas, lubricantes, asfaltos y demás bienes que sean razonablemente necesarios para la ejecución de los contratos, de acuerdo con lo que se hubiere pactado expresamente y siempre que el respectivo contrato hubiera sido aprobado por el Congreso Nacional.

Las modificaciones de los contratos previamente aprobados por el Congreso Nacional, no requerirán de una nueva aprobación legislativa en lo que se refiere a las exoneraciones.

ARTICULO 78.-Fiscalización de bienes exonerados. Las autoridades competentes ejercerán el debido control para asegurar el buen uso y destino de los bienes exonerados a que se refiere el Artículo anterior.

Al concluir el contrato para el que se otorgó la exoneración, el Contratista, dentro del plazo que se señale, estará obligado a devolver a su lugar de origen o a trasladar a terceros países los bienes indicados; a su opción también podrá pagar los impuestos correspondientes calculados sobre el valor de dichos bienes debidamente depreciados o asignarlos a la ejecución de otro contrato para el cual se hubieren otorgado exoneraciones similares, previa autorización de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

Exceptuase de lo previsto en el párrafo anterior los bienes consumidos o definitivamente incorporados a la obra.

ARTICULO 79.-Investigación de irregularidades. Cuando hubieren indicios de responsabilidad por defectos o imprevisión imputable a los diseñadores o constructores de una obra, el órgano responsable de la contratación ordenará la investigación correspondiente para los fines consiguientes.

La misma medida se tomará cuando hubieren indicios de responsabilidad por culpa o negligencia imputable a los supervisores.

La recepción de la obra por la autoridad competente no exime a las personas antes indicadas de responsabilidad por defectos no aparentes.

Si el Proyecto lo amerita, podrá exigirse un cuaderno de Bitácora, debiéndose anotar en el mismo, las incidencias que ocurran durante la ejecución de la obra.

ARTICULO 80.-Recepción de la obra. Terminada sustancialmente la obra, previo dictamen de la Supervisión, el órgano responsable de la

contratación procederá a su recepción, siempre que esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales.

El Contratista, a su costo y conforme a las instrucciones que imparta el órgano responsable de la contratación, deberá efectuar las correcciones.

Cumplida esta fase se procederá, dentro del plazo que señale el contrato, a la recepción definitiva de la obra, elaborándose el acta correspondiente. El Contratista, por su parte, procederá a constituir la garantía de calidad de la obra, si así estuviere previsto de acuerdo a la naturaleza de la obra, en la forma y duración que determinen los documentos contractuales.

ARTICULO 81.-Entregas parciales. Cuando se hubiere pactado la ejecución y entrega de tramos o partes del proyecto para ser puestos al servicio público, se irán recibiendo parcialmente a medida que el Contratista los vaya terminando de acuerdo con el contrato y los demás documentos contractuales. En estos casos el plazo de garantía de calidad de los trabajos comenzará a correr a partir de la respectiva recepción parcial.

Dicho plazo se establecerá atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra.

SECCION TERCERA

SUPERVISION

ARTICULO 82.-Supervisión. La Administración por medio de su personal o de consultores debidamente seleccionados, supervisará la correcta ejecución del contrato. Las órdenes de los supervisores formuladas por escrito, deberán ser cumplidas por el Contratista, siempre que se ajusten a las disposiciones de esta Ley, de sus Reglamentos o de los documentos contractuales.

El Reglamento determinará las facultades y las obligaciones de los supervisores.

CAPITULO VI

CONTRATO DE SUMINISTRO

SECCION PRIMERA

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTICULO 83.-Concepto. Contrato de suministro es el celebrado por la Administración con una persona natural o jurídica que se obliga a cambio de un precio a entregar uno o más bienes muebles o a prestar un servicio de una sola vez o de manera continuada y periódica.

Se regulan por las disposiciones del presente Capítulo, los contratos que celebre la Administración para el transporte de bienes, aseo o higienización de edificios u otras instalaciones públicas, vigilancia, seguros de bienes o de personas, adquisición a cualquier título de equipos o de sistemas de informática, excepto el diseño de programas específicos, o cualquier otro servicio en el que no prevalezca el esfuerzo intelectual.

ARTICULO 84.-Prohibición de compra de bienes usados. Se prohíbe la compra de maquinaria o equipo usado, así como, las compras a abastecedores únicos, salvo las excepciones contempladas en esta Ley.

Antes de hacer nuevas compras de equipos u otros bienes, deberá hacerse una adecuada utilización de los existentes. Cuando se determinen bienes adscritos a cualquier dependencia que, dejados de utilizar, no

puedan ser aprovechados eficientemente por otra, serán considerados como propiedad excedente y serán vendidos en pública subasta por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio de la Oficina de Administración de Bienes Nacionales de la Contaduría General de la República.

En caso de ausencia de postores en la subasta, los bienes podrán ser donados de preferencia a Instituciones del Estado.

En la Administración Descentralizada y demás entes públicos previstos en el Artículo 1 de la presente Ley, se observará un procedimiento similar, con las modalidades propias de su organización interna.

ARTICULO 85.-Obras accesorias. Cuando el Contratista tenga que realizar obras accesorias de instalación o montaje de los bienes, el contrato siempre será considerado de suministro. Sin embargo, cuando dichas obras tengan un precio mayor al de los bienes o se produjere la situación prevista en el Artículo 64 párrafo 2), el contrato se considerará de obra pública y se regulará por lo dispuesto en el Capítulo V de esta Ley.

SECCION SEGUNDA

EJECUCION

ARTICULO 86.-Ejecución del suministro. El Contratista está obligado a entregar los bienes o a prestar los servicios en el tiempo, lugar y condiciones fijados en el contrato, de conformidad con los requerimientos técnicos y administrativos previstos en el mismo. La mora del Contratista no requiere la previa notificación de la Administración.

ARTICULO 87.-Riesgo del Contratista. Cualquiera que fuere la naturaleza del suministro, el Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados a los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo cuando esta última hubiere incurrido en mora de recibir y el Contratista hubiera efectuado la oportuna denuncia.

ARTICULO 88.-Entrega. La entrega se considerará realizada cuando los bienes o los servicios hayan sido objetivamente recibidos por la Administración de acuerdo con las condiciones del contrato y se hubiere suscrito el acta correspondiente. Salvo pacto en contrario se harán por cuenta del Contratista los gastos de transporte, seguros, servicios portuarios o aduaneros y de entrega de los bienes en el lugar convenido.

Cuando los bienes no se hallen en estado de ser recibidos se hará constar esta circunstancia en el acta que se elaborará, así como las instrucciones precisas que se den al suministrante para que subsane los defectos o faltantes que se hubieren encubierto o para que proceda a una nueva entrega de conformidad con lo pactado.

ARTICULO 89.-Inspección. El órgano responsable de la contratación podrá inspeccionar el proceso de fabricación de los productos que deban entregarse, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo análisis, ensayos o pruebas de los materiales a emplear o de los productos terminados, establecer otros sistemas de control de calidad y tomar cuantas disposiciones estime convenientes para asegurar el estricto cumplimiento de lo convenido.

ARTICULO 90.-Certificación de la calidad de los productos. El Estado a través del órgano administrativo responsable de la ejecución del Contrato, velará porque los productos establecidos en el mismo, sean producidos en los tiempos especificados y con la calidad técnica necesaria, para la certificación de la calidad de los productos, se contemplará preferentemente la contratación de firmas especializadas en la materia o

de profesionales calificados de conformidad al proyecto o programas de que se trate.

ARTICULO 91.-Pagos. El pago del precio podrá realizarse de una sola vez o mediante pagos parciales, de acuerdo con lo que se pacte en el contrato.

Cuando se trate de licitaciones para la adquisición de bienes de los cuales haya fabricación en el país, la forma y términos de pago será igual a la prevista para los proveedores que ofrezcan bienes importados, con el propósito de que ambos compitan en igualdad de condiciones.

Si se tratare de bienes que deban ser importados, los precios se cotizarán, puestos en el lugar donde se indique en el Pliego de Condiciones de la Licitación, con exclusión de los impuestos aduaneros de importación.

Para fines de comparación de precios entre ofertas de bienes de origen nacional o extranjero, se observará lo dispuesto en el Artículo 53 de la presente Ley.

ARTICULO 92.-Repuestos. El Contratista deberá garantizar, cuando fuere requerido según la naturaleza del suministro, la entrega oportuna de repuestos: estará obligado asimismo, cuando fuere necesario, a entrenar al personal que se hará cargo de la operación de las maquinarias o de los equipos que constituyan el objeto del contrato.

Deberá acreditar, en todo caso, que tienen derecho al uso de las patentes o que es titular de los derechos de autor correspondiente.

ARTICULO 93.-Plazo de garantía. Recibidos los bienes en legal forma, comenzará el plazo de garantía de los mismos, debiendo pactarse en el contrato, al igual que la garantía de calidad, cuando proceda. A falta de previsiones contractuales expresas, serán aplicables las reglas legales generales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en la cosa vendida, el Contratista estará obligado a su reposición o a su reparación si ello fuere suficiente, sin perjuicio de que la Administración proceda en su caso a ejecutar la garantía de calidad o a reclamar las demás indemnizaciones que correspondan.

Durante el plazo de garantía tendrá derecho el Contratista a ser oído y a hacer recomendaciones sobre la utilización de los bienes vendidos.

CAPITULO VII

CONTRATO DE CONSULTORIA

ARTICULO 94.-Concepto. Contrato de consultoría es aquel por el cual una persona natural o jurídica, a cambio de un precio, se obliga a prestar servicios específicos a la Administración en la medida y alcances que ésta determine, para efectuar estudios, diseños, asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de términos de referencia y presupuestos, programación o supervisión técnica de obras u otros trabajos de la misma naturaleza.

ARTICULO 95.-Precalificación. Cuando se trata de contratos de consultoría para el diseño o supervisión de obras públicas, además de la convocatoria que se hiciera para el concurso, el órgano responsable de la contratación, previamente llevará a cabo una precalificación de los interesados; esta última también podrá efectuarse una vez al año según disponga el Reglamento. Los criterios de evaluación serán los referidos en el Artículo 44 de la presente Ley.

ARTICULO 96.-Fijación del precio. El precio de los servicios de consultoría podrá pactarse en base a costos más honorarios fijos, precio alzado o por cualquier otro procedimiento técnico fundamentado, objetivo y cierto, que permita determinar su valor en forma justa. En los contratos de diseño o supervisión de obras se efectuarán ajustes de costos por variaciones que sucedan durante su ejecución, cuando ésta se prolongue por más de doce (12) meses o cuando se presenten tasas de inflación superiores a lo estimado en los documentos contractuales.

La Administración analizará y aprobará fórmulas u otros métodos para el reconocimiento de las variaciones de costos relacionados con los servicios de la consultoría, con base en los índices oficiales de precios y costos elaborados por el Banco Central de Honduras, la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción u otros organismos, debiendo indicarse lo procedente en las bases del concurso y en el contrato.

ARTICULO 97.-Detalle de los contratos. Los contratos deberán redactarse suficientemente detallados, definiendo con claridad los términos de referencia, la descripción completa de los trabajos y su programación general, las demás obligaciones de las partes y los sistemas de pago.

ARTICULO 98.-Aplicación de regulaciones del contrato de obra pública. Las disposiciones que regulan la ejecución, terminación y liquidación del contrato de obra pública se aplicarán al contrato de consultoría en lo que fueren pertinentes.

CAPITULO VIII

GARANTIAS

ARTICULO 99.-Garantía de mantenimiento de la oferta. Los interesados en participar en una licitación pública o privada, deberán garantizar el mantenimiento del precio y las demás condiciones de la oferta mediante el otorgamiento de una garantía equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) de su valor. Comunicada que fuere la adjudicación del contrato, dicha garantía será devuelta a los participantes, con excepción del oferente seleccionado quien previamente deberá suscribir el contrato y rendir la garantía de cumplimiento.

ARTICULO 100.-Garantía de cumplimiento. El particular que contrate con la Administración deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato en el plazo que se establezca en el Pliego de Condiciones, equivalente al quince por ciento (15%) de su valor y las demás garantías que determinen los documentos.

En los contratos de obra pública o de suministro con entregas periódicas o diferidas que cubran periodos mayores de doce (12) meses, la garantía de cumplimiento se constituirá por el quince por ciento (15%) del valor estimado de los bienes o servicios a entregar durante el año, debiendo renovarse treinta (30) días antes de cada vencimiento.

ARTICULO 101.-Vigencia de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra o la entrega del suministro. Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta garantía en el plazo previsto, la Administración declarará resuelto el contrato y procederá a la ejecución de la garantía de oferta.

ARTICULO 102.-Ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución de un contrato por un término mayor de dos (2) meses, el Contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo

establecido; si así ocurriere, el valor de la ampliación de la garantía se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.

ARTICULO 103.-**Aumento de la estimación del contrato.** Si a consecuencia de la modificación de un contrato su monto aumentare por incremento de las prestaciones a cargo del Contratista, éste deberá ampliar la garantía de cumplimiento teniendo como base el saldo del contrato modificado que estuviere por ejecutarse.

ARTICULO 104.-**Garantía de calidad.** Efectuada que fuere la recepción final de las obras o la entrega de los suministros y realizada la liquidación del contrato, cuando se pacte en el contrato, de acuerdo con la naturaleza de la obra o de los bienes, el Contratista sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra o de los ~~bienes~~ suministrados, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor.

ARTICULO 105.-**Garantía por anticipo de fondos.** Cuando se pacte un anticipo de fondos al Contratista la cuantía será no mayor del veinte por ciento (20%), éste último deberá constituir una garantía equivalente al cien por ciento (100%) de su monto. El anticipo será deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera estimación de obra ejecutada, en la misma proporción en que fue otorgado. En la última estimación se deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantía será por el mismo plazo del contrato y concluirá con el reintegro total del anticipo.

ARTICULO 106.-**Garantía en los contratos de consultoría.** En los contratos de consultoría la garantía de cumplimiento se constituirá mediante retenciones equivalentes al diez por ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios. En los contratos para el diseño o supervisión de obras también será exigible una garantía equivalente al quince por ciento (15%) de honorarios con exclusión de costos.

ARTICULO 107.-**Definición de Garantías.** Se entenderá por garantías las fianzas y las garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u otras análogas que establezca el Reglamento de esta Ley.

ARTICULO 108.-**Verificación de garantías.** El órgano encargado de velar por la correcta ejecución del contrato, será responsable de que las garantías se constituyan oportunamente por el Contratista, y que cumplan los fines para los que fueron expedidas. En consecuencia, si hubiere reclamos pendientes estando próximo a expirar cualquier garantía que responda por obligaciones del Contratista, la autoridad competente notificará este hecho a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento la garantía afecta al resultado de los reclamos.

ARTICULO 109.-**Ejecución de garantías.** Las garantías constituidas por los contratistas tendrán carácter de título ejecutivo y su cumplimiento se exigirá por la vía de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolución por incumplimiento del Contratista.

La administración gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantías.

Quienes otorguen estas garantías a favor de los Contratistas no gozarán del beneficio de excusión. ?

CAPITULO IX

FORMALIZACION Y DERECHOS DE LAS PARTES

SECCION PRIMERA

FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

ARTICULO 110.-**Formalización.** La formalización de los contratos no requerirá otorgamiento de Escritura Pública, ni uso de papel sellado y timbres y se entenderán perfeccionados a partir de su suscripción, sin perjuicio de la aprobación requerida en los casos previstos en los Artículos 11 y 13 de la presente Ley.

ARTICULO 111.-**Plazo de la formalización.** Los contratos se suscribirán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación de la adjudicación, a menos que el Pliego de Condiciones dispusiera un plazo mayor.

Se exceptúan los contratos de suministros para cuyo perfeccionamiento bastará la aceptación de la oferta comunicada por escrito al adjudicatario y la emisión de la correspondiente orden de compra.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no tendrá efecto cuando el Pliego de Condiciones o los convenios de financiamiento suscritos por el Gobierno de la República, dispusieren otro procedimiento para la formalización de dichos contratos.

ARTICULO 112.-**Documentos públicos.** Los Contratos perfeccionados y registrados constituyen documentos públicos con fuerza ejecutiva.

Forman parte de los contratos las cláusulas del Pliego de Condiciones y los documentos que como anexos se incorporen a los mismos.

ARTICULO 113.-**Registro de contratos.** Los contratos de la Administración Centralizada serán registrados para fines de ejecución presupuestaria en la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y en los órganos de control presupuestario de las Secretarías de Estado correspondientes.

Los contratos de los organismos de la Administración Descentralizada o de los entes públicos previstos en el Artículo 1 de la presente Ley, serán registrados por sus órganos de control presupuestario.

Cuando los contratos se financien con fondos externos se remitirá copia a la Dirección General de Crédito Público.

SECCION SEGUNDA

CESION Y SUB-CONTRATAACION

ARTICULO 114.-**Cesión de contratos.** Los derechos derivados de un contrato podrán ser cedidos a tercero siempre que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido la razón determinante de la adjudicación.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían al cedente.

ARTICULO 115.-**Requisitos para la cesión.** Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros deberán cumplirse los requisitos siguientes:

- 1) Que la Administración autorice expresamente y por escrito la cesión del contrato; y,
- 2) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración.

ARTICULO 116.-Subcontratación. Salvo que el contrato disponga lo contrario o cuando de su naturaleza y condiciones se deduzca que la prestación ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podrá éste subcontratar con terceros la realización de determinados trabajos específicos.

La celebración de estos subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos siguientes:

- 1) Que la Administración autorice expresamente y por escrito la subcontratación con indicación de su objeto y de las condiciones económicas;
- 2) Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato; y,
- 3) Que el Contratista principal siga siendo responsable directo ante la Administración.

ARTICULO 117.-Requisitos para la cesión y subcontratación. En la cesión o en la subcontratación, los terceros deberán tener capacidad legal para contratar con la Administración y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en los Artículos 15 y 16 de esta Ley.

ARTICULO 118.-Formalización de la cesión. La cesión deberá formalizarse mediante Escritura Pública, debiendo notificar al nuevo contratista, entregando copia autenticada de la misma.

SECCION TERCERA

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

ARTICULO 119.-La Administración tendrá las prerrogativas siguientes:

- 1) Facultad para dirigir, controlar o supervisar la ejecución del contrato;
- 2) Facultad para modificar el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las compensaciones que correspondan al Contratista y dentro de los límites de esta ley;
- 3) Facultad para suspender o resolver el contrato de conformidad con la presente Ley, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito; y,
- 4) Facultad para imponer sanciones y ejecutar garantías cuando el contratista no cumpla con sus obligaciones.

ARTICULO 120.-Interpretación de los contratos. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretación de alguna estipulación contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio público, la Administración interpretará mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución

del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan.

ARTICULO 121.-Modificación de los contratos. La Administración podrá modificar por razón de interés público, los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley y sus normas reglamentarias.

Cuando la modificación del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del contratista se pagará su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la cláusula de ajuste por incremento de costos.

Si la resolución por causas no imputables al contratista le ocasionare daños o perjuicios, la Administración estará obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor se liquidará únicamente la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del contrato.

ARTICULO 122.-Forma de la modificación. Las modificaciones introducidas por la Administración que importen aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante órdenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de la ejecución del contrato, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.

Si la modificación excediere el porcentaje indicado, se suscribirá una ampliación del contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Artículo 121 párrafo 2) de la presente Ley.

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos previstos en el Artículo 13 de la presente Ley, la modificación a que se refiere este Artículo no requerirá de nueva aprobación.

ARTICULO 123.-Fundamento y efectos. Toda modificación deberá ser debidamente fundamentada y procederá cuando concurren circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el interés público perseguido; el valor de las modificaciones acumuladas no podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto, si excediese del veinticinco por ciento (25%) requerirán aprobación del Congreso Nacional.

Las modificaciones que impliquen disminución de las prestaciones a cargo del contratista, no darán lugar a indemnización, excepto cuando sean mayores al diez por ciento (10%), sin perjuicio del reconocimiento de los gastos en que razonablemente haya incurrido en previsión de la ejecución total del contrato, si constaren acreditados. En todo caso, el contratista tendrá derecho a la resolución del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminución o aumento de las prestaciones a su cargo en cuantía superior al veinte por ciento (20%) del valor contratado.

SECCION CUARTA

DERECHOS DE LOS CONTRATISTAS

ARTICULO 124.-Derechos de los contratistas. Los contratistas tendrán los derechos siguientes:

- 1) Derecho a la plena ejecución de lo pactado, salvo los supuestos de resolución y modificación establecidos en esta Ley;

- 2) Derecho al reconocimiento de mayores costos según los términos de esta Ley;
- 3) Derecho al pago de intereses por mora de conformidad con el Artículo 28 de la presente Ley;
- 4) Derecho a la terminación anticipada cuando corresponda de conformidad con la presente Ley; y,
- 5) Derecho a las indemnizaciones previstas en la presente Ley.

ARTICULO 125.-Solicitud de modificación de plazo. Siempre que mediare causa justificada prevista contractualmente, el contratista podrá solicitar la modificación de los plazos de entrega de las prestaciones objeto del contrato, o de cualquier otra estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones, en cuyo caso presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato dentro del plazo estipulado para tal efecto, o en su defecto, antes del vencimiento del plazo de entrega de las obras, bienes o servicios de que se trate.

SECCION QUINTA

TERMINACION Y LIQUIDACION

ARTICULO 126.-Terminación. Los contratos terminarán por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes, o por resolución por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de conformidad con esta Ley.

ARTICULO 127.-Causas de resolución. Son causas de resolución de los contratos:

- 1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas;
- 2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes;
- 3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administración;
- 4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores;
- 5) La disolución de la sociedad mercantil contratista;
- 6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad financiera;
- 7) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución;
- 8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto;
- 9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes; y,

11) Las demás que establezca expresamente el contrato.

No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la resolución contemplada en este Artículo sea consecuencia del incumplimiento contractual de la Administración, o por mutuo acuerdo.

ARTICULO 128.-Resolución imputable al contratista. Cuando la resolución se deba a causas imputables al Contratista, la Administración declarará de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el Acuerdo correspondiente.

El Acuerdo de resolución del contrato se notificará personalmente al Contratista o por medio de su representante legal. En todo caso, quedan a salvo los derechos que correspondan al Contratista.

Cuando la resolución de un contrato sea declarada improcedente por tribunal competente, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que se causaren.

Una vez firme o consentida la resolución del contrato, el Contratista tendrá derecho en la liquidación del mismo al pago de los remanentes que pudieren resultar a su favor.

ARTICULO 129.-Resolución imputable a la Administración. El incumplimiento por la Administración de las cláusulas del Contrato originará su resolución sólo en los casos previstos en esta Ley; en tal caso, el Contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren.

Cuando así ocurra, el Contratista solicitará a la Administración la resolución del contrato; si ésta no se pronunciare favorablemente, agotada que fuere la vía administrativa, el Contratista podrá recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o a un arbitraje.

Lo estipulado en esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 116 párrafo 2) de la presente Ley.

ARTICULO 130.-Supuestos de liquidación. Deberá procederse a la liquidación del contrato en los casos siguientes:

- 1) Cuando sea firme el Acuerdo que declaró su resolución;
- 2) Cuando la resolución se hubiere producido por mutuo acuerdo de las partes; y,
- 3) Cuando se hubieren cumplido normalmente las prestaciones de las partes.

ARTICULO 131.-Control de la liquidación. En los casos contemplados en los numerales 1) y 2) del Artículo anterior, la liquidación se practica con asistencia de representantes de los órganos contralores del Estado, debiendo elaborarse acta en la que se dejará constancia del estado de ejecución de las obras o de las demás prestaciones contratadas, así como, de las cantidades de dinero que se hubieren abonado, de las sanciones económicas aplicables y de cualquier otro dato que fuere de importancia.

CAPITULO X

DE LAS SANCIONES

SECCION PRIMERA

GENERALIDADES

ARTICULO 132.-**Procedimiento de sanción.** Las sanciones comprendidas en este Capítulo se impondrán por el órgano responsable de la contratación respetando la garantía del debido proceso.

ARTICULO 133.-**Responsabilidad penal y patrimonial.** La aplicación de las sanciones administrativas previstas en este Capítulo no excluye de las eventuales sanciones penales por conductas de tal naturaleza en que hubieren incurrido los funcionarios públicos o los particulares. Tampoco excluye la posibilidad de exigir la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados a la Administración.

SECCION SEGUNDA

SANCIONES A FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PUBLICOS

ARTICULO 134.-**Suspensión sin goce de salario.** Se impondrá suspensión sin goce de salario por tres (3) meses, al funcionario o empleado público que cometa alguna de las infracciones siguientes:

- 1) Omitir la incorporación oportuna al expediente de contratación, debiendo hacerlo, de documentación atinente al mismo;
- 2) Impedir o dificultar de manera injustificada el acceso a un expediente administrativo de cuyo manejo o custodia esté encargado;
- 3) Omitir maliciosamente información relevante para el estudio de las ofertas;
- 4) Retrasar injustificadamente el trámite de los pagos que deban satisfacer los organismos del sector público a sus proveedores o contratistas;
- 5) Retrasar de modo injustificado la recepción de bienes u obras; y,
- 6) Participar en actividades organizadas, patrocinadas o financiadas por los proveedores o contratistas ordinarios o potenciales, dentro o fuera del país, cuando no formen parte de los compromisos de capacitación formalmente adquiridos en las contrataciones administrativas y sin autorización de la máxima autoridad del organismo para el cual labora.

ARTICULO 135.-**Despido sin responsabilidad patronal.** Incurrirá en causal de despido sin responsabilidad patronal, el servidor público que cometa alguna de las faltas siguientes:

- 1) Reincidir en la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en el Artículo anterior, dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que quede firme la sanción impuesta previamente;
- 2) Suministrar a un oferente información que le dé ventajas sobre los demás contratistas potenciales;

- 3) Recibir o solicitar dádivas, comisiones o regalías de los contratistas ordinarios o potenciales del ente para el cual labora, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal;
- 4) Hacer que el Estado incurra en pérdidas patrimoniales mayores que al monto equivalente a doce (12) meses del salario devengado por el funcionario responsable en el momento de cometer la falta, si realiza la acción con dolo, culpa grave o negligencia en el trámite del procedimiento para contratar o en el control de su ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que proceda;
- 5) Dar por recibidos bienes, obras o servicios que no se ajusten a lo adjudicado, causando perjuicios al patrimonio público;
- 6) Participar directa o indirectamente en un procedimiento de contratación a sabiendas de que está comprendido en cualquiera de las causas de inhabilitación establecidas en esta Ley;
- 7) Recomendar la contratación con una persona física o jurídica comprendida en el régimen de inhabilitaciones para contratar previsto en esta Ley, siempre que hubiere conocido esta circunstancia antes de la recomendación; y,
- 8) Disponer el fraccionamiento ilegal de las contrataciones para omitir los procedimientos de contratación previstos en esta Ley.

ARTICULO 136.-**Remisión al régimen disciplinario.** Cualquier otra irregularidad en que incurran los funcionarios o empleados públicos en el curso de los procedimientos de contratación administrativa, será sancionada de acuerdo con el régimen disciplinario previsto en las normas generales sobre la materia.

SECCION TERCERA

SANCIONES A PARTICULARES

ARTICULO 137.-**Sanciones.** El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contratista será anotada en el Registro de Proveedores y Contratistas, debiendo los organismos contratantes enviar a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quedaren firmes, copias certificadas de los actos administrativos que impusieren las correspondientes sanciones.

ARTICULO 138.-**Procedimiento.** En las diligencias iniciadas como consecuencia de la denuncia de infracciones, el órgano responsable de la contratación, antes de resolver, procederá a notificar personalmente y posteriormente dará vista a los interesados por el término de tres (3) días hábiles después de notificado para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello, hubiera necesidad de obtener alguna prueba, se observará lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo; concluido el procedimiento se emitirá la resolución definitiva, la cual será recurrible de conformidad con la citada Ley.

ARTICULO 139.-**Sanción de suspensión hasta por un (1) año.** Se hará acreedora a la sanción de suspensión del Registro de Proveedores y Contratistas hasta por un (1) año, la persona natural o jurídica que durante el curso de los procedimientos para contratar incurra en cualquiera de las conductas siguientes:

- 1) Afectar reiteradamente y sin fundamento el normal desarrollo de los procedimientos de contratación;

- 2) Dejar sin efecto su oferta, sin mediar causa justa; y,
- 3) Invocar hechos falsos en los procedimientos para contratar o en los recursos contra el acto de adjudicación.

ARTICULO 140.-Sanción de suspensión entre un (1) año y cinco (5) años. Será suspendido para participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de uno (1) a cinco (5) años según la gravedad de la falta, la persona natural o jurídica, que:

- 1) Incumpla por más de tres (3) ocasiones el plazo o cumpla defectuosamente el objeto del contrato sin motivo suficiente, sin perjuicio de la resolución del mismo cuando corresponda de conformidad con esta Ley.
- 2) Reincida en cualquiera de las conductas a que se refiere el Artículo anterior, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que quede firme la sanción;
- 3) Obtenga fraudulentamente, directa o indirectamente, información confidencial que la coloque en una situación de ventaja respecto de otros competidores potenciales;
- 4) Suministre dádivas, comisiones o regalías, directamente o por intermedio de otra persona, a los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de contratación administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra.
- 5) Suministre un objeto o servicio de inferior condición o calidad al ofrecido; y,
- 6) Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación aun cuando esté incluido en el régimen de inhabilidades previsto por esta Ley.

ARTICULO 141.-Límite de las sanciones. No se podrá imponer sanciones después de transcurrido el término de dos (2) años contados desde la fecha en que se cometió la infracción.

Lo dispuesto en los Artículos 138 y 139 de esta Ley, se entiende sin perjuicio de las multas por demora u otras sanciones previstas en el Contrato o en la presente Ley.

CAPITULO XI

MECANISMOS DE IMPUGNACION

SECCION UNICA

ACLARACIONES Y RECURSOS

ARTICULO 142.-Actos recurribles. Los potenciales oferentes en un procedimiento de contratación, podrán solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones dentro del plazo que para tal efecto se establezca, debiendo obtener pronta respuesta del órgano responsable de la contratación, la cual será comunicada a todos los interesados con omisión de la identificación del solicitante, con suficiente anticipación antes de la fecha límite de presentación de ofertas, según se establezca en el Reglamento; si fuere necesario dicha fecha será propuesta, ?

La validez del acto de adjudicación podrá ser impugnado observando lo previsto en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Previamente deberá agotarse la vía administrativa, en estos casos, los plazos para interponer y para resolver los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo se reducirán a la mitad de lo establecido en dicho texto legal.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

SECCION PRIMERA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 143.-Disposición en suspenso. Mientras las condiciones existentes para los estudios de los proyectos mejoran durante tres (3) años a partir de la vigencia de esta Ley, queda en suspenso la vigencia del párrafo primero del Artículo 120. ?

ARTICULO 144.-Efecto de las sanciones. Las sanciones no tendrán efecto retroactivo y por lo tanto, no afectarán a los contratos que estén en curso de acción en el momento que inicie su vigencia la presente Ley.

ARTICULO 145.-Contratos anteriores. Los contratos suscritos antes de la vigencia de la presente ley, continuarán regulándose por las normas anteriores, sin perjuicio de las regulaciones de control, supervisión, registro y régimen de impugnaciones previstas en la presente Ley.

SECCION SEGUNDA

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 146.-Normas Supletorias. En defecto de normas expresas de la presente Ley, tendrán aplicación supletoria en la contratación administrativa las restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto las normas de Derecho Privado.

ARTICULO 147.-Declaratoria de interés público. Se declara de interés público el desarrollo de la actividad técnica y profesional relacionada con la prestación de servicios profesionales, así como, la promoción de la capacidad y experiencia empresarial que existe en el país para la construcción de obras públicas, la prestación de servicios de consultoría, auditoría u otros servicios profesionales en general, para incentivar la producción nacional.

Con este objeto el Estado adoptará las medidas necesarias y convenientes para que se realice la más amplia contratación de empresas y de profesionales hondureños tomando, entre otras, las medidas siguientes:

- 1) El reconocimiento de un margen de preferencia nacional de acuerdo con lo previsto en el Artículo 53 de la presente Ley; ?
- 2) Las condiciones de licitación deberán considerar alternativas de bienes fabricados en Honduras que técnicamente resultaren viables de sustituir, siempre que resultare más económica su adquisición;
- 3) Los documentos de licitación deben contener condiciones que permitan a los fabricantes nacionales competir en igualdad de condiciones con las fábricas localizadas en otros países en donde reciben subsidios, subvenciones o incentivos debidamente comprobados;

- 4) Cuando el valor de un Proyecto se estime en más de CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L. 50,000,000.00), podrá ser licitado en secciones o etapas, si la naturaleza técnica de la obra lo permite y siempre que no se incremente su costo y el tiempo de ejecución, procurando que el costo por sección o etapa no sea mayor de QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS (L. 15,000,000.00), en una secuencia tal que brinde mayores oportunidades de participación a los contratistas nacionales. Estos valores serán actualizados periódicamente considerando las condiciones económicas prevalecientes; y,
- 5) En los contratos que se financian exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños.

ARTICULO 148.-Criterios para fijar el precio de la asistencia técnica. El precio de la asistencia técnica podrá fijarse sobre la base de salarios, honorarios profesionales, beneficios sociales, costos directos, gastos generales y utilidades; precio global o precio alzado por cualquier otro conocimiento técnico fundamentado en forma objetiva y cierta que permita determinar su valor en forma justa todo de acuerdo a las leyes del país.

ARTICULO 149.-Participación de empresas nacionales. Por razones de interés público, las empresas extranjeras deberán dar participación a las empresas nacionales en la ejecución del factor calidad, obra, tiempo y servicios que proyecten realizar en el país, según estuviese prescrito en los Pliegos de Condiciones o términos de referencia.

ARTICULO 150.-Transferencia de tecnología. Para efectos de lograr la transferencia de tecnología, los funcionarios que intervengan en la precalificación de licitantes o en el concurso, deberán procurar que las empresas o personas extranjeras concedan mayor participación y responsabilidad a los profesionales nacionales, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia correspondientes.

ARTICULO 151.-Participación de consultores nacionales. Los contratos de consultoría que celebren empresas extranjeras deberán ser ejecutados en Honduras, debiendo darse participación al personal nacional según estuviere previsto en los términos de referencia.

ARTICULO 152.-Restricción para construcción. Las empresas diseñadoras de los proyectos no podrán participar en las licitaciones para la construcción de los mismos.

ARTICULO 153.-Costo de Pliegos de Condiciones. La Administración cobrará a los interesados, un precio por la entrega de los Pliegos de Condiciones y demás documentos anexos de las licitaciones y concurso, el cual se determinará por cada caso. Este precio no podrá ser superior al costo de producción o impresión.

ARTICULO 154.-Contratos de Asistencia Técnica, Agropecuaria, Forestal, Biodiversidad, Recursos Naturales y Ambiente. Son aquellos por los cuales una persona natural o jurídica a cambio de un precio se

obliga a prestar servicios de asistencia técnica al Estado por la naturaleza particular de estos contratos en lo que se trabaja con personas, animales y plantas y que en general no pueden medirse objetivamente en el corto tiempo.

ARTICULO 155.-Adquisición de maquinaria y equipo usado. No obstante, lo dispuesto en el Artículo 83 de la presente Ley, las Municipalidades de manera individual o colectiva, están autorizados para adquirir maquinaria y equipo con un uso no mayor de ocho (8) años, de marcas representadas en Honduras, siempre que dichas adquisiciones se hagan en subasta o licitación pública. En este último caso, el proveedor garantizará el buen funcionamiento de la maquinaria o equipo por un período mínimo de tres (3) meses o seiscientos (600) horas de uso. La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), deberá proporcionar asistencia técnica en estos casos.

ARTICULO 156.-Derogatoria. Derógase la Ley Orgánica de la Proveduría General de la República, contenida en el Decreto No. 40 del 28 de abril de 1958, la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No. 148-85 del 29 de agosto de 1985 y sus reformas y las demás disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

ARTICULO 157.-Reglamentación. El Poder Ejecutivo procederá a la reglamentación de la presente Ley, en un plazo máximo de noventa (90) días hábiles a partir de su vigencia. En tanto se emitan los respectivos reglamentos, continuarán aplicándose los emitidos antes de la vigencia de esta Ley, en cuanto no se opongan al contenido de la misma.

ARTICULO 158.-Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, el uno de junio del dos mil uno.

RAFAEL PINEDA PONCE
Presidente

JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA
Secretario

ROLANDO CARDENAS PAZ
Secretario

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de junio del 2001.

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE
Presidente Constitucional de la República

El Secretario de Estado en el Despacho Presidencial

GUSTAVO A. ALFARO Z.

LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL

Antecedentes

Esta ley contenida en el Decreto No. 283-98 del 20 de Noviembre 1998, fue publicada en la Gaceta No. de fecha entrando en vigencia veinte (20) días después de esta última fecha; tiene por objeto *regular todos los procesos de gestión y prestación de servicios públicos, contratación de infraestructura y prestación de otros servicios realizadas por particulares (personas naturales o jurídicas no estatales) bajo condicionamientos impuestos por el Estado.* Es conocida también como Ley de Concesiones; sus disposiciones derogan a la antigua Ley de Concesiones de 1948 y a la Ley de Concesionamiento para la Explotación de los Servicios Aeroportuarios de 1995.

Se trata de una ley moderna de reciente aprobación, que todavía no ha logrado una plena aplicación por parte de las municipalidades. Su importancia para este sector radica en que se trata de una herramienta muy actual que puede contribuir a promover, expandir y hacer mas eficiente la prestación de los servicios públicos municipales en condiciones de sostenibilidad, continuidad y eficiencia en provecho de los usuarios, aprovechando la inversión privada. La Ley establece además un marco de regulaciones que protege el interés de los usuarios y salvaguarda el rol del Estado como regulador y garante en la prestación de los servicios públicos ante los ciudadanos.

Conjuntamente con la Ley de Contratación del Estado forman un conjunto de disposiciones o normas mediante las cuales se regula la administración de una masa muy considerable de recursos públicos, la cual debe hacerse en las mejores condiciones de transparencia, de libertad e igualdad de competencia y sobre todo libre de cualquier vicio, negligencia administrativa o delitos administrativos que lesionen los fondos públicos y los intereses de los ciudadanos y del Estado.

Contenido

- Capítulo I. Disposiciones Generales.
- Capítulo II. Concesiones
- Capítulo III. Otras modalidades de gestión indirecta de los servicios públicos.
- Capítulo IV. De la Superintendencia para el funcionamiento, operación, vigilancia y control de las concesiones.
- Capítulo V. Disposiciones Finales.

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco. Lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.

LA GACETA

Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

Diario Oficial de la República de Honduras
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA

Director Licenciado: FEDERICO DUARTE ACOSTA 499

AÑO CXXIII

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS LUNES 18 DE ENERO DE 1999

NUM. 28,768

PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 283-98

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que es de interés público el desarrollo de mecanismos innovadores para la prestación de servicios públicos, procurando la expansión de la cobertura y las mejores condiciones de calidad, continuidad y eficiencia en provecho de los usuarios.

CONSIDERANDO: Que la actual situación del Estado no permite la programación y ejecución de grandes inversiones en infraestructura para la prestación de servicios públicos, por lo que es necesario un marco legal adecuado que propicie la inversión privada en este ámbito.

CONSIDERANDO: Que los contratos de concesión o gestión de servicios públicos, así como el otorgamiento de licencias cuando corresponda, sujetos a la necesaria regulación en garantía del interés público, constituyen modalidades para asegurar los objetivos señalados.

POR TANTO,

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.-La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la prestación y gestión indirecta de los servicios públicos, contratación de la formación profesional e infraestructura, ejecutadas por personas naturales o jurídicas no estatales.

ARTICULO 2.-Esta Ley, la legislación regulatoria del servicio público de que se trate, el pliego de términos y condiciones aplicables a la licitación pública o al concurso público, el contrato de concesión o la licencia, según corresponda, constituyen las normas fundamentales a las cuales se sujeta la prestación y gestión indirecta de los servicios públicos, formación profesional e infraestructura.

CONTENIDO

PODER LEGISLATIVO

	Págs.
DECRETOS Nos. 283-98, 203-98.....	1-7
Agosto, Noviembre, 1998	

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

	Págs.
ACUERDOS Nos. 263-98, 264-98 y 406-98.....	5-7
ACUERDO No. 250-98.....	24

A V I S O S

ARTICULO 3.-El marco regulatorio para cada servicio público debe atender los principios siguientes:

- 1) Protección adecuada de los derechos de los usuarios;
- 2) Promover la confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios públicos;
- 3) Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales; y,
- 4) Alentar la realización de inversiones privadas y la competitividad.

ARTICULO 4.-El Poder Ejecutivo y las Municipalidades en el ámbito de su respectiva competencia, pueden encomendar la prestación y gestión indirecta de servicios públicos, formación profesional e infraestructura mediante cualesquiera de las siguientes modalidades o una combinación de ellas:

- 1) Otorgamiento de concesiones o licencias según corresponda, para la prestación o explotación de servicios públicos e infraestructura bajo las condiciones que se fijan en esta Ley;
- 2) Transferencia de la titularidad de derechos societarios o de la administración de empresas que presten servicios públicos; y,
- 3) Otorgamiento de contratos de gestión de servicios públicos.

La prestación y gestión indirecta de servicios públicos, formación profesional e infraestructura, en los casos previstos en los numerales 1) y 2) se basará en la asunción del riesgo empresarial, en los términos previstos en esta Ley y en el contrato de gestión o licencia, por parte del concesionario, licenciataria o adquirente y la adecuada equivalencia entre las inversiones efectivamente realizadas y la rentabilidad. Los contratos previstos en el numeral 3) estarán sujetos a lo dispuesto en el Artículo 24 de la presente Ley.

ARTICULO 5.—Corresponde al Presidente de la República en Consejo de Ministros, en el ámbito del Gobierno Central, decidir sobre las acciones previstas en el Artículo 4 de la presente Ley.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) es competente para conocer de las solicitudes y otorgar las concesiones para la prestación y gestión indirecta de servicios públicos, formación profesional e infraestructura, incluyendo la preparación de los pliegos de condiciones, tramitación de los procedimientos de adjudicación y la suscripción de los contratos, su prórroga, caducidad, rescate y extinción; para este propósito, dicha Secretaría de Estado contará con la asistencia y asesoría técnica de una Comisión Consultiva, que al efecto creará el Poder Ejecutivo. Además, la misma operará conforme a las normas y procedimientos determinados por la Superintendencia de Concesiones y Licencias.

Cuando se cumpla lo previsto en el Artículo 205, numeral 19) de la Constitución de la República, los contratos de concesión suscritos entre el Poder Ejecutivo o las Municipalidades y los peticionarios, serán aprobados por el Congreso Nacional.

ARTICULO 6.—El otorgamiento de la prestación y gestión indirecta de los servicios públicos, formación profesional e infraestructura, previstos en la presente Ley, estarán sujetos a cualesquiera de los procedimientos siguientes:

- 1) Licitación o subasta pública, nacional o internacional, deberá ir consignado en el pliego de condiciones;
- 2) Concurso público nacional o internacional, el cual deberá ir consignado en el pliego de condiciones. El concurso público se utilizará para la evaluación de proyectos integrales presentado por los interesados, cuando no estuvieren previamente definidos por la administración y además, siempre que el precio no sea el único factor determinante de la adjudicación, en todo caso, cuando se establezca un precio base, éste deberá ser consignado en el pliego de condiciones.

Los procedimientos se desarrollarán en los términos y condiciones específicos que se establezcan en los correspondientes pliegos de condiciones, que habrán de respetar los principios de transparencia, objetividad y publicidad que consignan al menos las fases siguientes:

- a) Aprobación del pliego de condiciones previo conocimiento del Congreso Nacional;
- b) Publicación en el Diario Oficial La Gaceta y en dos diarios de mayor circulación en el país, de la invitación a participar en el proceso en condiciones normales;
- c) Precalificación;
- ch) Presentación de propuestas;
- d) Adjudicación; y,
- e) Formalización.

El pliego de condiciones determinará, entre otros, los requisitos que deben satisfacer los oferentes, el tipo y monto de las garantías exigidas a los interesados, el o los criterios de valoración de las propuestas técnicas, económicas y materiales las condiciones de prestación de los servicios. Los materiales, equipos y servicios que el Estado ofrezca deberá expresarse en el pliego de condiciones con sus respectivos valores presupuestados y las condiciones de prestación de servicios.

ARTICULO 7.—Serán admisibles las ofertas de compañías, sociedades y consorcios extranjeros en los procedimientos de selección previstos en la presente Ley, siempre que, cuando la modalidad para la prestación del servicio lo requiera y así se determine en el pliego de condiciones, se obligue de resultar adjudicatarios a constituir una sociedad mercantil con domicilio en Honduras con la finalidad de prestación de los servicios, bajo los términos y condiciones que dispongan los respectivos pliegos; y, en su caso, el contrato o la licencia.

CAPITULO II

CONCESIONES

ARTICULO 8.—Las concesiones pueden tener cualesquiera de las siguientes modalidades o una combinación de ellas:

- 1) La construcción de obras o instalaciones públicas, su mantenimiento y la prestación o explotación del servicio público a que estén destinadas;
- 2) El mantenimiento de obras o instalaciones públicas ya construidas o su ampliación y mantenimiento, la operación y la explotación del servicio; y,
- 3) La prestación de servicios públicos que no requieren de obras o instalaciones públicas permanentes o que se presten mediante instalaciones privadas.

En cualquiera de dichas modalidades, las concesiones podrán incluir junto a la explotación del servicio público, la explotación de otros servicios conexos o complementarios que se gestionen en obras, instalaciones o predios públicos, siempre que aparezca en el pliego de condiciones.

ARTICULO 9.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2 de la presente Ley, el contrato de concesión deberá incluir como mínimo:

- 1) El Poder Ejecutivo y las Municipalidades en el ámbito de su competencia, determinarán el número de concesionarios para el servicio de que trate el área geográfica y el espacio en que se prestará;
- 2) El plazo por el cual se otorga los requisitos y condiciones en caso de prórroga;
- 3) Las obligaciones a cargo del concesionario incluyendo, en su caso, el pago de un canon, tasa u otra contraprestación y sus modalidades, la expansión del servicio, las condiciones y la calidad técnica con que deberá prestarse, las garantías previstas y las demás que resulten de la naturaleza del servicio;

- 4) Los derechos del concesionario, incluyendo los que correspondan frente a los usuarios;
- 5) En los aspectos que determine el pliego, el régimen tarifario, especificando el mecanismo o las fórmulas para su determinación o para su ajuste, cuando proceda y los conceptos que la tarifa debe cubrir, incluyendo la rentabilidad de la inversión realizada;
- 6) Las regulaciones ambientales que en su caso, se estimen necesarias;
- 7) Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento;
- 8) Los supuestos en que el concedente puede rescatar el servicio o terminar anticipadamente la concesión, el mecanismo para determinar la indemnización al concesionario para el caso de rescate del servicio o de determinación anticipada de la concesión, indemnización que como mínimo habrá de cubrir el valor de la parte no amortizada de los bienes que reviertan;
- 9) El mecanismo para determinar la indemnización a una parte, para el caso de incumplimiento de las obligaciones de la otra parte;
- 10) La información técnica y económico-financiera que se debe poner a disposición de la autoridad reguladora del servicio y a los procedimientos de auditoría que deberán sujetarse;
- 11) Las partes podrán pactar que los conflictos sean dirimidos por árbitros o arbitradores, y,
- 12) Las demás que resulten de la naturaleza del servicio.

ARTICULO 10.—Las decisiones a que se refiere el Artículo 5 de la presente Ley implican la declaración de utilidad pública directamente de los bienes de dominio privado que fueren necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de las obras requeridas para la prestación de los servicios objeto de concesión y en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 106 de la Constitución de la República.

El Poder Ejecutivo individualizará oportunamente los bienes sujetos a la declaración de utilidad pública.

Si los bienes fueren de propiedad privada y no hubiere acuerdo en su precio, éste se determinará conforme lo establece el Código de Procedimientos en Materia Civil.

ARTICULO 11.—El otorgamiento de una concesión comprende la imposición a favor del concesionario de las servidumbres legales, sobre el predio de propiedad pública o privada que fuere necesaria para la adecuada prestación del servicio comprendida por la concesión, procurando evitar daños innecesarios a los predios sirvientes.

A petición del concesionario, el concedente individualizará los predios afectados por servidumbre legales y determinará el alcance de las mismas. Una vez fijado pericialmente o decidido judicialmente el monto de indemnización, salvo que el contrato de concesión prevea lo contrario, el pago de las indemnizaciones que resultaren por predio privado corresponderá al concesionario.

ARTICULO 12.—Cuando fuere necesario disponer del uso del subsuelo y de los bienes nacionales o municipales de uso público, por parte del concesionario para la construcción de obras o instalaciones destinadas a la prestación del servicio, el contrato de concesión puede disponer las condiciones de uso por el concesionario.

ARTICULO 13.—El Estado y las Municipalidades no comprometerán fondos públicos para financiar a los concesionarios ni otorgarán avales con ese fin.

No obstante, el contrato podrá prever, aportes de fondos del Estado o Municipales por razones de interés público y en beneficio del Estado, de las Municipalidades o del usuario.

ARTICULO 14.—Las Corporaciones Municipales, por votación no menor de las dos terceras partes de sus miembros, pueden otorgar, concesión, para la construcción de obras o para prestar servicios públicos, cuando no puedan suministrarlos directa y eficientemente.

El acuerdo municipal que autorice el trámite de una concesión, se enviará a la Contraloría General de la República, ésta podrá objetarla por razones de ilegalidad.

En todo caso se tomará en consideración el impacto ambiental del proyecto y para ese efecto deberá obtenerse el criterio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.

ARTICULO 15.—El Concesionario tendrá derecho a suspender el servicio a los usuarios que incurrieren en mora en el pago de las tarifas, de conformidad con las disposiciones del contrato de concesión y el marco regulatorio aplicable.

El Estado de cuenta correspondiente constituirá título ejecutivo para los efectos de su cobro judicial. Sin embargo, el usuario podrá acudir ante la Superintendencia de Concesiones y Licencias quien actuará como mediador, y en el caso, de no haber acuerdo, tendrá la vía expedita a la justicia ordinaria.

ARTICULO 16.—En ningún caso se podrá enajenar, embargar, o someter a cualesquiera otro gravamen, los bienes que sean utilizados para la prestación o gestión del servicio público de que trate la concesión.

No obstante, los acreedores podrán exigir al concesionario el cumplimiento de sus derechos por el proceso judicial, mediante la designación de un interventor con cargo a caja.

Producida la extinción de la concesión, el derecho a la prestación o gestión del servicio y la propiedad de los bienes destinados directamente a dicha prestación o gestión, pasarán al concedente, bajo las condiciones que determine el contrato de concesión y con sujeción a lo previsto en el Artículo 9, numeral 8) de la presente Ley. Así como también, todos las construcciones o inmuebles, que se encuentren hábilmente instalados en las zonas de uso público.

El concesionario deberá asimismo, devolver las obras o instalaciones públicas que le fueren entregadas para la explotación del servicio en adecuado estado de conservación.

ARTICULO 17.—El Contrato de Concesión deberá prever que el Concesionario pueda gravar la concesión en favor de una o más entidades que aporten financiamiento para su explotación o a un tercero designado por éstas.

En caso de ejecución del gravamen y con el objeto de asegurar la continuidad del servicio, el financista contratará al nuevo concesionario que habrá de reunir los mismos requisitos de precalificación establecidas al efecto en el pliego de condiciones, cuyo cumplimiento será verificado por la autoridad competente.

El gravamen de la concesión deberá ser total y comprenderá los derechos y obligaciones del contrato, asimismo, el Contrato de Concesión podrá autorizar al concesionario a ceder total o parcialmente los derechos económicos que le correspondan en virtud del contrato a una o más entidades que provean financiamiento para la explotación de la concesión o a un tercero designado por éstas.

ARTICULO 18.—Las concesiones pueden suspenderse temporalmente en caso de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la prestación del servicio.

El contrato de concesión dispondrá el régimen aplicable a estos casos.

ARTICULO 19.—La concesión se extingue normalmente por el vencimiento del plazo.

Se extinguirá también en los demás casos y por las causas que disponga el contrato.

La declaración de incumplimiento grave, cuando dé lugar a la extinción de la concesión, deberá fundamentarse en cualquiera de las causales previstas en el contrato.

El Contrato sin embargo, deberá contemplar como causas de extinción las siguientes:

- 1) La suspensión definitiva de la obra o la prestación o explotación del servicio público a que estén destinadas o bien a la suspensión temporal de las mismas por el plazo acordado en ambos casos por el concedente;
- 2) La declaración de quiebra o suspensión de pagos del concesionario;
- 3) El mutuo acuerdo de las partes; y,
- 4) La muerte del concesionario individual, si no pudieren concluir la concesión sus sucesores.

ARTICULO 20.—Previo a la extinción de la concesión, la administración concedente, deberá prever lo conducente para asegurar la necesaria continuidad del servicio.

ARTICULO 21.—No podrán ser titulares de concesión, licencias, contratos de administración o gestión, quienes se hallen comprendidos en alguna de las circunstancias siguientes:

- 1) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de estafa, defraudación, delitos contra la fe pública, delitos contra

la propiedad, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal;

- 2) Ser deudor moroso de la Hacienda Pública;
- 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
- 4) Haber incumplido contratos anteriores, celebrados con cualquier dependencia u organismos de la administración;
- 5) Ser cónyuge o pariente dentro del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios y empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
- 6) Las empresas de construcción de obras, de prestación de servicios de consultoría o de suministro de bienes, que cuenten en su composición social con socios que presten sus servicios a la administración; y,
- 7) Los condenados por el delito de insolvencia punible.

CAPITULO III

OTRAS MODALIDADES DE GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS

ARTICULO 22.—Lo dispuesto en esta Ley respecto a las concesiones será aplicable a las licencias, en cuanto corresponda, según la naturaleza de estos títulos habilitantes y del servicio de que se trate, con las modalidades que le son propias. El reglamento desarrollará esta disposición.

ARTICULO 23.—Para el caso previsto en el numeral 2) del Artículo 4, exceptuando los casos regulados por leyes especiales, los entes estatales prestadores de servicios públicos de contenido económico, podrán constituir sociedades mercantiles para ese objeto, transfiriendo a las mismas la correspondiente concesión o licencia y los activos destinados a la prestación o el derecho al uso de los mismos, previa su valorización técnica y económica, debiendo someterse el contrato a la aprobación del Soberano Congreso Nacional.

Para los fines del avalúo podrán contratarse entidades o personas privadas especializadas previamente calificada, quienes en ningún caso podrán participar como oferentes directa o indirectamente, en los procedimientos de adjudicación de las concesiones o venta de las acciones.

Quedando autorizado el Poder Ejecutivo o las Municipalidades, para que procedan a la venta mediante subasta pública del total o parte de las acciones suscritas. Los adquirentes previo el otorgamiento de la concesión para actuar, directa o indirectamente, como operadores e invertir en la expansión y mejoramiento de los servicios de conformidad con los términos del pliego de condiciones que rija la venta, deberán acreditar capacidad técnica y financiera.

Pasa a la página No. 21

- 4) Los derechos del concesionario, incluyendo los que correspondan frente a los usuarios;
- 5) En los aspectos que determine el pliego, el régimen tarifario, especificando el mecanismo o las fórmulas para su determinación o para su ajuste, cuando proceda y los conceptos que la tarifa debe cubrir, incluyendo la rentabilidad de la inversión realizada;
- 6) Las regulaciones ambientales que en su caso, se estimen necesarias;
- 7) Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento;
- 8) Los supuestos en que el concedente puede rescatar el servicio o terminar anticipadamente la concesión, el mecanismo para determinar la indemnización al concesionario para el caso de rescate del servicio o de determinación anticipada de la concesión, indemnización que como mínimo habrá de cubrir el valor de la parte no amortizada de los bienes que reviertan;
- 9) El mecanismo para determinar la indemnización a una parte, para el caso de incumplimiento de las obligaciones de la otra parte;
- 10) La información técnica y económico-financiera que se debe poner a disposición de la autoridad reguladora del servicio y a los procedimientos de auditoría que deberán sujetarse;
- 11) Las partes podrán pactar que los conflictos sean dirimidos por árbitros o arbitradores, y,
- 12) Las demás que resulten de la naturaleza del servicio.

ARTICULO 10.—Las decisiones a que se refiere el Artículo 5 de la presente Ley implican la declaración de utilidad pública directamente de los bienes de dominio privado que fueren necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de las obras requeridas para la prestación de los servicios objeto de concesión y en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 106 de la Constitución de la República.

El Poder Ejecutivo individualizará oportunamente los bienes sujetos a la declaración de utilidad pública.

Si los bienes fueren de propiedad privada y no hubiere acuerdo en su precio, éste se determinará conforme lo establece el Código de Procedimientos en Materia Civil.

ARTICULO 11.—El otorgamiento de una concesión comprende la imposición a favor del concesionario de las servidumbres legales, sobre el predio de propiedad pública o privada que fuere necesaria para la adecuada prestación del servicio comprendida por la concesión, procurando evitar daños innecesarios a los predios sirvientes.

A petición del concesionario, el concedente individualizará los predios afectados por servidumbre legales y determinará el alcance de las mismas. Una vez fijado pericialmente o decidido judicialmente el monto de indemnización, salvo que el contrato de concesión prevea lo contrario, el pago de las indemnizaciones que resultaren por predio privado corresponderá al concesionario.

ARTICULO 12.—Cuando fuere necesario disponer del uso del subsuelo y de los bienes nacionales o municipales de uso público, por parte del concesionario para la construcción de obras o instalaciones destinadas a la prestación del servicio, el contrato de concesión puede disponer las condiciones de uso por el concesionario.

ARTICULO 13.—El Estado y las Municipalidades no comprometerán fondos públicos para financiar a los concesionarios ni otorgarán avales con ese fin.

No obstante, el contrato podrá prever, aportes de fondos del Estado o Municipales por razones de interés público y en beneficio del Estado, de las Municipalidades o del usuario.

ARTICULO 14.—Las Corporaciones Municipales, por votación no menor de las dos terceras partes de sus miembros, pueden otorgar, concesión, para la construcción de obras o para prestar servicios públicos, cuando no puedan suministrarlos directa y eficientemente.

El acuerdo municipal que autorice el trámite de una concesión, se enviará a la Contraloría General de la República, ésta podrá objetarla por razones de ilegalidad.

En todo caso se tomará en consideración el impacto ambiental del proyecto y para ese efecto deberá obtenerse el criterio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.

ARTICULO 15.—El Concesionario tendrá derecho a suspender el servicio a los usuarios que incurrieren en mora en el pago de las tarifas, de conformidad con las disposiciones del contrato de concesión y el marco regulatorio aplicable.

El Estado de cuenta correspondiente constituirá título ejecutivo para los efectos de su cobro judicial. Sin embargo, el usuario podrá acudir ante la Superintendencia de Concesiones y Licencias quien actuará como mediador, y en el caso, de no haber acuerdo, tendrá la vía expedita a la justicia ordinaria.

ARTICULO 16.—En ningún caso se podrá enajenar, embargar, o someter a cualesquiera otro gravamen, los bienes que sean utilizados para la prestación o gestión del servicio público de que trate la concesión.

No obstante, los acreedores podrán exigir al concesionario el cumplimiento de sus derechos por el proceso judicial, mediante la designación de un interventor con cargo a caja.

Producida la extinción de la concesión, el derecho a la prestación o gestión del servicio y la propiedad de los bienes destinados directamente a dicha prestación o gestión, pasarán al concedente, bajo las condiciones que determine el contrato de concesión y con sujeción a lo previsto en el Artículo 9, numeral 8) de la presente Ley. Así como también, todos las construcciones o inmuebles, que se encuentren hábilmente instalados en las zonas de uso público.

El concesionario deberá asimismo, devolver las obras o instalaciones públicas que le fueren entregadas para la explotación del servicio en adecuado estado de conservación.

Viene de la página No. 4

Podrán asimismo, adquirir acciones las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en los porcentajes que dispongan las bases de licitación.

ARTICULO 24.—El Poder Ejecutivo y las Municipalidades también podrán contratar con los empresarios privados, la administración y operación total o parcial de servicios públicos determinados, a cambio de una remuneración, incluyendo el mantenimiento de obras públicas o instalaciones. De acuerdo con esta modalidad, la responsabilidad del Contratista se limitará al ámbito técnico profesional o de mantenimiento y demás obligaciones contractuales, sin embargo, los riesgos para efectos de desastres naturales deberán ser cubiertos mediante pólizas de seguro por cuenta del concesionario.

La remuneración del gestor puede incluir el incentivo de sumas adicionales a una cantidad que sirva de base, de acuerdo con el nivel de eficiencia alcanzado o con los excedentes generados por la gestión.

En lo no previsto por este Artículo, los contratos de gestión se registrarán, en cuanto corresponda, según la naturaleza del servicio de que se trate y con las modalidades que les son propias, por la presente Ley. El Reglamento desarrollará esta disposición.

CAPITULO IV

DE LA SUPERINTENDENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERACION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS CONCESIONES

ARTICULO 25.—Créase la Superintendencia de Concesiones y Licencias como una entidad adscrita a la Contraloría General de la República, respecto de la cual funcionará con independencia técnica, administrativa y financiera. Tendrá por objeto la regulación, control y supervisión de la prestación y gestión indirecta de los servicios públicos, formación profesional e infraestructura y contará con las unidades y dependencias que determine el Reglamento respectivo.

ARTICULO 26.—La Superintendencia de Concesiones y Licencias tendrá las atribuciones siguientes:

- 1) Velar por el cumplimiento de esta Ley, su reglamentación, su marco regulatorio aplicable y demás disposiciones complementarias, controlando la prestación y gestión indirecta de los servicios públicos, formación profesional e infraestructura y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos o licencias;
- 2) Supervisar la aplicación de las normas, a las cuales deberán ajustarse los gestores y prestadores indirectos, en materia de seguridad y procedimientos técnicos, de medición y facturación, del control y uso sobre interrupción y restablecimiento de los servicios, así como de la calidad de los mismos, tanto en la prestación de servicios públicos como en formación profesional e infraestructura;
- 3) Prevenir, en cuanto corresponda, conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes.

- 4) Controlar que las tarifas sean aplicadas de conformidad con los correspondientes contratos o licencias;
- 5) Publicar los principios generales que deberán aplicar los gestores indirectos, para asegurar el libre acceso a sus servicios;
- 6) Gestionar que se promuevan ante la autoridad correspondiente, acciones civiles o penales, incluyendo medidas precautorias, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta Ley, su reglamentación y los contratos o licencias;
- 7) Crear normas y procedimientos para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el principio del debido proceso;
- 8) Requerir de los prestadores de los servicios, los documentos e información necesaria para verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamentación y los respectivos contratos o licencias, realizando las inspecciones que al efecto resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de la información que pueda corresponder;
- 9) Publicar la información dar el asesoramiento que sea de utilidad para los gestores indirectos, siempre que ello no perjudique injustificadamente derechos de terceros;
- 10) Aplicar las sanciones previstas en los contratos o en las normas aplicables a los servicios en régimen de licencias, respetando en todos los casos los principios del debido proceso;
- 11) Asegurar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron adoptadas las mismas;
- 12) Someter anualmente al Congreso Nacional, por intermedio de la Contraloría General de la República, un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público;
- 13) Supervisar las tarifas de los servicios públicos concesionados;
- 14) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta Ley, su reglamentación y el marco regulatorio aplicable.

ARTICULO 27.—Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 25, las obligaciones derivadas de la relación contractual entre el concesionario y los usuarios del servicio, estará sujeta en primera instancia a la superintendencia de concesiones y en su defecto por los juzgados o tribunales de justicia.

ARTICULO 28.—La Superintendencia de Concesiones y Licencias será dirigida y administrada por un Superintendente, cuyo nombramiento corresponderá al Poder Legislativo, quien durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelecto por un período más.

Para ser Superintendente se requiere:

- 1) Ser hondureño por nacimiento;
- 2) Profesional universitario con diez (10) años de experiencia;
- 3) Estar en el libre ejercicio de los derechos civiles; y,
- 4) Ser de reconocida honorabilidad.

Mientras dure en su cargo el Superintendente, no podrá ejercer ninguna función remunerada, excepto en actividades relacionadas con la docencia dedicadas exclusivamente a su función, alcanzándole las incompatibilidades fijadas por la Ley para los funcionarios públicos.

ARTICULO 29.—El Presupuesto de la Superintendencia de Concesiones y Licencias, será formulado por ésta y presentada a la consideración de la Contraloría General de la República, la que lo consignará para el año fiscal correspondiente y lo remitirá para su aprobación al Congreso Nacional.

En tanto se otorgan las primeras concesiones y licencias conforme a la presente Ley, la Contraloría General de la República, deberá proveer los recursos necesarios para el funcionamiento de la Superintendencia.

CAPITULO V

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 30.—Se excluyen de este mecanismo de regulación las Municipalidades y aquellas instituciones descentralizadas y desconcentradas que tengan su propio marco regulatorio.

ARTICULO 31.—El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), emitirá el Reglamento de la presente Ley; y corresponderá a la Contraloría General de la República en su caso, emitir el Reglamento de la Superintendencia de Concesiones y Licencias en el término de noventa (90) días a partir de la publicación de la presente Ley.

ARTICULO 32.—La presente Ley no perjudica los derechos adquiridos al amparo de leyes anteriores.

ARTICULO 33.—En todo lo previsto en la presente Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones establecidas en las leyes administrativas vigentes.

ARTICULO 34.—Esta Ley deroga la Ley de Concesiones, Decreto No. 88 del 11 de marzo de 1948; Ley de Concesionamiento para la Explotación de los Servicios Aeroportuarios, Decreto No. 202-95 del 21 de diciembre de 1995; y las disposiciones de las leyes generales o especiales que se le opongan o que sean incompatibles con su contenido.

Para los efectos de esta Ley no son aplicables las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado.

ARTICULO 35.—La presente Ley entrará en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

RAFAEL PINEDA PONCE
Presidente

JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA
Secretario

JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS
Secretario

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de noviembre de 1998.

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE
Presidente Constitucional de la República

El Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda,

TOMAS RAYMUNDO LOZANO REYES

DECRETO No. 203-98

EL CONGRESO NACIONAL,

DECRETA:

ARTICULO 1.—Aprobar en todas y cada una de sus partes el "MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA CREACION DEL CONSEJO CONJUNTO DE COMERCIO, INVERSION Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE", suscrito en Santiago, Chile el 12 de marzo de 1993, que literalmente dice:

"SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE. El Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de la República de Chile, en lo sucesivo denominados las Partes:

CONSIDERANDO: 1. La decisión de estrechar los lazos de amistad y de promover la prosperidad de sus pueblos; 2. El interés de ampliar las relaciones de cooperación económica, sobre la base de la ampliación del comercio bilateral de bienes y servicios, así como a través de programas conjuntos de inversión y cooperación técnica; 3. La conveniencia recíproca de optimizar el uso de sus recursos económicos a fin de insertar adecuadamente sus economías en el entorno mundial; 4. La participación de Chile en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la participación de Honduras en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA); 5. La conveniencia de promover una participación más dinámica de sus sectores privados en los esfuerzos orientados a dinamizar las

LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Antecedentes

Esta Ley contenida en el Decreto Legislativo 301-75 del 30 de Diciembre 1975, sus reformas de las cuales mencionamos las contenidas en los siguientes: a) Decreto 83-92 del 19 de mayo 1992, b) Decreto 299-93 del 20 de Diciembre 1993 y c) Decreto No. 263-2000 del 22 de Diciembre 2,000, *tiene como propósito establecer las condiciones necesarias para el ejercicio honesto de la función pública, así como salvaguardar el patrimonio estatal, sancionando a los servidores del Estado que se valgan de sus cargos o empleos para enriquecerse ilícitamente.*

Su conocimiento por parte de los funcionarios y empleados es importante para conocer el marco de regulaciones que tienen que cumplirse con sentido personal para evitar la aplicación de sanciones.

Dentro de este conjunto de disposiciones destacan las referentes a los mecanismos de declaración de bienes que todo servidor público está obligado a presentar al asumir o abandonar cargos; también, las prohibiciones que se aplican en el desempeño de los cargos y en general los procedimientos que deben cumplirse para evidenciar un desempeño honesto en el trabajo.

Contenido

<i>CAPITULO I.</i>	<i>OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY. DECLARACIÓN DE BIENES.</i>
<i>CAPITULO II.</i>	<i>DEL ENRIQUECIMIENTO ILICITO</i>
<i>CAPITULO III</i>	<i>ORGANISMOS DE APLICACION</i>
<i>CAPITULO IV</i>	<i>PROCEDIMIENTO</i>
<i>CAPITULO V.</i>	<i>PROHIBICIONES</i>
<i>CAPITULO VI.</i>	<i>DELITOS Y SANCIONES</i>
<i>CAPITULO VIII.</i>	<i>DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS</i>

Decreto Número 301

**Fecha de emisión del Decreto
30 de Diciembre de 1975**

**EL JEFE DE ESTADO
EN CONSEJO DE MINISTROS**

DECRETA:

La siguiente:

**LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO
ILICITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS**

1

CAPITULO I

OBJETO Y APLICACION DE LA LEY. DECLARACIONES DE BIENES.

ARTICULO 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para el ejercicio honesto de la función pública, así como salvaguardar el patrimonio estatal, sancionando a los servidores del Estado que se valgan de sus cargos o empleos para enriquecerse ilícitamente.

ARTICULO 2.- Estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley los funcionarios y empleados que presten servicios remunerados en cualquiera de los poderes del Estado, sus Organismos, Dependencias, Establecimientos e Instituciones centralizadas, autónomas, semiautónomas o de cualquier otro tipo.

Comprende además, a toda persona natural o jurídica que perciba sueldos, o maneje bienes y fondos del Estado, o decida sobre pagos o inversión de fondos públicos.

ARTICULO 3.- Excepto en casos de emergencia calificados por la Contraloría General de la República, ninguna de las personas a que se refiere el artículo 2 que antecede podrá tomar posesión de su cargo sin antes haber presentado ante la Dirección General de Probidad Administrativa, dependiente de la Contraloría General de la República, una declaración jurada y detallada de todos los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, acciones o créditos que formen su patrimonio, así

3

como una relación de su pasivo y, separadamente los de su cónyuge, compañero o compañera de hogar, hijos bajo patria potestad y pupilos, así como los bienes ajenos que administre, con indicación, en su caso, del pasivo que los afecte.*

ARTICULO 4.- La Declaración a que se refiere el artículo anterior:

1. Cuando se trate de inmuebles o muebles sujetos a inscripción, indicará el número y tomo del registro que les ampare.
2. Cuando se trate de otra clase de bienes u obligaciones, indicará con claridad y precisión todos los datos que permitan identificar sin dudas el bien, acción, crédito u obligación.
3. Proporcionará además todos los datos e informes que indique el Reglamento de esta Ley.

La Declaración deberá acompañarse de los documentos que la justifiquen.

ARTICULO 5.- Todo servidor público que por cualquier motivo cesare en el desempeño de su cargo, estará obligado a presentar en los términos que señala el artículo 21 de la presente Ley, según el caso, nueva declaración de bienes actualizada con todos los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4 que anteceden.

* De conformidad con la disposición Constitucional en el artículo 232, la Dirección de Probidad Administrativa, es un organismo de control, auxiliar al Poder Legislativo, con independencia funcional y administrativa, en tal consideración, este organismo no depende de la Contraloría General de la República.

La obligación a que se refiere el párrafo anterior, quedará a cargo de los herederos cuando el servidor público cese en el desempeño de su cargo por razón de muerte.

ARTICULO 6.- Están exentos de presentar Declaración.

- a) Los Servidores Públicos que devenguen un sueldo o salario menor de dos mil Lempiras (L.2,000.00), y que no manejen fondos o bienes del Estado.
- b) Los que ejercieren funciones provisionales por un período máximo de (90) días, y;
- c) Los Maestros, Profesores y Catedráticos de cualquier nivel educativo, siempre y cuando su función sea exclusivamente docente. **

CAPITULO II

DEL ENRIQUECIMIENTO ILICITO

ARTICULO 7. Incurrirán en enriquecimiento ilícito las personas a que se refiere el Artículo 2 de esta Ley cuando:

- a) En cualquier forma indebida o ilegal se apropien de fondos públicos.

** Redactado conforme al Decreto No. 299-93 del 16 de diciembre de 1993

- b) Reciban de terceros emolumento, bonificación, retribución o pago, cualquiera que sea la denominación que se emplee, que no pueda justificarse legalmente.
- c) Para obtener ventajas económicas, adopten decisiones que afecten los intereses del Estado o violen alguna norma legal.
- d) En cualquier otra forma incurran en falta de probidad de conformidad con esta Ley, en el desempeño de sus cargos o en el cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 8.- Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa.

Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del Servidor Público, con los de su cónyuge, compañero o compañera de hogar, hijos sujetos a patria potestad y pupilos se considerarán en conjunto.

Para justificar la presunción de enriquecimiento ilícito del Servidor Público, se tomará en cuenta:

- a) Sus condiciones económicas personales previas al ejercicio del cargo o empleo.
- b) La cuantía en que ha aumentado su capital en relación al monto de sus ingresos y de sus gastos ordinarios; y

6

- c) La ejecución de otros actos o la existencia de otras circunstancias que permitan presumir que la persona ha incurrido en alguno de los casos de enriquecimiento ilícito a que se refiere el Artículo 7 de esta Ley.

ARTICULO 9.- La carga de la prueba sobre las circunstancias indicadas en los artículos anteriores, la relativa al importe de ingresos y de gastos ordinarios y la que tienda a comprobar la licitud del aumento de capital, pesa sobre el servidor público.

ARTICULO 10.- Los bienes que formen el enriquecimiento ilícito comprobado judicialmente, pasarán a ser propiedad del Estado mediante adjudicación que hará el Juez en la sentencia definitiva.

El Estado se considerará acreedor con preferencia sobre cualquier otro, con respecto a los bienes del servidor público o lo que formen su sucesión para los efectos de recuperar el producto del enriquecimiento ilícito.

CAPITULO III

ORGANISMO DE APLICACION

ARTICULO 11-12 Y 13.- Fueron derogados por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 299-93 de fecha 16 de Diciembre de 1993.

*** Conforme a esta disposición y otras subsiguientes de esta Ley, el organismo encargado de hacer cumplir la misma, es la Dirección General de Probidad Administrativa; no obstante y según lo dispuesto en el artículo 232 Constitucional, su nombre es Dirección de Probidad Administrativa, y no Dirección General; en tal situación el nombre correcto es el señalado por la Constitución de la República.

7

ARTICULO 14.- No podrán ser Director ni Sub-Director General de la Dirección General de Probidad Administrativa:

- a) Los parientes del Presidente de la República, de los Secretarios de Estado, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Contralor y Procurador General de la República, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- b) Los que no hubieren obtenido el finiquito de solvencia a que se refiere esta Ley.
- c) Los contratistas de Obras Públicas que se costeen con fondos del Estado, o de las Instituciones Autónomas y Semiautónomas, sus fiadores y los que de resultas de tales obras o servicios tengan reclamaciones pendientes; así como los representantes o apoderados de concesionarios del Estado o de empresas que exploten servicios públicos; y
- d) Los deudores de la Hacienda Pública, Distrital o Municipal.

ARTICULO 15.- El Director y Sub-Director de la Dirección General de Probidad Administrativa no podrán ser separados de sus funciones antes de que se cumpla el período para el que fueron nombrados, salvo que recaigan sobre ellos auto de prisión o declaratoria de reo.

ARTICULO 16.- La Dirección General de Probidad Administrativa, contará con el personal calificado necesario y podrá requerir la colaboración de cualquier dependencia u organismo del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Los servidores públicos de esta Institución gozarán del derecho de estabilidad en sus cargos, y solamente podrán ser removidos de conformidad a las causas previstas en los reglamentos que al efecto dicte la Institución. Si fuere removido sin causa justificada un servidor de la Institución, tendrá derecho a que se le reintegre a su

puesto o a percibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de quince (15) años, en este caso se agregará la indemnización por concepto de preaviso correspondiente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos (2) años, vacaciones causadas y las proporcionales en su caso, décimo-tercer y décimo-cuarto mes proporcional en su caso. Para los efectos del cálculo de los derechos a que se hace referencia el presente Decreto, se contará a partir de la fecha de su contratación.*

ARTICULO 17.- Son atribuciones de la Dirección General de Probidad Administrativa:

- a) Cumplir y hacer cumplir esta Ley y su Reglamento.
- b) Emitir el Reglamento de la Ley y los necesarios para la aplicación de la misma, y darle la publicidad en el Diario Oficial La Gaceta.**
- c) Informar anualmente al Congreso Nacional de las actividades que realice.**
- d) Examinar las declaraciones y seguir investigaciones en cualquier tiempo sobre la actuación de los funcionarios y empleados públicos en aquellos casos que hubiere mérito para ello.
- e) Exigir la presentación de declaraciones adicionales de bienes, cuando lo considere conveniente; y,
- f) Ejercer todas las demás atribuciones que le compete conforme a esta Ley y sus Reglamentos.

ARTICULO 18.- Los funcionarios y empleados de la Dirección de Probidad Administrativa, gozarán de las mismas prerrogativas y tendrán las mismas obligaciones que los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República. Sus sueldos serán cancelados por la Pagaduría Especial de dicho Organismo Fiscalizador.***

* Redactado conforme a Decreto Nº 263-2000 del 22 de diciembre del 2000

** Redactado conforme a Decreto Nº 239-93 del 16 de diciembre de 1993

*** Véase artículo 232 de la Constitución de la República.

CAPITULO IV PROCEDIMIENTO

ARTICULO 19.- La Dirección General de Probidad Administrativa identificará con un número de registro la declaración que presenten los obligados y les extenderá la constancia respectiva, la cual deberán presentar a sus superiores jerárquicos para que les den posesión de sus cargos de acuerdo con el Artículo 3 de esta Ley.

ARTICULO 20.- La Dirección General de Probidad Administrativa verificará las declaraciones presentadas; a este efecto los organismos y dependencias gubernamentales, las empresas mercantiles, los establecimientos bancarios y aseguradoras, están obligadas a permitir la inspección de sus archivos, registros y demás documentación contable y de otra naturaleza, que a juicio de la Dirección General de Probidad Administrativa, conduzca a la comprobación de la información declarada o al descubrimiento de simulaciones u omisiones dolosas en dichas declaraciones.

Asimismo extenderán las certificaciones o constancias que les fueren solicitadas por la Dirección General de Probidad Administrativa, sin excusa alguna. No podrán invocarse el amparo de otras leyes para negarse a permitir la inspección o para el suministro de información escrita. *

* Redactado conforme a Decreto No. 83-92 del 29 de mayo de 1992

ARTICULO 21.- Si de la verificación resultare que el declarante ha faltado a la verdad por ocultar, suponer disminuir u omitir bienes de cualquier clase, la Dirección de Probidad Administrativa emitirá un Informe Provisional, el cual podrá ser impugnado por el interesado dentro del término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva.

La Dirección de Probidad Administrativa podrá ordenar al Organismo Empleador, si el caso así lo requiere, la suspensión o traslado del intervenido a otra unidad, hasta tanto se emite el Informe definitivo. **

ARTICULO 22.- Transcurrido el término indicado en el artículo anterior, la Dirección General de Probidad Administrativa, emitirá el Informe Final dentro de un plazo de 90 días confirmando o desvaneciendo las irregularidades encontradas.

ARTICULO 23.- Vencido que fuera el término establecido en Artículo 22, de esta Ley, la Dirección General de Probidad Administrativa emitirá el Informe Final con carácter de Resolución Definitiva, contra la que no cabrá recurso de apelación.

Cuando la Dirección de Probidad Administrativa se entere de la comisión de delitos contra la propiedad del Estado o conexos con éste, por parte de empleados o funcionarios públicos procederá a su denuncia por medio de la Procuraduría General de la República,

** Redactado conforme a Decreto No. 299-93 del 16 de diciembre de 1993

ante los juzgados competentes, sin perjuicio de la acción penal que corresponde al Ministerio Público y de las acciones de verificación de las declaraciones juradas de bienes que realice la Dirección General de Probidad Administrativa. **

ARTICULO 24.- Firme que sea el Informe Final de la Dirección General de Probidad Administrativa y resultando culpable el intervenido, se hará del conocimiento del Organismo Estatal o de la autoridad nominadora correspondiente, para que como primera acción, proceda a la destitución del servidor público, objeto del informe.

La Dirección General de Probidad Administrativa dará traslado del expediente a la Procuraduría General de la República para que inicie las acciones legales procedentes.

En caso de que la persona investigada resultare exenta de responsabilidad, se le extenderá de inmediato al correspondiente finiquito. ****

ARTICULO 25.- Las diligencias que practique la Dirección General de Probidad Administrativa serán secretas hasta que se emita el Informe provisional. Si una vez iniciada la investigación hubiere indicio racional de enriquecimiento ilícito, la Dirección solicitará a las autoridades competentes que impidan la salida del país de las personas objeto de dicha investigación, salvo caso de urgencia debidamente comprobado y previo otorgamiento de caución, la cual será señalada, calificada y aprobada por la

** Redactado conforme a Decreto No. 299-93 del 16 de diciembre de 1993

**** Redactado conforme a Decreto No. 83-92 del 29 de mayo de 1992

Contraloría General de la República, tomando en cuenta el monto del valor investigado.*

ARTICULO 26.- Las averiguaciones practicadas por la Dirección General de Probidad Administrativa no impiden ni menoscaban las facultades que tienen los tribunales competentes para la investigación de los mismos hechos y en ningún caso podrán oponerse como cuestión de litis pendencia.

CAPITULO V PROHIBICIONES

ARTICULO 27.- Se prohíbe a los servidores públicos comprendidos en esta Ley, ser contratistas o concesionarios del Estado. Asimismo se les prohíbe intervenir en la celebración de contratos en los siguientes casos:

- a) Cuando el servidor público tuviere intereses directos o indirectos con el contratista o concesionarios como socio, partícipe o interesado de cualquier otra manera.

* De conformidad con la disposición Constitucional contenida en el artículo 232, la Dirección de Probidad Administrativa, es un organismo de control, auxiliar del Poder Legislativo, con independencia funcional y administrativa; en tal consideración, este organismo no depende de la Contraloría General de la República.

- b) Cuando el contratista o concesionario tuviere con el servidor público parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

La infracción de esta disposición dará lugar a la nulidad de todo lo actuado sin perjuicio de la responsabilidad civil y criminal en que incurrieren los infractores.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la Dirección General de Probidad Administrativa, por intermedio de la Contraloría General de la República, instará al Procurador General de la República por el ejercicio de la acción correspondiente. *

ARTICULO 28.- Los funcionarios y empleados de la Dirección General de Probidad Administrativa deberán guardar absoluta reserva sobre el contenido de las declaraciones, documentos e investigaciones que practiquen los que no podrán servir para otros fines que los previstos en esta Ley.

La violación de esta disposición, una vez comprobada, dará lugar a la destitución inmediata del funcionario o empleado público culpable, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

* De conformidad con la disposición Constitucional contenida en el artículo 232, la Dirección de Probidad Administrativa, es un organismo de control, auxiliar del Poder Legislativo, con independencia funcional y administrativa; en tal consideración, este organismo no depende de la Contraloría General de la República.

CAPITULO VI DELITOS Y SANCIONES

ARTICULO 29.- El Servidor Público que tomare posesión del cargo, sin presentar la declaración de bienes que prescribe el Artículo 3 de esta Ley, será destituido bastando para ello una comunicación de la Dirección de Probidad Administrativa para el Organismo o Dependencia Estatal que haya permitido esta infracción.

ARTICULO 30.- Quien dé posesión del cargo al servidor público que no haya cumplido con los requisitos que señalan los artículos 3 y 4 de la presente Ley, será sancionada con una multa que impondrá la Dirección General de Probidad Administrativa, equivalente al 20% del sueldo mensual que devengue el nombrado, por cada mes en que haya ejercido el cargo sin presentar la Declaración.

Dicha multa se deducirá del sueldo o cualquier tipo de emolumento que perciba el funcionario o empleado culpable, bastando para ello un simple oficio de parte del Organismo sancionador a la Oficina Pagadora.

ARTICULO 31.- La falta de declaración jurada y actualizada que está obligado a presentar todo servidor público que cesare en su cargo o empleo, dará lugar a la iniciación del procedimiento judicial para establecer si ha incurrido en responsabilidad por el delito de enriquecimiento ilícito.

ARTICULO 32.- El delito de enriquecimiento ilícito será castigado, según el monto del enriquecimiento, así:

- a) Si dicho enriquecimiento no excediere en CINCO MIL LEMPIRAS, con presidio menor en su grado máximo.
- b) Si dicho enriquecimiento excediere de CINCO MIL LEMPIRAS no pasare de DIEZ MIL LEMPIRAS, con presidio mayor en su grado mínimo.
- c) Si excediere de DIEZ MIL LEMPIRAS y no pasare de CIEN MIL LEMPIRAS, con presidio mayor en su grado medio; y
- d) Si excediere de CIEN MIL LEMPIRAS, con presidio mayor en su grado máximo.

Constituirá circunstancias agravantes el proporcionar datos falsos en las declaraciones ordenadas por esta Ley.

ARTICULO 33.- Las personas a quienes corresponde prestar la colaboración a que se refiere los artículo 20 y 40, de esta Ley, que debidamente requeridas se negaren hacerlo, o que incumplieren las resoluciones emanadas de la Dirección General de Probidad Administrativa, incurrirán en el delito de desobediencia a la autoridad, el cual sancionará con la pena establecida en el código penal para dicho delito.**

ARTICULO 34.- La propuesta o el ofrecimiento para realizar hechos que puedan constituir delitos de enriquecimiento ilícito, se sancionarán con la pena inmediata inferior en grado a la que corresponda a aquel delito, sea que tal propuesta u ofrecimiento provenga de funcionarios o empleados públicos o de terceros.

** Redactado conforme a Decreto No. 299-93 del 16 de diciembre de 1993

ARTICULO 35.- El juez determinará en la sentencia la pena que en su concepto corresponda, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, sus antecedentes personales y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho. El Juez consignará expresamente cuales de los motivos contenidos en el párrafo que antecede ha considerado determinantes para regular la extensión de la pena.

ARTICULO 36.- Ningún servidor público podrá pasar a desempeñar otro cargo o empleo si no ha obtenido el finiquito de Probidad Administrativa por las actuaciones anteriores, a menos que se trate de un traslado o ascenso.

ARTICULO 37.- Se reputan coautores del delito de enriquecimiento ilícito a quienes hayan entregado las cantidades o procurado las ventajas a que se refiere los literales b) y c) del Artículo 7 de esta Ley.

ARTICULO 38.- Las penas consignadas en este Capítulo se aplicarán en la misma extensión a los coautores a que se refiere el Artículo anterior.

CAPITULO VII DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 39.- Los Organismos y dependencias del Estado, Distrito Central y Municipalidades, Instituciones Autónomas y Semiautónomas.

comunicarán a la Dirección General de Probidad Administrativa, los nombres de las personas, que por aumento de sueldo, pasen a ser comprendidas por esta Ley.

ARTICULO 40.- Sin perjuicio de lo que establece la Ley de Contratación del Estado en su artículo 43, la Dirección General de Probidad Administrativa, formará parte como miembro titular ex-oficio de toda comisión que se integre para la precalificación, calificación y evaluación de las licitaciones públicas y privadas, compras, subastas y concursos, a fin de analizar las ofertas, comprobar las informaciones proporcionadas por los licitantes y cualquier otra que sea de su mérito, requisito sin el cual no podrá declararse concluida, adjudicada o fracasada la licitación, compra, subasta y concurso, según el caso.

La Dirección General de Probidad Administrativa podrá declarar bajo proceso de investigación, cualquier licitación pública o privada, compras, subastas y concursos, debiendo las instituciones gubernamentales, las entidades autónomas, semi-autónomas y corporaciones municipales, suspender los trámites de las mismas, por mientras dicha Dirección en base a los resultados de la investigación y dentro del plazo que reste para la adjudicación, emita la resolución que corresponda.****

ARTICULO 41.- Los Servidores Públicos que se hallen en funciones al entrar en vigencia la presente Ley, tendrán 90 días de plazo para hacerla

declaración de bienes. Vencido este plazo, no devengarán remuneración alguna mientras no den cumplimiento a la obligación estipulada en este Artículo.

ARTICULO 42.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignará a la Dirección General de Probidad Administrativa los fondos necesarios para su organización.

ARTICULO 43.- Al entrar en vigencia la presente Ley, la Contraloría General de la República procederá a traspasar, bajo inventario, a la Dirección General de Probidad Administrativa, los archivos, expedientes y toda la documentación existente y que se relacione con la Ley de Probidad Administrativa.

ARTICULO 44.- El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación de esta Ley.

ARTICULO 45.- La presente Ley, cuyas disposiciones son el orden público, deberán publicarse en el Diario Oficial "La Gaceta"; y entrará en vigencia el 1 de Enero de 1976, quedando derogada desde esta fecha, la Ley de Probidad Administrativa emitida por Decreto Legislativo Número 144 del once de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro y cualquier otra disposición que se le oponga.

****Redactado conforme a Decreto 83-92 del 29 de mayo de 1992

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

El Jefe de Estado,
JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO

El Secretario de Estado en el Despacho de
Gobernación y Justicia
ALONSO FLORES GUERRA

El Secretario de Estado en el Despacho de
Relaciones Exteriores
VIRGILIO R. GALVEZ

El Secretario de Estado en el
Despacho de Defensa Nacional y Seguridad Pública

MARIO E. CHINCHILLA CARCAMO

20

EL Secretario de Estado en el
Despacho de Educación Pública
LIDIA WILLIAMS DE ARIAS

El Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Crédito Público
PORFIRIO ZAVALA SANDOVAL

El Secretario de Estado en el
Despacho de Economía, por Ley
J. VICENTE DIAZ

El Secretario de Estado en el Despacho
de Comunicaciones, Obras Públicas y
Transporte
HERMAN APARICIO VELASQUEZ

21

El Secretario de Estado en el Despacho
de Trabajo y Previsión Social
ENRIQUE FLORES VALERIANO

El Secretario de Estado en el Despacho
de Recursos Naturales
RAFAEL LEONARDO CALLEJAS

El Secretario de Estado en el Despacho
de Cultura, Turismo e Información
EFRAIN LISANDRO GONZALES M.

El Secretario Ejecutivo del Consejo
Superior de Planificación Económica
ARTURO CORLETO MOREIRA

El Director Ejecutivo del Instituto
Nacional Agrario, por Ley
VIRGILIO MADRID SOLIS

Impreso en:



Tel. 225-2489, Tel/Fax: 225-2491

LEYES PROCEDIMENTALES

- **Ley de Procedimiento Administrativo
(Enunciado del contenido)**
- **Ley de la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo
(Enunciado del contenido)**
- **Marco Teórico del Proyecto de Código Penal de Honduras**
- **Índice del Contenido del Proyecto de Código Penal de Honduras**

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Antecedentes

Esta Ley contenida en el Decreto Legislativo 152-87 del 2 de octubre de 1987, según dicho decreto entró en vigencia el uno de Enero 1988. *Tiene como propósito regular los actos de la administración pública cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares. Busca aclarar la naturaleza de estos actos administrativos, las circunstancias que les dan validez y otras condiciones que legitimen estos actos para que no perjudiquen o limiten los derechos de los particulares.*

Su conocimiento por parte de las autoridades municipales es importante para evacuar acciones de particulares en cuanto a la gestión administrativa como peticiones, reclamos, aclaraciones, etc. Su conocimiento y aplicación es de suma importancia para los secretarios municipales, jueces de policía y otros funcionarios municipales que dan trámite a peticiones, reclamos y aclaraciones de los ciudadanos.

También es importante para que los funcionarios en general determinen sus niveles de responsabilidad y las condiciones que validan o legitiman los actos de sus respectivas gestiones.

Contenido

TITULO I COMPETENCIA

- Capítulo I Principios Generales
- Capítulo II Cuestiones de la competencia
- Capítulo III Recusación y abstención

TITULO II LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

- Capítulo I Principios Generales
- Capítulo II Los actos de la administración

- Sección primera: Requisitos
- Sección segunda: Actos tácitos y presuntos
- Sección Tercera: Caracteres
- Sección cuarta: Eficacia
- Sección quinta: Invalidez
- Sección sexta: Disposiciones especiales

- Capítulo III Plazos
- Capítulo IV Registro

TITULO III PROCEDIMIENTO

Capítulo I Comparecencia. Parte interesada

Capítulo II Iniciación

Capítulo III Desarrollo

Capítulo IV Desistimiento

Capítulo V Caducidad

Capítulo VI Resolución

Capítulo VII Notificaciones

Capítulo VIII Ejecución de las resoluciones

Sección primera: Ejecución forzosa sobre el patrimonio mediante el procedimiento de apremio.

Sección Segunda: Ejecución subsidiaria

Sección tercera: Cumplimiento forzoso

Sección cuarta: Disposiciones comunes

Capítulo IX Disposiciones generales

TITULO IV REVISIÓN DEL ACTO EN VIA ADMINISTRATIVA

Capítulo I Revisión de oficio

TITULO CUARTO PROCEDIMIENTO

Capítulo primero	Procedimiento de primera o unica instancia
Sección primera	La demanda
Sección segunda	Representación de la demanda
Sección tercera	La contestación
Sección cuarta	Defensas previas
Sección quinta	Prueba
Sección sexta	Conclusiones
Sección séptima	La sentencia
Sección octava	Otros medios de terminación del proceso
Capítulo segundo	Recursos
Capítulo tercero	Ejecución de la sentencia
Capítulo cuarto	Procedimientos especiales
Sección primera	En materia tributaria o impositiva
Sección segunda	En materia personal
Sección tercera	En materia de licitación o concursos
Capítulo quinto	Disposiciones comunes
Sección primera	Suspensión del acto impugnado
Sección segunda	Incidentes e invalidez de los actos procesales
Sección tercera	Costas
Capítulo Quinto	Disposiciones finales

LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTESIOSO- ADMINISTRATIVO

Antecedentes

Esta Ley contenida en el Decreto Legislativo 189-87 del 20 de Noviembre de 1987, según dicho decreto entró en vigencia el uno de Julio 1988. Tiene como propósito regular los actos de la administración pública cuando por la vía administrativa y judicial se conozcan las peticiones que se deduzcan de los actos administrativos en aspectos como los siguientes:

- a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado.
- b) Las cuestiones que se susciten sobre responsabilidad patrimonial del estado y de entidades estatales.
- c) Otros que se señalen en la Ley.

Su importancia para el sector municipal radica en que su conocimiento permite que la resolución de los conflictos que esta Ley pretende solucionar se haga oportunamente evitando la pérdida de juicios por desconocimiento de los procedimientos señalados en la misma y en igual sentido de las acciones de demanda que las Municipalidades entablen en defensa de sus intereses ante otras instituciones.

Contenido

TITULO PRIMERO LA JURISDICCION DE LOS CONTESIOSO- ADMINISTRATIVO

Capítulo primero Principios generales
Capítulo segundo Los órganos

TITULO SEGUNDO LAS PARTES

Capítulo primero Capacidad procesal
Capítulo segundo Legitimación
Capítulo tercero Representación y defensa de las partes

TITULO TERCERO OBJETO DEL JUICIO

Capítulo primero Actos impugnables
Capítulo segundo Pretensiones de las partes
Capítulo tercero Acumulación
Capítulo cuarto La cuantía

TITULO CUARTO PROCEDIMIENTO

Capítulo primero	Procedimiento de primera o unica instancia
Sección primera	La demanda
Sección segunda	Representación de la demanda
Sección tercera	La contestación
Sección cuarta	Defensas previas
Sección quinta	Prueba
Sección sexta	Conclusiones
Sección séptima	La sentencia
Sección octava	Otros medios de terminación del proceso
Capítulo segundo	Recursos
Capítulo tercero	Ejecución de la sentencia
Capítulo cuarto	Procedimientos especiales
Sección primera	En materia tributaria o impositiva
Sección segunda	En materia personal
Sección tercera	En materia de licitación o concursos
Capítulo quinto	Disposiciones comunes
Sección primera	Suspensión del acto impugnado
Sección segunda	Incidentes e invalidez de los actos procesales
Sección tercera	Costas
Capítulo Quinto	Disposiciones finales



Índice

Código Penal (Borrador)

MARCO TEORICO DEL PROYECTO DE CODIGO PENAL DE HONDURAS

Honduras esta inmersa en un proceso integral de modernización de su sistema de justicia que ha incluido entre otros instrumentos la transformación del sistema de procesamiento con la expedición de un Código Procesal Penal que abandona el caduco modelo inquisitivo para dar paso a un sistema de tendencia acusatorio que garantiza un proceso más transparente, ágil, justo y efectivo.

Complemento necesario de esta reforma legal, lo constituye la expedición de un nuevo Código Penal que sirva de expresión de los avances democráticos del país dando desarrollo a los principios y valores que tanto la Constitución Política como los tratados internacionales consagran en materia penal.

Como función de la norma penal, este nuevo Código Penal expresará un nuevo sentido social y jurídico de la misma y dará desarrollo pleno a la función rehabilitadora y reeducadora de la pena.

Igualmente, la moderna teoría del delito será la que marque las condiciones mínimas para que una conducta pueda considerarse punible.

En este sentido, la redacción del Código Penal de Honduras responde a las siguientes concepciones e innovaciones de política criminal y de teoría del delito:

1. Derecho penal mínimo:

El nuevo Código Penal sólo consagrará aquellas infracciones que se consideran totalmente indispensables para mantener la seguridad de las personas, permitiendo con ello que sean normas de convivencia social las que establezcan mecanismos de regulación y solución de conflictos mínimos que en ningún momento ponen en peligro la convivencia pacífica.

Se excluye así la tan recurrida Hiper inflación punitiva como forma de control social, estipulando como delitos sólo las conductas graves que ponen en peligro la seguridad de las personas.

2. Derecho de seguridad de las personas:

La seguridad que encuentra su expresión en este proyecto de Código Penal no está referida sólo en el sentido de seguridad física, sino básicamente social. Por ello, se consagran como delitos una gama de conductas nuevas que afectan gravemente los derechos y valores fundamentales del ser humano como tal, los de la economía social, los de tradición o cultura, los derechos ecológicos; etc.

Así traemos figuras del Derecho Internacional Humanitario como los crímenes de guerra internacional o interna, la desaparición forzada, etc.

También se consagran como delitos las diversas formas de manipulación genética, los experimentos médicos no permitidos o consentidos.

Nuevas formas de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

La gama de delitos de peligro común se amplía consagrando todos aquellos hechos que puedan poner en peligro la seguridad física, social, económica de las personas.

Los delitos informáticos que afectan la confianza ciudadana para el uso de los avances tecnológicos.

Los delitos que afectan la confianza ciudadana en los instrumentos de control económico y en la economía nacional como bien de todos. Delitos económicos, fraudes financieros, bursátiles, societarios, etc.

El enriquecimiento ilícito, no sólo como forma de corrupción oficial sino privada se consagra como delito autónomo, consistente en un incremento patrimonial sin causa, derivado de cualquier forma de actividad delictiva.

3. No hay delito sin culpabilidad:

El código penal será un instrumento de persecución del delito, como hecho antisocial que desestabiliza las condiciones normales de convivencia pacífica, dando paso a la inseguridad social. No obstante, la persona que realiza el hecho, no adquiere una responsabilidad penal por sólo producir el resultado, si éste no se corresponde con una culpabilidad expresada en una intención consciente y voluntaria de violentar la norma penal.

4. Derecho Penal Subjetivo:

Honduras da paso de un derecho penal objetivo a un derecho penal subjetivo que castiga al delito por la peligrosidad del delincuente y no por el resultado producido, entendida la peligrosidad no como condición personal, sino como culpabilidad o intención consciente y voluntaria de violar o poner en peligro un bien jurídico. (la pena se graduará según el grado de culpabilidad).

En este sentido, se suprimen todas las formas de delito agravado por el resultado como el abandono seguido de muerte, secuestro seguido de muerte; ya que si el resultado fue previsto como posible o era previsible, la persona debe responder no sólo por el dolo directo sino también por el dolo eventual. El delito y la pena se determinan por la culpabilidad del agente.

5. Derecho Penal de acto y no de autor:

La persona que resulte culpable se sancionará por lo que voluntaria y conscientemente hizo o dejó de hacer para producir el resultado, o por la imprudencia de su conducta y no por lo que ella ha sido. En este sentido, imputaciones anteriores, la reincidencia, los antecedentes penales; no podrán ser considerados para deducir culpabilidad o para agravar la pena.

6. Principio de legalidad:

En virtud de este principio que ordena que la norma penal sea escrita, clara, precisa y concisa; cada tipo penal comprenderá todos los elementos constitutivos del mismo, sin que sea necesario acudir a otras normas o regulaciones para entender el sentido o para completar su contenido.

Desaparecen del proyecto normas penales oscuras, incompletas, en blanco o de reenvío que no permiten que cualquier persona de normal entendimiento pueda saber exactamente lo que la norma prohíbe o exige.

Igualmente, como garantía fundamental, se consagra en desarrollo de este principio la prohibición de aplicar norma no vigente al momento de la realización del delito y la prohibición de aplicar pena o medida de seguridad no prevista en la ley previa al hecho o en forma indeterminada.

7. Principio de legalidad para las medidas de seguridad:

Haciendo extensivo como es lógico, la aplicación del principio de legalidad, no sólo al delito y la pena sino también a la medida de seguridad, se prohíben las medidas de seguridad indeterminadas en el tiempo, pues no se puede imponer una medida más severa a una persona por tener enfermedad o deficiencia mental, sino que ella se debe corresponder con la gravedad de la acción.

También se prohíbe la aplicación de medidas de seguridad a personas que resulten inocentes, pues la medida no se impone por ser la persona enferma sino porque esa causa de inimputabilidad lo ha llevado a cometer un hecho prohibido en la ley penal y por tanto, constituye un peligro para la sociedad. Se pasa así, de la aplicación de un derecho tutelar o de protección de la persona por tener una enfermedad o deficiencia mental, a un derecho penal de protección social.

8. Principio de igualdad y proporcionalidad:

Este principio adquiere desarrollo no en la aplicación de normas iguales a personas desiguales, sino en aplicar a la misma situación de hecho la misma situación de derecho y hacer la pena equivalente al grado de culpabilidad. (la pena se graduará de acuerdo con el mayor o menor grado de culpabilidad).

9. Principio de no retroactividad de la ley penal y de favorabilidad:

El proyecto de Código Penal no sólo da desarrollo al principio constitucional que indica que la norma penal sólo tendrá efecto retroactivo en cuanto favorezca al reo, sino que además consagra el principio de interpretación extensiva en sentido favorable, no como simple aplicación analógica sino como búsqueda del sentido del tipo para aplicarlo a situaciones similares.

10. Principio de lesividad:

En virtud de este principio, la ley penal sólo se aplicará en la medida que resulte socialmente dañosa, en que haya lesionado en forma significativa el bien jurídico protegido. Esto permitirá la aplicación de causales supralegales de justificación.

11. Principio de inherencia.

Este principio es desarrollo del concepto de la prohibición de doble imputación, en cuanto un hecho o una circunstancia no puede ser apreciado dos veces para agravar la pena a imponer. No se puede aplicar un agravante si éste hace parte del tipo penal.

12. Principio de unidad de elemento psicológico.

En oposición al principio de unidad de acción típica, el principio de unidad de elemento psicológico permite que dos personas que realicen la misma conducta pueden responder por dos delitos diferentes. Cuando la norma penal exige un sujeto activo determinado como ser empleado público, la persona que realice la conducta con él y por tanto, obedeciendo al mismo propósito criminal, aunque no reúna la calidad, no queda impune sino que responde por el delito genérico.

13. Principio de accesoriedad:

En desarrollo de este principio la suerte del cómplice sigue la del autor principal, de tal forma que si éste es favorecido por una amnistía, un indulto, un perdón de la víctima, en los casos que procede, etc. Igual beneficio recibirá el cómplice.

14. Responsabilidad de las personas jurídicas:

El proyecto de Código no sólo consagra la responsabilidad de las personas naturales sino también de las personas jurídicas, cuando constituye política institucional el facilitar o utilizar o valerse de la entidad para la realización de delitos previstos en la ley penal, general o especial. Las personas jurídicas podrán ser disueltas, suspendidas, multadas. Cuando la multa no se hace efectiva se puede convertir en suspensión de operaciones.

15. Responsabilidad negativa:

La insolidaridad ciudadana, cada vez más creciente que lleva a que una persona

pueda conocer que se va a realizar un delito y sin que ello implique ningún peligro para su seguridad individual o familiar, pudiendo informar, guarda silencio consintiendo que el delito se realice y que el daño social se produzca, debe responder por su participación negativa en el delito ejecutado.

Con esta norma, se está diciendo que la convivencia ciudadana en condiciones de seguridad no sólo es responsabilidad de las autoridades sino de todos los miembros de la sociedad, sin que con ello se esté violando el principio de no autoincriminación o de sus parientes ya que en este caso estaría fuera del presupuesto de "pudiendo informar".

16. Función de la Pena:

Dando desarrollo constitucional al principio que la pena tiene una función resocializadora, de preparación para el trabajo, además de buscar que sea eminentemente reeducadora, las penas de por vida o cadena perpetua, tendrán una aplicación restringida para los delitos muy graves.

En este mismo sentido, teniendo en cuenta los principios Constitucionales de igualdad y de función de la pena, las personas condenadas de por vida, tienen derecho a que cumplidos veinte años de la pena o setenta años de edad, el Juez de Ejecución pueda por buena conducta y por trabajo y estudio, sustituir la pena de prisión en Centro Penitenciario, por detención domiciliaria o en lugar de trabajo, o por fines de semana.

Por otra parte para armonizar el Código Penal con el Procesal Penal que permite diversas formas alternativas de solución de conflictos, atendiendo al Quantum de la pena y el grado de culpabilidad del partícipe, los límites mínimos se reducen para que el Ministerio Público y el Juez puedan, en cada caso concreto, atendiendo a la culpabilidad o mínima participación aplicar los criterios de oportunidad, la suspensión condicional de la acción, la suspensión condicional de la pena etc.

17. Sistema de días – multa y valor de salario para cuantías:

La multa se fija en valor de días de salario mínimo, de tal forma que el Juez al aplicar la multa como pena principal o accesoria pueda graduarla de acuerdo con la capacidad económica del penado, aplicando un principio de proporcionalidad, evitando con ello que la pena resulte desigual para personas con capacidad económica que para las de escasos recursos, quienes por no poder pagar la multa deben sufrir privación de la libertad al hacerse la conversión de pena.

Igualmente, en el mismo sentido se cambia del sistema de cuantías determinadas que en poco tiempo se vuelven irrisorias, por el sistema de actualización permanente de las cuantías en los delitos patrimoniales fijándolos en días de salario mínimo.

18. Trabajo como mecanismo de rehabilitación y no como forma de pena:

Se elimina la reclusión en cuanto se diferencia de la prisión en la obligación de trabajar en obras públicas. Igualmente, la obligación de trabajar como parte de la pena de prisión.

Esto no sólo responde a la concepción constitucional del trabajo como derecho y no como obligación o pena (art. 127) sino que además, responde a la filosofía moderna en cuanto el trabajo y estudio deben ser medios de rehabilitación social y servir como mecanismo legal, como instrumento de política penitenciaria para lograr la disminución del tiempo de pena impuesta. Esto estimula a los internos a adoptar un mejor comportamiento.

19. Sistema de alternitud para el Cumplimiento de la pena privativa de la libertad:

La pena principal de prisión cumplida en centro penitenciario sólo debe ser la regla para las personas que hayan demostrado un grado máximo de culpabilidad y representen un peligro para la sociedad. Por tanto, aunque el delito tenga prevista como pena principal la prisión, atendiendo a la culpabilidad y la personalidad de la persona penada, el Juez podrá disponer que cumpla la pena en su lugar de residencia, en el lugar de trabajo o que sólo cumpla privación de libertad los fines de semana.

Con este sistema alternativo de lugar de cumplimiento de la pena, se busca precisamente la rehabilitación a través del contacto familiar, social y del trabajo. Además, se impide que las consecuencias de la pena trasciendan a la familia de la persona penada, o a las personas que dependen económicamente de ella.

20. Cumplimiento de medida de seguridad en Centro Especializado:

Si partimos que el fin de la medida de seguridad es lograr la curación o rehabilitación del inimputable para que deje de ser un peligro para la sociedad, su

tratamiento debe llevarse a cabo en un Centro Especializado de carácter oficial o privado aprobado, y no en un anexo de un Centro de Cumplimiento de Pena que lo que ejercen es más control que rehabilitación o cura.

Solamente se debe acudir al anexo del Centro de Cumplimiento de Pena cuando no exista Centro Especializado

21. Equiparación punitiva del delito consumado y de la tentativa:

Cuando un delito no llega a consumarse por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona que quiere su realización, por ejemplo porque intervino oportunamente la policía, o porque fue atendida médicamente, o porque tuvo suerte, etc. Esta persona no tiene porque resultar beneficiada por ello, obteniendo en su caso una pena menor al delito consumado ya que la persona debe responder por su grado de culpabilidad, por la intención criminal que demuestra su peligrosidad y no por el resultado obtenido, el cual en este caso escapó a su voluntad.

El caso fortuito, en este caso, beneficia a la víctima, como en otras ocasiones beneficia a quien realiza la conducta para eximirlo de culpabilidad.

En la tentativa, el bien jurídico protegido aunque no se violó si se afectó porque su órbita de protección fue invadida. Al igual que en el delito consumado, en la tentativa existe la lesividad del bien jurídico.

22. Ampliación del concepto de inimputabilidad:

Las causales de inimputabilidad como capacidad de entender la conducta antijurídica y de actuar conforme a esa comprensión, se amplía a cualquier tipo de enfermedad mental y no sólo a la psicosis como actualmente se regula y además, se prevén todas las formas de inmadurez psicológica que impidan a la persona entender el carácter ilícito de su conducta para poder actuar conforme a ese entendimiento.

También se incluye no como forma de enfermedad mental o inmadurez psicológica sino como patrón cultural diverso, el caso de la inimputabilidad del indígena que precisamente con base en esos patrones culturales no está en capacidad de entender el injusto penal y de adecuar su conducta conforme a esa comprensión.

La adecuación social del injusto debe comprender a todos los miembros de la

sociedad.

23. Justicia Penal Gratuita:

Teniendo en cuenta un principio universalmente aceptado que la administración de justicia penal debe ser uno de los servicios a cargo del Estado, por tanto no debe resultar onerosa para los sujetos pasivos de su persecución, no se incluye en el proyecto el pago de las costas procesales a cargo de la persona condenada.

Consecuente con este principio resultó la creación en el nuevo Código Procesal Penal de la Defensa Pública de Oficio para garantizar en condiciones de igualdad un juicio justo y efectivo.

Tampoco se incluye las costas personales, ya que este no es un problema del Juez Penal, sino de la persona condenada y las personas que le brindaron algún servicio durante el proceso.

24. Concepción de la Parte General como inspiradora y reguladora de todo el Código

Teniendo en cuenta que la parte general del Código debe ser la fuente de interpretación y aplicación de la parte especial sobre los delitos y las faltas, se eliminan de ésta todo lo constituye una reiteración de la antijuridicidad o del dolo, (frases como en forma ilegal, o injusta, o a sabiendas, o conociendo). Al igual, que las que indican la forma de responsabilidad penal (autor, partícipe, cómplice) y todas las disposiciones que se deban resolver por las reglas de los concursos de delitos y las que indican que procede el decomiso de los instrumentos, productos o efectos del delito.

25. Doctrina moderna recogida en la redacción:

La doctrina, como fuente de derecho está recogida en el proyecto del Código Penal, sin que ello signifique afiliación a ninguna teoría en especial sino claridad y precisión en la redacción para evitar injusticias a través de erradas interpretaciones.

26. Código Integral:

La consagración de tipos penales en distintas normas dispersas dificulta su comprensión y el conocimiento de su vigencia, no sólo a los no letrados en derecho sino a los propios abogados, por ello con el proyecto del nuevo Código Penal se hace una integración de toda la normatividad penal, con excepción de la materia de drogas, así tenemos los delitos relativos a la ley contra la violencia domestica, la ley de instituciones del sistema financiero, ley de derechos de autor y derechos conexos, ley contra el enriquecimiento ilícito de servidores públicos, código Tributario, ley Electoral y de las organizaciones políticas.

27. Armonización con otras leyes:

El proyecto de Código ha sido armonizado con el nuevo Código Procesal Penal y con los ante proyectos de Ley del Sistema Penitenciario, ley de convivencia ciudadana y la ley de Corrupción administrativa a fin de presentarlo como un sistema coherente, completo, evitando repeticiones de normas, contradicciones entre ellas o vacíos legales. Así, por ejemplo, se ha eliminado del Proyecto de Código Penal toda referencia a los lugares de cumplimiento de Pena y a la separación de los diversos tipos de internos, ya que esta debe ser materia de regulación de la ley del Sistema Penitenciario.

Igualmente, no se incluye en el Proyecto de Código Penal ninguna norma relativa al régimen de la acción penal o la legitimación para promover la acción penal, ya que esto es materia procesal y no sustantiva.

28. Identidad de estructura:

El código actual no responde a una estructura única, en muchos casos en un artículo describe la conducta y en otros define la sanción. Para aplicar una mejor técnica legislativa, se mantendrá una sola forma de redacción, así:

La Parte General contendrá los principios y criterios orientadores de la aplicación de la norma penal.

La Parte Especial, describirá en forma clara, precisa y estricta los delitos y faltas en particular.

Los delitos se agruparán siguiendo el bien jurídico protegido.

Cada delito y falta se denominará de acuerdo con el bien o la acción exigida o la omisión penada, y seguirá el siguiente orden:

Sujeto activo

Conducta: modelo descriptivo activo u omisivo

Objeto de protección

Ingredientes especiales (normativos, subjetivos)

Sanción

En el mismo sentido, para describir conductas de sujeto activo indeterminado, se utilizará un genero neutro, como la persona o quien.

Se redactará en presente, teniendo en cuenta que la norma estará siempre en presente para quien realiza la conducta y para quien la aplica.

Todos los artículos tendrán un nombre que permita entender u orientar su sentido.

Enriquezca esta página con sus comentarios





Marco Teórico

Código Penal (Borrador)

INDICE

LIBRO I. PARTE GENERAL

TÍTULO I. Infracción a la ley penal.

CAPÍTULO I. Principios fundamentales y de aplicación de la ley penal

CAPÍTULO II. Infracciones a la ley penal

CAPÍTULO III. Realización y aplicación de la ley penal

Título II. Responsabilidad penal.

CAPÍTULO I. Autoría y Participación.

CAPÍTULO II. Concurso de infracciones

CAPÍTULO III. Causas que eximen de responsabilidad penal

Título III. Circunstancias.

CAPÍTULO I. Circunstancias que atenúan la responsabilidad penal

CAPÍTULO II. Circunstancias que agravan la responsabilidad penal

CAPÍTULO III. Circunstancias que modifican la responsabilidad penal

CAPÍTULO IV. Circunstancias mixtas.

Título IV. Punibilidad.

CAPÍTULO I. Función y clasificación de la pena

CAPÍTULO II. Duración y computo de las penas

CAPÍTULO III. Criterios para la fijación de la pena

CAPÍTULO IV. Conmutación de la pena

CAPÍTULO V. Lugar o forma de cumplimiento de la pena

CAPÍTULO VI. Alternatividad del lugar y forma de cumplimiento de la pena

CAPÍTULO VII. Abono de pena por trabajo y estudio

CAPÍTULO VIII. Suspensión y sustitución de la pena

TÍTULO V. Medidas de seguridad.

CAPÍTULO I. Función y clasificación de las medidas de seguridad

CAPÍTULO II. Límites, Criterios y lugares de las medidas de seguridad

Título VI. Responsabilidades derivadas de la infracción a la ley penal.

CAPÍTULO I. Responsabilidad civil

CAPÍTULO II. Responsabilidad civil en caso de eximente de responsabilidad

CAPÍTULO III. Responsabilidad civil en casos de extinción de punibilidad

CAPÍTULO IV. Devolución por el enriquecimiento sin causa

CAPÍTULO V. Comiso

CAPÍTULO VI. Rehabilitación

Título VII. Extinción de la acción penal, civil y de la pena

CAPÍTULO Único. Extinción

Título VIII. Definiciones para efectos penales.

LIBRO II

PARTE ESPECIAL

Título I. Delitos contra la vida y la integridad personal

CAPÍTULO I. Delitos contra la vida

CAPÍTULO II. Aborto

CAPÍTULO III. Alteración genética

CAPÍTULO IV Lesiones

CAPÍTULO V. Abandono o explotación de personas desvalidas

Título II. Delitos contra la libertad.

CAPÍTULO I. Secuestro

CAPÍTULO II. Apoderamiento y desvío de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo.

CAPÍTULO III. Detención ilegal

CAPÍTULO IV. Sustracción de menores e incapaces

CAPÍTULO V. Delitos contra la libertad de obrar

CAPÍTULO VI. Delitos contra la libertad política

CAPÍTULO VII. Delitos contra la libertad sexual.

Título III. Delitos contra la intimidad

CAPÍTULO I. Violación de comunicaciones y asuntos reservados

CAPÍTULO II. Delitos contra la inviolabilidad de habitación.

TÍTULO IV. Delitos contra la familia

CAPÍTULO I. Incesto

CAPÍTULO II. Violencia intrafamiliar

CAPÍTULO III. Inasistencia

CAPÍTULO IV. Matrimonios ilegales

CAPÍTULO V. Alteración de maternidad o paternidad

CAPÍTULO VI. Delitos contra el estado civil de las personas

Título V. Delitos contra el honor

CAPÍTULO ÚNICO: Calumnia e injuria

Título VI. Delitos contra el patrimonio económico.

CAPÍTULO I. Hurto.

CAPÍTULO II. Extorsión y Chantaje

CAPÍTULO III. Estafa y otros fraudes.

CAPÍTULO IV. Estafa y fraudes financieros

CAPÍTULO V. Abuso de confianza

CAPÍTULO VI. Usurpaciones

CAPÍTULO VII. Daño

TÍTULO VII. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial

CAPÍTULO I. Derechos de autor.

CAPÍTULO II. Propiedad industrial

TÍTULO VIII. Delitos contra la economía nacional y el orden económico y social

CAPÍTULO I. Delitos contra la economía, el mercado y los consumidores

CAPÍTULO II. Delitos de las sociedades.

CAPÍTULO III. Urbanizaciones ilegales.

CAPÍTULO IV. Contrabando

CAPÍTULO V.- Defraudación fiscal

CAPÍTULO VI. Enriquecimiento Ilícito de particulares

TÍTULO IX. Delitos contra la Fe Pública

CAPÍTULO I. Falsedad en documentos

CAPÍTULO II. Falsificación de monedas

CAPÍTULO III. Falsificación de sellos y efectos oficiales

CAPÍTULO IV. Falsedad Personal

TÍTULO X. Delitos contra los recursos naturales.

Capítulo Único: Delito ambiental.

TÍTULO XI. Delitos contra la salud pública

CAPITULO UNICO. Delitos contra la salud.

TÍTULO XII. Delitos de peligro común y contra la seguridad y tranquilidad

públicas.

CAPÍTULO I. Incendio y estragos.

CAPÍTULO II. Delitos contra servicios públicos y medios de comunicación

CAPÍTULO III. Provocación de Pánico.

CAPÍTULO IV. Fabricación, tenencia, tráfico de sustancias u objetos peligrosos.

CAPITULO V. Terrorismo, concierto, apología del delito e instigación para delinquir

TÍTULO XIII. : Delitos contra la existencia y seguridad del Estado

CAPÍTULO I. Traición.

CAPÍTULO II. Espionaje

CAPÍTULO III. Delitos que comprometen la paz, la tranquilidad o dignidad de la Nación.

TITULO XIV. Delitos contra el régimen Constitucional.

CAPÍTULO I. Rebelión, sedición y asonada.

CAPITULO II. Delitos contra los poderes públicos y los órganos de control del Estado y contra los altos funcionarios del Estado.

CAPÍTULO III. Delitos contra la prohibición o limitación de la Participación ciudadana en la vida política del país

CAPITULO IV.- Delitos contra el ejercicio de otros derechos fundamentales

TÍTULO XV. Delitos contra la Administración Pública.

CAPÍTULO I. Malversación de caudales públicos

CAPÍTULO II. Cohecho y tráfico de influencias.

CAPÍTULO III. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones Públicas.

CAPÍTULO IV. Prevaricato.

CAPÍTULO V. Enriquecimiento ilícito de funcionarios

CAPÍTULO VI. Abusos de autoridad.

CAPÍTULO VII. Usurpación y abuso de funciones públicas

CAPÍTULO VIII. Desobediencia y ataque a funcionarios públicos.

TITULO XVI. Delitos contra la Administración de Justicia.

CAPÍTULO I. Negación o retardo de justicia.

CAPÍTULO II. Falsa denuncia y autoacusación

CAPÍTULO III. Falso testimonio y soborno

CAPÍTULO IV Infidelidad a los deberes profesionales.

CAPÍTULO V Fraude procesal.

CAPÍTULO VI. Encubrimiento.

CAPÍTULO VII. Evasión.

TITULO XVII. Delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.

CAPÍTULO I. Genocidio.

CAPÍTULO II. Ataques a personas protegidas por el Derecho Internacional

CAPÍTULO III. Toma de rehenes, detención ilegal y desaparición forzada.

CAPÍTULO IV Obstáculo u omisión de tareas sanitarias o de protección.

CAPÍTULO V Utilización de métodos o medios de guerra prohibidos.

**CAPÍTULO VI. Ataque a bienes protegidos por el derecho Internaciona
humanitario.**

LIBRO III.

FALTAS.

DISPOSICIONES FINALES.

Derogatoria y sustitución.

Vigencia.

Enriquezca esta página con sus comentarios



LEYES OPERACIONALES

(Enunciados de sus contenidos)

- **Código de Salud**
- **Reglamento de Salud Ambiental**
- **Ley general del Ambiente**
- **Reglamento General de la Ley del Ambiente**
- **Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de impacto Ambiental.**
- **Ley Forestal vigente**
- **Contenido del proyecto de nueva Ley Forestal**
- **Ley Temporal Zonas Inhabitables
(Contenido íntegro)**

CÓDIGO DE SALUD

El presente código de salud se encuentra contenido en el decreto legislativo número 65-91 de junio de 1991, publicado el martes 6 de agosto de 1991, en el número 20,509 del diario oficial La Gaceta.

Este código reafirma la responsabilidad estatal, así como la de toda persona natural o jurídica, para el fomento, recuperación y rehabilitación de la salud. La secretaría de salud pública es la entidad encargada de definir la política nacional de salud, de normatizar, planificar y coordinar todas las actividades públicas y privadas en el campo de la salud.

También define ámbitos de acción: en el nivel departamental y municipal actuará por medio de jefatura regionales y áreas sanitarias, observando principios de coordinación y descentralización administrativa.

Contenido

Título preliminar

- Capítulo I. Disposiciones Generales
- Capítulo II. Consejos Consultivos Nacionales de Salud

- Libro I. Título único y de los derechos y deberes relativos a la salud familiar y colectiva y medio ambiente
- Libro II. De la promoción y protección de la Salud.

Título I. Saneamiento del medio ambiente

- Capítulo I. Del Agua
Aguas Pluviales
- Capítulo II. Disposición final de las aguas pluviales, negras, servidas y excretas
- Capítulo III. Del Aire y su contaminación
- Capítulo IV. De los residuos sólidos
- Capítulo V. De las edificaciones
- Capítulo VI. De los artículos de uso doméstico

Título II. De los alimentos y de las bebidas

Título III. De la salud ocupacional

Título IV. De la seguridad industrial

Título V. De las sustancias peligrosas

- Libro III. De la recuperación de la salud

Título I. De los productos farmacéuticos y equipo de oficina

Título II. De las instituciones de salud

Título III. De las profesiones de la salud

Título IV. Vigilancia y control epidemiológico

Título V. Desastres y emergencias

Alarmas

Libro IV. De la disposición de cadáveres

Capítulo I Disposiciones generales
De las sanciones

Capítulo II De las inhumaciones y exhumaciones

Capítulo III De los cementerios y crematorios

Título II. Medidas y actos administrativos

Título III. Procedimientos en las actuaciones de las autoridades de salud.

Título IV. Disposiciones finales y transitorias

REGLAMENTO GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

Este reglamento está contenido en el acuerdo presidencial número 0094 del 11 de Junio de 1997, publicado en el número 28, 593 del diario oficial La Gaceta del sábado 20 de Junio de 1998.

Se reafirma en este acuerdo el deber del Estado de velar por la salud de la población, para que toda persona pueda vivir en ambientes saludables, al mismo tiempo que se le recomienda protegerlo y mejorarlo. Le compete a la secretaría de salud reglamentar o normar todas las actividades en este campo. El objetivo fundamental de este reglamento es desarrollar el conjunto de reglas para hacer cumplir las disposiciones contenidas en el código de salud.

- Capítulo I. Disposiciones Generales
- Capítulo II. De los Fines y objetivos de este reglamento
- Capítulo III. Definiciones y organismos
- Capítulo IV. Del Agua
- Capítulo V. De la disposición final de las aguas pluviales, negras, servidas y excretas.
- Capítulo VI. Del aire, su contaminación y control
- Capítulo VII. De los residuos sólidos (basuras)
- Capítulo VIII. De las infracciones
- Capítulo IX. De la salud ocupacional
- Capítulo X. De la seguridad industrial
- Capítulo XI. De las sustancias peligrosas
- Capítulo XII. De la protección sanitaria
- Capítulo XIII. Desastres y emergencias
 - De la prevención de los desastres y emergencias
 - Alarmas
- Capítulo XIV. De la disposición de cadáveres
 - Sección Primera: De la práctica de la autopsia hospitalaria obligatoria
 - Sección Segunda: Del traslado internacional de cadáveres o restos humanos.
 - Sección Tercera: De las inhumaciones y exhumaciones
 - Sección Cuarta: De los Cementerios y los crematorios
- Capítulo XV. De las medidas y actos administrativos
 - Sección primera: De las licencias
 - Sección Segunda: De las medidas preventivas
 - Sección Tercera: De las sanciones, infracciones contra la salud ambiental.
- Capítulo XVI. De las autoridades de salud y procedimientos en sus actuaciones.
 - Sección Primaria: De las autoridades de salud
 - Sección Segunda: Del procedimiento en las actuaciones
- Capítulo XVII. De las disposiciones finales y transitorias

LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Decreto No. 104-93

La Gaceta, 30 de Junio de 1993

CONTENIDO GENERAL DE ESTA LEY

El Estado según La Constitución de la República, conservará el ambiente adecuado para proteger la salud de las personas, declarando la utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación.

La Ley plantea como un deber del Estado, propiciar un estilo de desarrollo que, a través de la utilización adecuada de los recursos naturales y del ambiente, promueva la satisfacción de las necesidades básicas de la población presente sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades.

Establece que la problemática ambiental del momento, requiere de una organización y estructura administrativa que responda de forma coherente e integral a nuestra situación ambiental. Se considera también, que la participación de la comunidad es imprescindible para lograr la protección, conservación y uso racional de la riqueza natural del país y del ambiente en general.

Por último, se enfatiza en los reclamos ciudadanos por una legislación para una apropiada gestión ambiental que permita la construcción de una conciencia nacional alrededor del tema ambiental.

Título I. Principios y Objetivos

Capítulo I. Principios Generales

Capítulo II. Objetivos

Título II. Gestión Ambiental

Capítulo I. Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente

Del consejo consultivo

Del comité técnico asesor

Capítulo II. La procuraduría del ambiente

Capítulo III. Competencias

Título III. Protección del ambiente y uso racional de los Recursos naturales

Capítulo I. Aguas Continentales y marítimas

Capítulo II. Protección de la Naturaleza

Sección "A" Aspectos Generales

Sección "B" Flora y Fauna Silvestre

Sección "C" Bosques

Capítulo III. Suelos
Sección “A” Usos agrícolas, pecuarios y forestales
Sección “B” Usos Urbanos e Industriales
Capítulo IV Recursos Marinos y Costeros

Capítulo V. Atmósfera
Capítulo VI. Minerales e hidrocarburos

Título IV. Elementos ambientales distintos a los Recursos Naturales

Capítulo I. Residuos Sólidos y orgánicos
Capítulo II. Productos Agroquímicos tóxicos y peligrosos
Capítulo III. Patrimonio histórico, cultural y recursos turísticos
Capítulo IV. Ambiente y Salud Humana

Título V. Disposiciones Especiales para la Protección del Medio Ambiente

Capítulo I. Aspectos Generales
Capítulo II. Inspección y Vigilancia
Capítulo III. Educación Ambiental

Título VI. Infracciones

Capítulo I. Delitos e infracciones administrativas, Aspectos Generales
Capítulo II. Delitos Ambientales
Capítulo III. Infracciones Administrativas
Capítulo IV. Recursos

Título VII. Disposiciones finales.

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL AMBIENTE.

Antecedentes

El reglamento de la Ley del Ambiente se encuentra contenida en el acuerdo número 109-93 del 20 de Diciembre de 1993, en el número 27267 de La Gaceta del sábado 5 de Febrero de 1994.

Este acuerdo Legislativo determina que la problemática ambiental requiere de una organización administrativa que responda en forma coherente, armónica e integral de nuestra situación ambiental, por lo que se requiere de la normatividad necesaria que facilite la mejor aplicación de la ley.

Título I. Disposiciones Generales

Capítulo I. Objetivos y ámbito de aplicación

Capítulo II. Principios generales

Título II. La Secretaría de Estado en el Despacho del ambiente

Capítulo I. Objetivos y funciones

Capítulo II. Organización

Capítulo III. Secretario de Estado

Capítulo VI. Sub- Secretario

Capítulo V. Oficialía Mayor

Capítulo VI. El Consejo Consultivo Nacional del Ambiente

Sección Primera: Carácter

Sección Segunda: Integración

Sección Tercera: Las Funciones

Sección Cuarta: Organización Interna

Capítulo VI. El comité técnico Asesor

Capítulo VIII. La Asesoría Legal

Capítulo IX. Las Direcciones generales

Sección Primera: La Dirección General de Políticas y Planificación Ambiental.

Sección Segunda: La Dirección General de Evaluación de Impacto y Control Ambiental.

Sección Tercera: La Dirección General de Desarrollo Ambiental

Capítulo X. La Auditoría Interna

Capítulo XI. La Procuraduría del Ambiente

Sección Primera: Organización

Sección Segunda: Funciones

Sección Tercera: Relaciones con la Secretaría del Ambiente

Sección Cuarta: Funcionamiento de la Procuraduría

Capítulo XII. Competencias

Sección Primera: Las Municipalidades
Sección Segunda: Secretaría del Ambiente y las municipalidades

Título III. Protección del ambiente y uso racional de los recursos naturales

Capítulo Único

Título IV. Elementos ambientales distintos a los recursos naturales

Capítulo I. Patrimonio histórico, cultural y recursos turísticos

Capítulo II. Ambiente y salud humana

Título V. Disposiciones especiales para la protección del medio ambiente.

Capítulo I. Inspección y vigilancia, reconocimientos

Sección Primera: Inspección y Vigilancia

Sección Segunda: Derecho a la Participación y a la información, reconocimientos.

Sección Tercera: Normatización

Capítulo II. Educación Ambiental

Título VI. Infracciones

Capítulo I. Delitos e infracciones administrativas

Capítulo II. Delitos Ambientales

Capítulo III. Las infracciones administrativas

Sección Primera: Concepto y Clasificación

Sección Segunda: Infracciones leves

Sección Tercera: Infracciones menos graves

Sección Cuarta: infracciones Graves

Capítulo IV. Sanciones

Sección Primera: Clasificación

Sección Segunda: Sanciones e infracciones administrativas

Sección Tercera: Procedimiento

Disposiciones Generales y Transitorias.

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

El acuerdo presidencial que contiene este reglamento fue emitido el 17 de Diciembre de 1993 y entró en vigencia el sábado 5 de Marzo de 1994, publicado en el número 27291 del diario oficial La Gaceta.

Con la creación de este acuerdo, se considera necesario dotar a la ley de una norma reglamentaria que defina el sistema de evaluación de impacto ambiental para asegurar el desarrollo sostenible del país, asimismo, busca proveer de un instrumental técnico que permita armonizar las actividades de desarrollo con la calidad del ambiente que asegure la productividad sostenible de los proyectos.

Contenido

Capítulo I	Principios y objetivos
Capítulo II	Definiciones y conceptos
Capítulo III	Funcionamiento del SINELA
Capítulo IV	Procedimiento operativo
Capítulo V	Artículos transitorios
Anexos:	
Anexo A	Criterios para determinar si un proyecto requiere o no de una Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.)

LEY FORESTAL

La siguiente ley se encuentra contenida en el decreto 85 de Noviembre de 1971 y publicado en el diario oficial de la República de Honduras “La Gaceta”, el Sábado 4 de Mayo de 1972. Tiene como propósito: maximizar los beneficios directos e indirectos de los recursos existentes, en las zonas forestales, asegurando su protección y mejoramiento, así como la racionalización en su aprovechamiento, industrialización y comercialización de los productos forestales. Para el logro de lo anterior la ley plantea como objetivos:

- Perfeccionar la capacidad administrativa y técnica en materia forestal del Estado.
- Mantener y administrar el patrimonio público forestal, impidiendo la ocupación ilegal, regulando su aprovechamiento público, como todas las actividades forestales privadas.
- Esta ley también contempla la promoción de las industrias forestales, como el fomento de las asociaciones, cooperativas forestales y la creación del seguro forestal.
- Por último, se contempla la prevención y combate a las infracciones forestales.

Contenido

Capítulo I.	Generalidades
Capítulo II.	De la administración General del Estado
Capítulo III.	Definición, clasificación, declaración, régimen administrativo de las zonas y áreas forestales.
Capítulo IV.	Catálogo del patrimonio público forestal inalienable
Capítulo V.	Deslinde y amojonamiento de las áreas forestales públicas
Capítulo VI.	Ocupación de áreas forestales públicas
Capítulo VII.	Protección de las áreas forestales. Atribuciones de la administración forestal del Estado, Parques Nacionales
Capítulo VIII.	De la conservación de suelos, agua y protección de márgenes fluviales y lacustres.
Capítulo IX.	Del Tratamiento y aprovechamiento de las áreas forestales. <ul style="list-style-type: none">- De la adjudicación- Del contrato de suministros de productos forestales- De los permisos de aprovechamiento en gran escala- De las licencias de aprovechamiento- Disposiciones generales
Capítulo X.	De las Industrias Forestales

- Capítulo XI. Unidades Forestales. Asociaciones y Cooperativas Forestales
- Capítulo XII. Fondo Forestal Nacional
- Capítulo XIII. Infracciones Forestales
- De los delitos forestales
 - De las faltas forestales
 - Disposiciones comunes a los delitos y faltas forestales
 - Disposiciones complementarias.
 1. Zonas forestales protegidas
 2. Zonas de interés forestal.
 - disposición derogatoria

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LA NUEVA LEY FORESTAL

Título I	3
Disposiciones Generales	3
Capítulo I.....	3
Finalidad y Ámbito de Aplicación.....	3
Capítulo II.....	6
Definiciones.....	6
Título II	9
Aspectos Institucionales	9
Capítulo I	9
Políticas Forestales y Función Normativa.....	9
Capítulo II.....	10
Servicio Forestal Nacional.....	10
Título III	16
Régimen Jurídico-Administrativo de Los Bosques	16
Capítulo I.....	16
Propiedad Forestal.....	16
Capítulo II.....	19
Régimen de Administración.....	19
Título IV	20
Manejo Forestal	20
Capítulo I.....	20
Aspectos Generales.....	20
Capítulo II.....	22
Manejo Forestal en Áreas Estatales.....	22
Capítulo III.....	24
Manejo Forestal en Áreas Forestales Privadas.....	24
Capítulo IV.....	24
Aprovechamientos Forestales.....	24
Capítulo V.....	25
Conservación del Uso Forestal.....	25
Capítulo VI.....	25
Protección Contra Incendios, Plagas y Enfermedades Forestales.....	25
Capítulo VII.....	26
Conservación y Protección de Suelos Y Aguas.....	26
Título V	27
Industrialización, Transporte y Comercialización	27
Capítulo I.....	27
Industrialización.....	27
Capítulo II.....	28
Transporte y Comercialización.....	28
Título VI	29
Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre	29
Capítulo I.....	29

Aspectos Generales.....	29
Capítulo II.....	30
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.....	30
Capítulo II.....	30
Vida Silvestre	30
Título VII	31
Forestería Comunitaria	31
Capítulo I.....	31
Aspectos Generales.....	31
Capítulo II.....	32
Asentamientos y Reasentamientos Humanos.....	32
Título VIII	33
Medidas de Fomento	33
Capítulo I.....	33
Disposiciones Generales.....	33
Capítulo II.....	34
Incentivos a la Forestación y Reforestación.....	34
Capítulo III	34
Incentivos a la Conservación y Protección	34
Capítulo IV.....	35
Incentivos al Manejo de Bosques Privado	35
Capítulo V	35
Incentivos a la Industrialización	35
Título IX	35
Regencia Forestal	35
Capítulo I.....	35
Funciones.....	35
Título X	36
Infracciones y Sanciones	36
Capítulo I.....	36
Aspectos Generales.....	36
Capítulo II.....	36
Delitos Forestales	36
Capítulo III	38
Faltas Administrativas	38
Disposiciones Finales y Transitorias	40

DECRETO No. 302-98

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que el Huracán y Tormenta Tropical Mitch, ha dejado zonas aledañas a las vertientes de agua y ríos, en condiciones no aptas para la construcción de casas, edificios y plantas industriales, sin que medie un estudio serio que demuestre la realidad existente.

CONSIDERANDO: Que son las municipalidades las que deben conocer a ciencia cierta las condiciones de las zonas inhabitables, previo estudio formal de éstas por personal profesional competente, dándole el seguimiento correspondiente.

CONSIDERANDO: que en zonas inhabitables hay muchas personas afectadas en bienes, por lo que se deben hacer las consultas y los estudios necesarios para evitar al máximo la afectación innecesaria de sus prioridades.

CONSIDERANDO: Que existen muchas personas que desean regresar a reconstruir sus viviendas sin los estudios respectivos que garanticen la vida de sus ocupantes.

POR TANTO,

DECRETA:

La siguiente:

LEY TEMPORAL DE ZONAS INHABITABLES

ARTICULO 1.- Se prohíbe la edificación de viviendas, edificios habitacionales y plantas industriales en las zonas ubicadas en las vertientes de agua, ríos, riachuelos, quebradas y zonas con fallas geológicas, socavaciones, deslizamientos, laderas con suelos inestables y bordos de contención, que fueron afectados por el Huracán y Tormenta Tropical Mitch, en tanto, la municipalidad respectiva elabore en el término de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, un estudio completo por personal calificado en el cual se delimitan las áreas inhabitables.

Las viviendas que se encuentran en las zonas afectadas pero que no han sido dañadas en su estructura, podrán ser habitadas previo dictamen profesional competente aceptado por la Municipalidad respectiva.

Los costos de estos estudios serán sufragados por las municipalidades. Aquellas corporaciones municipales que no tengan capacidad económica, deberán orientar sus gestiones al Gobierno Central y otras Instituciones para cumplir su responsabilidad.

ARTICULO 2.- Que el Estado, de los recursos provenientes de las ayudas de los países amigos, destine una partida para cubrir los gastos que ocasionen los estudios municipales a que se refiere el párrafo tercero del Artículo 1 del presente Decreto.

ARTICULO 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

RAFAEL PINEDA PONCE
Presidente

JOSÉ ALFONSO HERNÁNDEZ CORDOVA
Secretario

JOSÉ ANGEL SAAVEDRA POSADAS
Secretario

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de diciembre de 1,998.

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE
Presidente Constitucional de la República

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

DELMER URBIZO PANTING



AVISOS

**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**

AVISO CONATEL

El infrascrito, Secretario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), al público en general y para los efectos de ley correspondiente, hace CONSTAR: Que en esta Dependencia ha presentado solicitud el Licenciado ENEAS PORTILLO, actuando en representación de MINISTERIO LA COSECHA, tendiente a que se le autorice permiso para instalar y operar una radioemisora en F.M. en la frecuencia de 104.5 MHZ, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y que ha sido registrada bajo el No. 980316BC30.

Esta publicación tiene por objeto, dar a conocer al público en general el trámite conducente al otorgamiento del Permiso. Cualquier interesado que tenga FUNDADO DERECHO E INTERES, tiene un plazo de 10 (diez) días contados a partir de esta publicación, para formular su oposición al trámite.

El presente aviso para los efectos del cumplimiento en el artículo 148 inciso c) de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 18 de Diciembre, 1998.

WALTER SANDOVAL
Secretario de CONATEL

16 E. 99.